



### INICIO DE SESIÓN

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 19:25 diecinueve horas con veinticinco minutos del día 28 veintiocho de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve; en las instalaciones que ocupa la sala de juntas en el segundo piso, del inmueble marcado con el número 200, de la calle Libertad esquina con Avenida 16 de Septiembre, en la colonia Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° y 9° del **DECRETO NÚMERO 25437/LXI/15** publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 19 de diciembre del 2015, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y atendiendo lo señalado en el Decreto número **27213/LXII/18** mediante el cual se abroga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y crea la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; así como el decreto número **27214/LXII/18**; en donde se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, y se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco; ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, expedidos por el Congreso del Estado, mismas que se publicaron en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día miércoles 5 cinco de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho; teniendo vigencia los mismos a partir del día 06 seis de Diciembre de 2018 dos mil dieciocho; por lo que conforme a los Transitorios Tercero, Cuarto, Quinto y Noveno; así mismo lo establecido en los numerales 7.1 fracciones II y III, 11 puntos 1 y 2 fracción I; 13, 16.1 fracción XV y 31 de la vigente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; en donde se enlistan las facultades y atribuciones de dependencias que integran la Administración Pública Centralizada, entre ellas: la Coordinación General Estratégica de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Estado; 26 del Reglamento Interno de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco, 9 fracción I, 13 fracción I, incisos a) y b), 15, 16 fracciones I y II del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco; 1°, 2°, 3°, 5°, 18, 24, 25, 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se procede a la reunión del Comité de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad del Estado, a efecto de analizar y emitir la correspondiente **MODIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN**, con motivo de la solicitud de acceso a la información que inicialmente se integró bajo el número de expediente **LTAIPJ/CGES/647/2019**; y en **CUMPLIMIENTO** a lo ordenado por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), en la sesión ordinaria celebrada el día **14 catorce de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve**, al resolver el **RECURSO DE REVISIÓN 2001/2019**, que fue notificado a la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco y Secretaría de Seguridad, que fue notificada a la cuenta oficial de la misma Unidad de Transparencia el día **15 quince de Octubre del presente año, a las 13:55 trece horas con cincuenta y cinco minutos**, por la Licenciada **MARIA DE LOURDES CANO VÁZQUEZ**, en donde se adjunta escaneo del oficio **CRH/1613/2019** de fecha 14 catorce del mismo mes y año, suscrito por el **C. PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ y KAREN MICHEL MARTÍNEZ RAMÍREZ**, en su calidad de Comisionado Ponente y Secretario de Acuerdos de la Ponencia del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, mediante el cual adjunta copias de la resolución emitida por acuerdo del pleno del referido Instituto, en el que se tuvieron a bien resolver conforme al punto **SEGUNDO** del apartado de **RESOLUTIVOS**, que se **MODIFICA** la respuesta del sujeto obligado y se le **REQUIERE** por conducto del Titular de su Unidad de Transparencia para que dentro del plazo de **10 diez días hábiles contados a partir de que surta efectos legales la notificación de la resolución**, realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, dicte una nueva respuesta a través de la cual entregue la totalidad de la información solicitada, y para el caso de que la reserva de información se actualizara de forma particular, se deberá agotar el procedimiento que establece la ley de la materia estatal en su artículo 18, para el caso concreto, es decir, que los supuestos de reserva se actualicen a tiempo presente. Debiendo informar su cumplimiento dentro de los tres días hábiles posteriores al término del plazo señalado; bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la misma, se aplicaran las medidas de apremio correspondientes a los servidores públicos que resulten responsables, de conformidad al artículo 103 de la referida ley, y el artículo 110 del Reglamento que de ella deriva, considerándose para ello la preclasificación sugerida por el área interna, para lo cual se procede a dar.



## REGISTRO DE ASISTENCIA

De conformidad con lo establecido por los artículos 28 y 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 10 de su Reglamento, 13 fracción I inciso a) y b), en correlación con los numerales 15, 16 fracción I y II del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco; se hace constar que la presente sesión se efectúa en la presencia de la totalidad de sus integrantes que conforman el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, asistiendo el LIC. OCTAVIO LÓPEZ ORTEGA LARIOS, Director General de Gestión Pública de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, En su calidad de suplente del Presidente del Cuerpo Colegiado de Transparencia y Titular del Sujeto Obligado, **Dr. Macedonio Salomón Tamez Guajardo**, Coordinador General Estratégico de Seguridad en el Estado de Jalisco; quien por cuestiones de agenda no fue posible acudir a la presente sesión de trabajo; siendo éstos lo que a continuación se enlistan:

### 1.- C. LIC. OCTAVIO LÓPEZ ORTEGA LARIOS.

Director General de Gestión Pública de la Coordinación General Estratégica de Seguridad.  
Suplente del Presidente del Comité de Transparencia y Titular del Sujeto Obligado.

### 2.- C. MTRO. JAVIER SOSA PEREZ MALDONADO.

Titular de la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y  
Secretaría de Seguridad del Estado.  
Secretario.

## ASUNTOS GENERALES

Asentada la constancia de **quórum**, la presente reunión tiene por objeto analizar y determinar el tipo de información pública que resulta aplicable al contenido de la solicitud de acceso a la información que se iniciara bajo el número de expediente **LTAIPJ/CGES/647/2019**; así como tomando en consideración a lo ordenado por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), en la sesión ordinaria celebrada el día **14 catorce de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve**, al resolver el **RECURSO DE REVISIÓN 2001/2019**, que fue notificado a la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco y Secretaría de Seguridad, que fue notificada a la cuenta oficial de la misma Unidad de Transparencia el día **15 quince de Octubre del presente año, a las 13:55 trece horas con cincuenta y cinco minutos**, por la Licenciada **MARIA DE LOURDES CANO VÁZQUEZ**, en donde se adjunta escaneo del oficio **CRH/1613/2019** de fecha 14 catorce del mismo mes y año, suscrito por el **C. PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ y KAREN MICHEL MARTÍNEZ RAMÍREZ**, en su calidad de Comisionado Ponente y Secretario de Acuerdos de la Ponencia del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, mediante el cual adjunta copias de la resolución emitida por acuerdo del pleno del referido Instituto, en el que se tuvieron a bien resolver conforme al punto **SEGUNDO** del apartado de **RESOLUTIVOS**, que se **MODIFICA** la respuesta del sujeto obligado y se le **REQUIERE** por conducto del Titular de su Unidad de Transparencia para que dentro del plazo de **10 diez días hábiles contados a partir de que surta efectos legales la notificación de la resolución**, realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, dicte una nueva respuesta a través de la cual entregue la totalidad de la información solicitada, y para el caso de que la reserva de información se actualizara de forma particular, se deberá agotar el procedimiento que establece la ley de la materia estatal en su artículo 18, para el caso concreto, es decir, que los supuestos de reserva se actualicen a tiempo presente. Debiendo informar su cumplimiento dentro de los tres días hábiles posteriores al término del plazo señalado; bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la misma, se aplicaran la medidas de apremio correspondientes al o los servidores públicos que resulten responsables, de conformidad al artículo 103 de la referida ley, y el artículo 110 del Reglamento que de ella deriva,



considerándose para ello la preclasificación sugerida por el área interna, respecto de la siguiente información en la que se solicita información consistente en:

**“...Pido lo siguiente en archivo Excel como datos abiertos, para ser entregado por Infomex o a mi correo electrónico.**

**Se me informe lo siguiente sobre la Secretaría de Seguridad Pública, con respecto a los sexenios de los ex gobernadores Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval, precisando por cada sexenio estatal:**

- a) Sexenio estatal en cuestión.
- b) Cuántos elementos o agentes de este sujeto obligado estuvieron asignados en total a funciones de escoltas en dicho sexenio.
- c) Del inciso anterior, se precise qué tipo de elementos o agentes fueron asignados a funciones de escoltas y cuántos por cada tipo (es decir, si eran Policías estatales, o de qué tipos).
- d) Cuántos vehículos en total de este sujeto obligado en total fueron utilizados para servicio de escoltas.
- e) Qué personas contaron con servicio de escolta gratuito en dicho sexenio, considerando la totalidad de personas con este servicio, tanto funcionarios, ex funcionarios, particulares y cualquier otra persona, precisando por cada persona:
  - i. Nombre y cargo o función.
  - ii. De qué fecha a qué fecha tuvo escoltas.
  - iii. Motivo por el que se le asignó escoltas.
  - iv. Cantidad de escoltas asignados.
  - v. Cuántos vehículos tuvo asignados...” (SIC)

#### CONSIDERANDO

I.- Que el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como al de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. En este orden, establece que, en principio, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

Por otra parte, establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; en esta vertiente, precisa que la Ley Reglamentaria establecerá aquella información que se considere reservada y confidencial.

II.- Que el artículo 16° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Del mismo modo, en su párrafo segundo refiere que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para **proteger los derechos de terceros**.

III.- Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la **seguridad pública** es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la **prevención de los delitos**, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias. Define que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución.



IV.- Que el artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, establece que el derecho a la información pública y la protección de datos personales será garantizado por el Estado, en los términos de lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las leyes especiales en la materia. Del mismo modo, el numeral 15 fracción IX del mismo ordenamiento legal establece que las autoridades estatales y municipales promoverán y garantizarán la transparencia y el derecho a la información pública, en el ámbito de su competencia.

V.- Que el artículo 8° apartado A de la Constitución Política del Estado de Jalisco señala que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dicha Constitución señalan.

VI.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios es el instrumento reglamentario de los artículos 6° apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 9° párrafo tercero y 15° de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Tiene por objeto garantizar y hacer efectivo el derecho de toda persona a solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar información pública de conformidad con lo establecido en dicha ley, así como clasificar la información pública en poder de los sujetos obligados. Lo anterior bajo el concepto de que información pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que surja con posterioridad.

VII.- Que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios es el instrumento reglamentario de los artículos 6° apartado A y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados.

VIII.- Que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) es un Organismo Público autónomo, encargado principalmente de promover la transparencia, garantizar el acceso a la información pública de libre acceso y proteger la información pública reservada y confidencial. Tiene como facultad emitir y publicar, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales, los lineamientos estatales en materia de clasificación de información pública; publicación y actualización de información fundamental; protección de información confidencial y reservada, entre otras; así como de interpretar la Ley y su Reglamento en el orden administrativo.

IX.- Que derivado del cumplimiento de las obligaciones que le devienen a dicho Organismo Público garante, el día 28 de mayo del año 2014 dos mil catorce el Consejo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), emitió los **Lineamientos Generales** en materia de Clasificación de Información Pública; los de **Protección de Información Confidencial y Reservada**; así como los de **Publicación y Actualización de Información Fundamental**; los cuales fueron debidamente publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 10 de junio del mismo año.

X.- Que los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de Información Pública descritos anteriormente, tienen por objeto establecer los rasgos característicos que deberán reunir los criterios generales en materia de clasificación de información pública que emitan los sujetos obligados, que serán la base para la clasificación o desclasificación de la información en forma particular, así como de las versiones públicas que en su caso se generan cuando los documentos tengan partes o secciones reservadas y/o confidenciales.

XI.- Que el día 15 quince de abril del año 2016 dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,



por el que se aprueban los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismo que se encuentra vigente a partir del día siguiente al de dicha difusión, y es considerado como un instrumento de observancia general para la federación, los estados y municipios, así como cualquier otro considerado como sujeto obligado, el cual tiene por objeto establecer criterios con base en los cuales clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas.

**XIII.-** Que esta Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco es sujeto obligado de conformidad con lo establecido en el artículo 24 punto 1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**XIV.-** Que una vez recibido y analizado lo ordenado por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), en la sesión ordinaria celebrada el día **14 catorce de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve**, al resolver el **RECURSO DE REVISIÓN 2001/2019**, que fue notificado a la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco y Secretaría de Seguridad, que fue notificada a la cuenta oficial de la misma Unidad de Transparencia el día **15 quince de Octubre del presente año, a las 13:55 trece horas con cincuenta y cinco minutos**, por la Licenciada **MARIA DE LOURDES CANO VÁZQUEZ**, en donde se adjunta escaneo del oficio **CRH/1613/2019** de fecha 14 catorce del mismo mes y año, suscrito por el **C. PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ y KAREN MICHEL MARTÍNEZ RAMÍREZ**, en su calidad de Comisionado Ponente y Secretario de Acuerdos de la Ponencia del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, mediante el cual adjunta copias de la resolución emitida por acuerdo del pleno del referido Instituto, en el que se tuvieron a bien resolver conforme al punto **SEGUNDO** del apartado de **RESOLUTIVOS**, que se **MODIFICA** la respuesta del sujeto obligado y se le **REQUIERE** por conducto del Titular de su Unidad de Transparencia para que dentro del plazo de **10 diez días hábiles contados a partir de que surta efectos legales la notificación de la resolución**, realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, dicte una nueva respuesta a través de la cual entregue la totalidad de la información solicitada, y para el caso de que la reserva de información se actualizara de forma particular, se deberá agotar el procedimiento que establece la ley de la materia estatal en su artículo 18, para el caso concreto, es decir, que los supuestos de reserva se actualicen a tiempo presente. Debiendo informar su cumplimiento dentro de los tres días hábiles posteriores al término del plazo señalado; bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la misma, se aplicaran las medidas de apremio correspondientes al o los servidores públicos que resulten responsables, de conformidad al artículo 103 de la referida ley, y el artículo 110 del Reglamento que de ella deriva, considerándose para ello la preclasificación sugerida por el área interna; lo anterior con motivo inicial de la solicitud de acceso a la información recibida por ese sujeto obligado vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con el número de folio **03996719**, misma que se tuviera radicada por la Unidad de Transparencia, registrándose bajo el número de expediente **LTAIPJ/CGES/647/2019**.

**XV.-** Que el Encargado del despacho de la Comisaría Jefe de la Coordinación General de Planeación Operativa del Comisario General de Seguridad de la Secretaría de Seguridad, tuvo a bien informar a la Unidad de Transparencia mediante oficio **CGPO/25131/2019**, de igual forma teniendo en cuenta lo señalado por el Director General de Administración en el libelo **SS/DGA/3002/2019**, y en donde se atiende lo ordenado por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), en la sesión ordinaria celebrada el día **14 catorce de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve**, al resolver el **RECURSO DE REVISIÓN 2001/2019**, que fue notificado a la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco y Secretaría de Seguridad, que fue notificada a la cuenta oficial de la misma Unidad de Transparencia el día **15 quince de Octubre del presente año, a las 13:55 trece horas con cincuenta y cinco minutos**, por la Licenciada **MARIA DE LOURDES CANO VÁZQUEZ**, en donde se adjunta escaneo del oficio **CRH/1613/2019** de fecha 14 catorce del mismo mes y año, suscrito por el **C. PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ y KAREN MICHEL MARTÍNEZ RAMÍREZ**, en su calidad de Comisionado Ponente y Secretario de Acuerdos de la Ponencia del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, mediante el cual adjunta copias de la resolución emitida por acuerdo del pleno del referido Instituto, en el que se tuvieron a bien resolver conforme al punto **SEGUNDO** del apartado de **RESOLUTIVOS**, que se **MODIFICA** la respuesta del sujeto obligado y se le **REQUIERE** por conducto del Titular de su Unidad de Transparencia para que dentro del plazo de **10 diez días hábiles contados a partir de que surta efectos legales la notificación de la resolución**, realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, dicte una nueva respuesta a través de la cual entregue la totalidad de la información solicitada, y para el caso de que la reserva de información se actualizara de forma particular, se deberá agotar el procedimiento que establece la ley de la materia estatal en su artículo 18, para el caso concreto, es decir, que los supuestos de reserva se actualicen a tiempo presente; con el que se sugiere que se de vista al Comité de Transparencia a efectos de que se entre al estudio de la información de referencia y se realice la modificación de la clasificación de la información; ya que de la misma se estima y se desprende que parte de ella encuadra en los supuestos de la **Confidencial**.



## ANÁLISIS

La presente sesión de trabajo se centra en analizar y atender lo ordenado por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), en la sesión ordinaria celebrada el día **14 catorce de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve**, al resolver el **RECURSO DE REVISIÓN 2001/2019**, que fue notificado a la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco y Secretaría de Seguridad, que fue notificada a la cuenta oficial de la misma Unidad de Transparencia el día **15 quince de Octubre del presente año, a las 13:55 trece horas con cincuenta y cinco minutos**, por la Licenciada **MARIA DE LOURDES CANO VÁZQUEZ**, en donde se adjunta escaneo del oficio **CRH/1613/2019** de fecha 14 catorce del mismo mes y año, suscrito por el **C. PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ y KAREN MICHEL MARTÍNEZ RAMÍREZ**, en su calidad de Comisionado Ponente y Secretario de Acuerdos de la Ponencia del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, mediante el cual adjunta copias de la resolución emitida por acuerdo del pleno del referido Instituto, en el que se tuvieron a bien resolver conforme al punto **SEGUNDO** del apartado de **RESOLUTIVOS**, que se **MODIFICA** la respuesta del sujeto obligado y se le **REQUIERE** por conducto del Titular de su Unidad de Transparencia para que dentro del plazo de **10 diez días hábiles contados a partir de que surta efectos legales la notificación de la resolución**, realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, dicte una nueva respuesta a través de la cual entregue la totalidad de la información solicitada, y para el caso de que la reserva de información se actualizara de forma particular, se deberá agotar el procedimiento que establece la ley de la materia estatal en su artículo 18, para el caso concreto, es decir, que los supuestos de reserva se actualicen a tiempo presente, respecto de lo siguiente:

“... ”

### RESOLUTIVOS:

**PRIMERO.** La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados.

**SEGUNDO .-** Se **MODIFICA** la respuesta del sujeto obligado y se le **REQUIERE** por conducto del Titular de su Unidad de Transparencia para que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta efectos legales la notificación de la presente resolución, **realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, dicte una nueva respuesta a través de la cual entregue la totalidad de la información solicitada, y para el caso de que la reserva de información se actualizara de forma particular, deberá agotar el procedimiento que establece la ley de la materia estatal en su artículo 18, para el caso concreto, es decir, que los supuestos de reserva se actualicen a tiempo presente.** Debiendo informar su cumplimiento dentro de los tres días hábiles posteriores al término del plazo señalado; bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la misma, se aplicaran las medidas de apremio correspondientes al o los servidores públicos que resulten responsables, de conformidad al artículo 103 de la referida ley, y el artículo 110 del Reglamento que de ella deriva.

**TERCERO.** Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación.... **(SIC)**

Por lo anterior y dando cabal cumplimiento a la citada resolución emitida por el Pleno del Instituto de Transparencia, al resolver el **RECURSO DE REVISIÓN 2001/2019**, con fundamento en lo establecido por los artículos 31, 32 punto 1 fracción III y VIII, y 83 del **DECRETO NÚMERO 25653/LX/15** que fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 10 de Noviembre del año 2015, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que entró en vigor a partir del día siguiente al de la publicación de su similar citado con antelación; así mismo acorde a lo que establece el numeral Artículo 3, 12, 13, 40, 46, 47, 48 y 49 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad; **se requirió nuevamente al Comisario General de Seguridad Pública, a fin de que se agotara la búsqueda interna en la Coordinación del Servicio de Protección; así como en la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad;** a fin de que se hiciera la búsqueda correspondiente y se informará lo conducente, remitiendo al efecto la información solicitada, o en su defecto, se fundara y motivara del impedimento que tuviere para no hacerlo, conforme lo disponen las hipótesis normativas para negar el acceso a la información pública, con el objetivo de dar cabal cumplimiento a la resolución que nos ocupa, quien tuvo a bien el dar respuesta a la solicitud de acceso a la información descrita y debidamente señalada; siendo la única información con la que se cuenta a la fecha en la que se tramitó su solicitud de acceso a la información, en cumplimiento a la resolución emitida dentro del recurso de revisión de referencia **2001/2019**.



En esta vertiente, es de referirse que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con fecha **28 veintiocho de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve**, procedió **nuevamente** a analizar, clasificar y determinar la procedencia o improcedencia para proporcionar la información solicitada a esta Unidad de Transparencia, a través de la solicitud de acceso a la información pública recibida a los 00:54 cincuenta y cuatro minutos del día 06 seis de Junio del año en curso en el sistema INFOMEX JALISCO, incorporado a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con el número de folio **003996719** y que se registró internamente bajo el número de expediente **LTAIPJ/CGES/647/2019**, y de la cuál derivó el **Recurso de Revisión 2001/2019**; en la que se solicita literalmente el estudio de los siguientes cuestionamientos:

**“...Pido lo siguiente en archivo Excel como datos abiertos, para ser entregado por Infomex o a mi correo electrónico.**

**Se me informe lo siguiente sobre la Secretaría de Seguridad Pública, con respecto a los sexenios de los ex gobernadores Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval, precisando por cada sexenio estatal:**

**a) Sexenio estatal en cuestión.**

**b) Cuántos elementos o agentes de este sujeto obligado estuvieron asignados en total a funciones de escoltas en dicho sexenio.**

**c) Del inciso anterior, se precise qué tipo de elementos o agentes fueron asignados a funciones de escoltas y cuántos por cada tipo (es decir, si eran Policías estatales, o de qué tipos).**

**d) Cuántos vehículos en total de este sujeto obligado en total fueron utilizados para servicio de escoltas.**

**e) Qué personas contaron con servicio de escolta gratuito en dicho sexenio, considerando la totalidad de personas con este servicio, tanto funcionarios, ex funcionarios, particulares y cualquier otra persona, precisando por cada persona:**

**i. Nombre y cargo o función.**

**ii. De qué fecha a qué fecha tuvo escoltas.**

**iii. Motivo por el que se le asignó escoltas.**

**iv. Cantidad de escoltas asignados.**

**v. Cuántos vehículos tuvo asignados...” (SIC)**

Dando cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales al resolver el Recurso de Revisión que nos ocupa, sometiendo al estudio y análisis de la información pública requerida, así como la prueba de daño remitida por personal del Comisario General de Seguridad, así como por el Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad, respecto a la información antes indicada, el Comité de Transparencia de la Administración General Estratégica de Seguridad y Secretaría del Estado de Jalisco, advierte que parte de la información requerida encuadra en los supuestos de restricción que al efecto establece la Ley especial de la materia y los instrumentos reglamentarios que de ella emanan, suficientes para considerarla como de acceso restringido con el carácter de **Reservada y Confidencial**. De igual manera, determina procedente entregar parte de la información requerida por el solicitante, modificando su clasificación previa de parte de la información recurrida, misma que se llevó a cabo en la sesión de trabajo de este Órgano Colegiado con fecha **24 veinticuatro de Junio del año en curso**; ello de acuerdo con la determinación del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, al resolver el **RECURSO DE REVISIÓN 2001/2019**, en la sesión ordinaria del día 14 catorce de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve. Lo anterior de acuerdo con lo que a continuación se indica y aquí interesa:

“... En la misma vertiente, se considera susceptible de ser clasificada con dicho carácter, de conformidad con lo que establecen los artículos 1º, 2º, 3º, 17.1 fracción I, inciso a), c) y f), 18, 20 punto 1 y 2, 21.1 fracción I, 22, 23, 25 punto 1 fracciones X y XV, 26, punto 1 fracción V, 27, 28, 30, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; **en correlación con el Decreto 25653/LX/15, que fue publicado en fecha 10 diez de Noviembre del año 2015 dos mil quince en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” y que entró en vigor a partir del día 20 de Diciembre del 2015, conforme al DECRETO NÚMERO 25437/LXI/15, mediante el cual, se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios**, 11 y 12 de su Reglamento, 8,9, 10,19 y 20 del Reglamento Marco de Información Pública, 1 punto 1 y 2, 2 punto 1 fracción III, 3 punto 1 fracción IX y X, 5 punto 1, 30, 38 y 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, 1, 2, 40 fracciones I, II y XXI, 110, 122 y 123 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1, 2, 62, 106 fracción XVIII, 150 fracción I, 151, 157 y 158, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, 24, 25, 28, 34, 35, 40 Bis 3, 40 Bis 9 y 40 Bis 14 del Código Civil para el Estado de Jalisco, así como en lo establecido en los artículos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Cuarto Fracciones I, II y III, Vigésimo Sexto, Trigésimo Primero, Fracciones I, IV, Trigésimo Tercero, Fracción I, Trigésimo Sexto, Cuadrágésimo Octavo, Cuadrágésimo Noveno, Quincuagésimo, Quincuagésimo Primero, Quincuagésimo Séptimo, Quincuagésimo Octavo, Quincuagésimo Noveno, y



demás relativos y aplicables de los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, emitidos mediante Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco" el día 28 veintiocho de Mayo del año 2014 dos mil catorce, debidamente publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 10 diez de Junio del mismo año, que establecen las bases y directrices por las cuales habrá de negarse información o restringirse temporalmente su acceso, así como los supuestos en los que es procedente permitir el acceso a información **reservada o confidencial**, con las excepciones correspondientes, conforme a lo que literalmente preceptúan.

En concordancia con lo anterior es de hacerse notar que el derecho de acceso a la información tiene sus excepciones, como las que nos ocupa, como se hace notar del texto de la tesis jurisprudencial P.LX/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página 74, del Tomo XI, correspondiente al mes de Abril del 2000, novena época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro:

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Es por lo que se insiste que los datos solicitados están estrechamente vinculados a acciones en materia de seguridad pública, por lo que el hacer públicos dichos datos traería como consecuencia ministrar información con la que los grupos criminales pudieran aprovecharlos para llevar a cabo acciones de ventaja en estrategias en agravio del personal operativo de este Sujeto Obligado; consiguiendo mermar las atribuciones de las instituciones dedicadas a la seguridad en el Estado, en términos de los que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ante tal situación a criterio de este Comité de Transparencia debe protegerse dicha información, por lo que una de las acciones que desempeña esta Dependencia, se funda en métodos, logística y estrategias, así mismo en el arábigo 31 de la vigente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se le confieren atribuciones a la Secretaría de Seguridad, para que, entre otras funciones y obligaciones se haga cargo básicamente de la seguridad pública en el Estado así como la prevención social del delito que pudieran sufrir los ciudadanos que conviven comúnmente en el Estado.

Así pues se insiste que el proporcionar información con esas características, se estaría transgrediendo los derechos de personalidad consagrados en el Código Civil del Estado de Jalisco, en su Libro Segundo, Capítulo II, III y IV relativo a los derechos de personalidad en su artículo 24, que determina que los derechos de personalidad, tutelan y protegen el disfrute que tiene el ser humano, con motivo de sus interrelaciones con otras personas y frente al Estado; mientras que el numeral 25, del propio Código en cita, determina la obligación categórica de respetar los derechos de personalidad, tanto por las autoridades como los particulares; a mayor abundamiento, debemos atender lo establecido en el arábigo 28, fracción V del Código multicitado, en donde se indica que toda persona tiene derecho a que se le respete su nombre; mientras que la fracción IV, indica que también debe respetarse su honor o reputación y en su caso el título profesional arte oficio u ocupación que haya alcanzado. En el mismo orden de ideas, también ha de considerarse lo estatuido en el artículo 40 Bis 3, del Código Civil, el cual debe vincularse jurídicamente con el hecho que el de proporcionar su cargo, se estaría dando información de gran utilidad para que éste sea vinculado con el nombre de una persona ya identificada o en su caso de fácil identificación; pues el Código Civil del Estado de Jalisco, complementa precisamente esos otros datos al señalar, que el nombre ha de considerarse como información de carácter privado, término que aplicado de manera analógica, es la información confidencial, así como cualquier otra que describa la situación estado de la persona con relación a su vida familiar, social o laboral, y para abundar, el numeral 60 de la Codificación Civil para el Estado de Jalisco, relativo a la individualización de las personas, señala que el nombre, se compone por el nombre propio y los apellidos correspondientes, de lo anterior, surge precisamente la actualización de la hipótesis contemplada en la Ley de Protección de Datos Personales e Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en lo dispuesto en el Lineamiento Cuadragésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y Confidencial, que deberán observar los sujetos obligados previstos en el artículo 3 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco en donde se establece que el nombre de las personas será considerado como información confidencial, **cuando su revelación pudiera lesionar la integridad de la persona de cuyo titular se trate, o bien**





cuando se encuentre ligado a información reservada, como es el presente caso, aunado a ello lo indicado en el punto Trigésimo Tercero de los Lineamientos antes referidos, que precisan que será considerada información de carácter reservado aquella cuya difusión pueda poner en peligro la vida y la seguridad de cualquier persona, apreciación legal que es importante señalar, toda vez que al proporcionar la información requerida se estaría poniendo en inminente riesgo la integridad física de personas responsables de funciones estratégicas para esta Entidad Federativa, y por tanto resultan ser íconos de atención especial para la delincuencia, no descartándose la posibilidad de que se cometa en perjuicio de su persona o bienes conductas delictivas, que incluso se podrían traducir en delitos de alto impacto para la sociedad, poniéndose en riesgo con ello las acciones destinadas a proteger la estabilidad del Estado, pues se trata de funcionarios que tuvieron un encargo especial, de igual forma se estaría poniendo en riesgo acciones estratégicas en materia de prevención del delito, por lo que en consecuencia existe una prohibición expresa para esta Entidad Pública que evita su divulgación, en debido acatamiento a lo que prevé la normatividad supra citada.

Así mismo del análisis efectuado al contenido del Trigésimo Lineamiento para la Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada y Confidencial, que deberán observar los sujetos obligados previstos en el artículo 3 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, emitidos por el entonces Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, se especifica que la información deberá manejarse bajo los principios de reserva cuyo conocimiento general pudiera poner en peligro la integridad física de los ex funcionarios que son protegidos, pues se estaría otorgando información vinculada con el personal operativo y cuestiones estratégicas que permitirían identificar objetivamente cuando una persona necesita protección especial, y por conclusión se puede proyectar información de los funcionarios que no cuenta con dicho servicio, razones por la existe la responsabilidad legal de preservar la misma, toda vez que se trata de información que podría traer un detrimento de carácter irreparable al Estado, pues se corre el riesgo de que la delincuencia, tome las medidas que considere pertinentes para establecer estrategias de acuerdo al dato hecho público, que permita la oportunidad de cometer ilícitos y atentar incluso contra la vida de quienes en un momento dado otorguen o reciban protección de seguridad preventiva.

Por tal motivo, queda estrictamente prohibida su difusión, publicación, reproducción y/o acceso a persona alguna.

En la misma vertiente, se considera susceptible de ser clasificada con dicho carácter, de conformidad con lo que establecen los artículos 1º, 2º, 3º, 17.1 fracción I, inciso a), c) y f), 18, 20 punto 1 y 2, 21.1 fracción I, 22, 23, 25 punto 1 fracciones X y XV, 26, punto 1 fracción V, 27, 28, 30, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; **en correlación con el Decreto 25653/LX/15, que fue publicado en fecha 10 diez de Noviembre del año 2015 dos mil quince en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y que entró en vigor a partir del día 20 de Diciembre del 2015, conforme al DECRETO NÚMERO 25437/LXI/15, mediante el cual, se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 11 y 12 de su Reglamento, 8,9, 10,19 y 20 del Reglamento Marco de Información Pública, 1 punto 1 y 2, 2 punto 1 fracción III, 3 punto 1 fracción IX y X, 5 punto 1, 30, 38 y 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, 1, 2, 40 fracciones I, II y XXI, 110, 122 y 123 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1, 2, 62, 106 fracción XVIII, 150 fracción I, 151, 157 y 158, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, 24, 25, 28, 34, 35, 40 Bis 3, 40 Bis 9 y 40 Bis 14 del Código Civil para el Estado de Jalisco, así como en lo establecido en los artículos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Cuarto Fracciones I, II y III, Vigésimo Sexto, Trigésimo Primero, Fracciones I, IV, Trigésimo Tercero, Fracción I, Trigésimo Sexto, Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno, Quincuagésimo, Quincuagésimo Primero, Quincuagésimo Séptimo, Quincuagésimo Octavo, Quincuagésimo Noveno, y demás relativos y aplicables de los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, emitidos mediante Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco" el día 28 veintiocho de Mayo del año 2014 dos mil catorce, debidamente publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 10 diez de Junio del mismo año, que establecen las bases y directrices por las cuales habrá de negarse información o restringirse temporalmente su acceso, así como los supuestos en los que es procedente permitir el acceso a información reservada o confidencial, con las excepciones correspondientes, conforme a lo que literalmente preceptúan:**

#### LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

(En consideración al Decreto Número 26420/LXI/17 de fecha 26 veintiséis de Julio del año 2017 dos mil diecisiete, el cual fue publicado mediante el Congreso del Estado decretó SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y REFORMAN Y DEROGA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS).



**Artículo 1º.Ley — Naturaleza e Interpretación.**

1. Esta ley es de orden e interés público, y reglamentaria de los artículos 6 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como párrafo tercero, 9 y 15 fracción IX de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

2. La información materia de este ordenamiento es un bien del dominio público en poder del Estado, cuya titularidad reside en la sociedad, misma que tendrá en todo momento la facultad de disponer de ella para los fines que considere.

3. El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados; así como lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Jalisco, favoreciendo en todo tiempo los principios pro persona y de máxima publicidad.

4. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo.

**Artículo 2º.Ley — Objeto.**

1. Esta ley tiene por objeto:

I. Reconocer el derecho a la información como un derecho humano y fundamental;

II. Transparentar el ejercicio de la función pública, la rendición de cuentas, así como el proceso de la toma de decisiones en los asuntos de interés público;

III. Garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona de solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar información pública, de conformidad con la presente ley;

IV. Clasificar la información pública en posesión de los sujetos obligados y mejorar la organización de archivos;

V. (Derogado);

VI. Regular la organización y funcionamiento del Instituto de Transparencia, Información Pública del Estado de Jalisco;

VII. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente;

VIII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;

IX. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia; y

X. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

**Artículo 3º.Ley — Conceptos Fundamentales.**

1. Información pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que surja con posterioridad.

2. La información pública se clasifica en:



I. Información pública de libre acceso, que es la no considerada como protegida, cuyo acceso al público es permanente, libre, fácil, gratuito y expedito, y se divide en:

a) Información pública fundamental, que es la información pública de libre acceso que debe publicarse y difundirse de manera universal, permanente, actualizada y, en el caso de la información electrónica, a través de formatos abiertos y accesibles para el ciudadano, por ministerio de ley, sin que se requiera solicitud de parte interesada.

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas; e

b) Información pública ordinaria, que es la información pública de libre acceso no considerada como fundamental.

La información pública que obra en documentos históricos será considerada como información pública ordinaria y, en este caso, los solicitantes deberán acatar las disposiciones que establezcan los sujetos obligados con relación al manejo y cuidado de ésta, de acuerdo a las disposiciones de la Ley que Regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco; e

II. Información pública protegida, cuyo acceso es restringido y se divide en:

a) **Información pública confidencial, que es la información pública protegida, intransferible e indelegable, relativa a los particulares, que por disposición legal queda prohibido su acceso, distribución, comercialización, publicación y difusión generales de forma permanente, con excepción de las autoridades competentes que, conforme a la ley o legislación estatal en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, tengan acceso a ella, y de los particulares titulares de dicha información; e**

b) **Información pública reservada, que es la información pública protegida, relativa a la función pública, que por disposición legal temporalmente queda prohibido su manejo, distribución, publicación y difusión generales, con excepción de las autoridades competentes que, de conformidad con la ley, tengan acceso a ella.**

III. Información proactiva, que es la información específica relativa a casos de especial interés público, en los términos de los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo esta Ley; e

IV. Información focalizada, que es la información de interés público sobre un tema específico, susceptible de ser cuantificada, analizada y comparada; en la que se apoyen los sujetos obligados en la toma de decisiones o criterios que permitan evaluar el impacto de las políticas públicas y que, asimismo, faciliten la sistematización de la información y la publicidad de sus aspectos más relevantes, de conformidad con los lineamientos del Instituto.

3. El derecho humano de acceso a la información comprende la libertad de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

## Capítulo II De la Información Reservada

**Artículo 17.** Información reservada — Catálogo.

1. Es información reservada:

I. Aquella información pública, cuya difusión:

a) **Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, con excepción de las remuneraciones de dichos servidores públicos;**

b) Dañe la estabilidad financiera o económica del Estado o de los municipios;

c) **Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona;**

d) Cause perjuicio grave a las actividades de verificación, inspección y auditoría, relativas al cumplimiento de las leyes y reglamentos;

e) Cause perjuicio grave a la recaudación de las contribuciones;



**f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de impartición de la justicia; o**

g) Cause perjuicio grave a las estrategias procesales en procesos judiciales o procedimientos administrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado;

II. Las carpetas de investigación, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables;

III. Los expedientes judiciales en tanto no causen estado;

IV. Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no causen estado;

V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se dicte la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva;

VI. Derogada

VII. La entregada con carácter reservada o confidencial por autoridades federales o de otros estados, o por organismos internacionales;

VIII. (Derogado);

IX. Las bases de datos, preguntas o reactivos para la aplicación de exámenes de admisión académica, evaluación psicológica, concursos de oposición o equivalentes, y

X. La considerada como reservada por disposición legal expresa.

**Artículo 18.** Información reservada – Negación.

1. Para negar el acceso o entrega de información reservada, los sujetos obligados deben justificar lo siguiente:

I. La información solicitada se encuentra prevista en alguna de las hipótesis de reserva que establece la ley;

II. La divulgación de dicha información atente efectivamente el interés público protegido por la ley, representando un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad estatal;

III. El daño o el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la información supera el interés público general de conocer la información de referencia; y

IV. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

2. Esta justificación se llevará a cabo a través de la prueba de daño, mediante el cual el Comité de Transparencia del sujeto obligado someterá los casos concretos de información solicitada a este ejercicio, debiéndose acreditar los cuatro elementos antes indicados, y cuyo resultado asentarán en un acta.

....

**Capítulo III  
De la Información Confidencial**

**Artículo 20.** Información Confidencial - Derecho y características

**1. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.**

**2. Nadie podrá ser obligado a proporcionar información referente a sus datos sensibles o aquella que pudiera propiciar expresión de discriminación e intolerancia sobre su persona, honor, reputación y dignidad, salvo que la información sea estrictamente necesaria para proteger su vida y seguridad personal o lo prevea alguna disposición legal.**

**Artículo 21.** Información confidencial - Catálogo



1. Es información confidencial:

I. Los datos personales de una persona física identificada o identificable en los términos de la legislación estatal en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

II. La entregada con tal carácter por los particulares, siempre que:

a) Se precisen los medios en que se contiene, y

b) No se lesionen derechos de terceros o se contravengan disposiciones de orden público, y

III. La considerada como secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario, bursátil, postal o cualquier otro, por disposición legal expresa, cuya titularidad corresponda a particularidades, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y

IV. La considerada como confidencial por disposición legal expresa.

**Artículo 21-Bis.** (Derogado)

**Artículo 22.** Información confidencial - Transferencia

1. No se requiere autorización del titular de la información confidencial para proporcionarla a terceros cuando:

I. Se encuentra en registros públicos o en fuentes de acceso público;

II. Esté sujeta a una orden judicial;

III. Cuente con el consentimiento expreso de no confidencialidad, por escrito o medio de autenticación similar, de las personas referidas en la información que contenga datos personales;

IV. Sea necesaria para fines estadísticos, científicos o de interés general por ley, y no pueda asociarse con personas en particular;

V. Sea necesaria para la prevención, diagnóstico o atención médicos del propio titular de dicha información;

VI. Se transmita entre las autoridades estatales y municipales, siempre que los datos se utilicen para el ejercicio de sus atribuciones;

VII. Se transmita de autoridades estatales y municipales a terceros, para fines públicos específicos, sin que pueda utilizarse para otros distintos;

VIII. Esté relacionada con el otorgamiento de estímulos, apoyos, subsidios y recursos públicos;

IX. Sea necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, licencias o permisos;

X. Se trate de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal de los servidores públicos;

XI. Sea necesaria por razones de seguridad estatal y salubridad general de competencia local, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; y

XII. Sea considerada como no confidencial por disposición legal expresa.

2. Para efectos de la fracción XI del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.

**Artículo 23.** Titulares de información confidencial - Derechos

1. Los titulares de información confidencial tienen los derechos siguientes:

I. Tener libre acceso a su información confidencial que posean los sujetos obligados;



II. Conocer la utilización, procesos, modificaciones y transmisiones de que sea objeto su información confidencial en posesión de los sujetos obligados;

III. Solicitar la rectificación, modificación, corrección, sustitución, oposición, supresión o ampliación de datos de la información confidencial que posean los sujetos obligados;

IV. Autorizar por escrito ante dos testigos o mediante escritura pública, la difusión, distribución, publicación, transferencia o comercialización de su información confidencial en poder de los sujetos obligados, y

V. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

2. Cuando el titular de la información confidencial fallezca o sea declarada judicialmente su presunción de muerte, los derechos reconocidos en esta ley respecto a su información confidencial pasarán sin ningún trámite a sus familiares más cercanos, primero en línea recta sin limitación de grado y, en su caso, a los colaterales hasta el cuarto grado.

3. En caso de conflicto entre familiares con igual parentesco por la titularidad de los derechos, lo resolverá la autoridad judicial competente.

**Título Tercero**  
**De los Sujetos Obligados**  
**Capítulo I**  
**Disposiciones Generales**

...

**Artículo 25.** Sujetos obligados — Obligaciones.

**1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones:**

**X. Analizar y clasificar la información pública en su poder, de acuerdo con sus criterios generales de clasificación;**

...

**XV. Proteger la información pública reservada y confidencial que tenga en su poder, contra acceso, utilización, sustracción, modificación, destrucción y eliminación no autorizados;**

**Artículo 26.** Sujetos obligados — Prohibiciones.

1. Los sujetos obligados tienen prohibido:

...

**V. Difundir, distribuir, transferir, publicar o comercializar información reservada, o permitir el acceso de personas no autorizadas por la Ley; y**

**Capítulo II**  
**Del Comité de Transparencia**

**Artículo 27.** Comité de Transparencia-Naturaleza y función.

1. El Comité de Transparencia es el órgano interno del sujeto obligado encargado de la clasificación de la información pública.

**Artículo 28.** Comité de Transparencia - Integración.

1. El Comité de Transparencia se integra por:

I. El titular del sujeto obligado cuando sea unipersonal o el representante oficial del mismo cuando sea un órgano colegiado, quien lo presidirá;

II. El titular de la Unidad, quien fungirá como Secretario, y

III. El titular del órgano con funciones de control interno del sujeto obligado cuando sea unipersonal o el representante oficial del mismo cuando sea un órgano colegiado.



2. Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

3. Los sujetos obligados cuyo titular sea un órgano colegiado, pueden delegar mediante su reglamento interno de información pública, la función del Comité de Transparencia en el titular del órgano administrativo de mayor jerarquía que dependa de ellos.

4. Las funciones del Comité de Transparencia correspondientes a varios sujetos obligados, pueden concentrarse en un solo órgano, por acuerdo del superior jerárquico común a ellos.

#### **Artículo 30.** Comité de Transparencia - Atribuciones.

1. El Comité de Transparencia tiene las siguientes atribuciones:

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas del sujeto obligado;

III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes, que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que, previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones, lo anterior de conformidad con su normativa interna;

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información;

V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos y de los integrantes adscritos a la Unidad;

VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes del sujeto obligado;

VII. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual;

VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia;

IX. Revisar que los datos de la información confidencial que reciba sean exactos y actualizados;

X. (Derogado)

XI. Registrar y controlar la transmisión a terceros, de información reservada o confidencial en su poder;

XII. Establecer un índice de la información clasificada como confidencial o reservada; y

XIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

De igual manera se considera lo que indica el **REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS**, respecto a la presente clasificación.

....

**Artículo 11.** El Comité de Clasificación de cada sujeto obligado llevará a cabo la clasificación de la Información pública mediante dos procedimientos:

I. Procedimiento de clasificación inicial; y

II. Procedimiento de modificación de clasificación.



**Artículo 12.** El procedimiento de clasificación inicial de la información se llevará a cabo de la siguiente forma:

- I. Una vez emitidos los criterios de clasificación de la información por parte del Comité de Clasificación, autorizados por el Instituto y notificado el registro, el sujeto obligado procederá en la siguiente sesión de Comité a llevar a cabo el inicio del proceso de clasificación de la información pública que haya generado o que posea;
- II. El Comité expedirá las actas de clasificación de información correspondiente, mismas que deberán contener, por lo menos:
  - a) El nombre o denominación del sujeto obligado;
  - b) El área generadora de la información;
  - c) La fecha de aprobación del acta;
  - d) Los criterios de clasificación de información pública aplicables;
  - e) Fundamentación y motivación, observando lo señalado por los artículos 17 y 18 de la Ley, en su caso;
  - f) El carácter de reservada o confidencial, indicando, en su caso, las partes o páginas del documento en el que consten;
  - g) La precisión del plazo de reserva, así como su fecha de inicio; y
  - h) Nombre, cargo y firma de los miembros del Comité.

III. (...)

En el mismo sentido se considera lo estipulado por el **REGLAMENTO MARCO DE INFORMACIÓN PÚBLICA.**

**Artículo 8.-** El sujeto obligado contará con un Comité para la clasificación de la información pública. De la misma manera tendrá la facultad de elaborar los criterios generales de clasificación de información pública; de publicación y actualización de información fundamental; y protección de información confidencial y reservada; así como integrar, sustanciar y resolver los procedimientos de protección de información.

**Artículo 10.-** El Comité además de las atribuciones que señale la Ley y el Reglamento, tendrá las siguientes:

- I. (...)
- ...
- III. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información pública que posea;
- IV. (...)
- ...

**Artículo 19.-** La clasificación particular de la información pública, consiste en el acto formal por el cual el Comité declara la característica de la información concreta y específica.

Esta clasificación puede ser efectuada de forma oficiosa por el Comité, o a propuesta de las dependencias, direcciones, jefaturas o cualquier área que maneje información que consideren susceptible de ser clasificada.

....  
Se podrá realizar mediante dos procedimientos:

1. Procedimiento de clasificación inicial de la información; y
2. Procedimiento de modificación de clasificación de la información.

**Artículo 20.-** Toda clasificación de información deberá ser fundada y motivada, sujetándose a la Ley, el Reglamento, los Lineamientos en la materia emitidos por el Instituto y los Criterios aplicables aprobados por los sujetos obligados.

## LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

### TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales

#### Capítulo Único

**Artículo 1.** Ley — Naturaleza y aplicación.

1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio del estado de Jalisco, reglamentaria de los artículos 6 base A y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 9º, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.





2. Esta ley tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados.

3. Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, que lleven a cabo el tratamiento de datos personales.

4. Los sindicatos y cualquier otra persona física o jurídica que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares, sin perjuicio de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

5. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia del lugar, la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

#### **Artículo 2. Ley — Objeto.**

1. Son objetivos de la presente Ley:

I. Establecer las bases, obligaciones, procedimientos y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos;

II. Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales previstos en la presente Ley, la Ley General y demás disposiciones aplicables;

**III. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, estatales y municipales, con la finalidad de regular su debido tratamiento;**

IV. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos personales;

V. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales;

VI. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley;

VII. Regular el procedimiento y mecanismo necesario para la sustanciación del recurso de revisión a que se refiere la presente ley;

VIII. Fijar los estándares y parámetros que permitan la implementación, mantenimiento y actualización de medidas de seguridad de carácter administrativo, técnico, físico que permitan la protección de datos personales; y

IX. Establecer el catálogo de sanciones para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en la presente ley.

#### **Artículo 3. Ley — Glosario.**

1. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos;

II. Áreas: Instancias de los sujetos obligados previstas en los respectivos reglamentos interiores, estatutos orgánicos o instrumentos equivalentes, que cuentan o puedan contar, dar tratamiento, y ser responsables o encargadas de los datos personales;

III. Aviso de privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable, que es puesto a disposición del titular con el objeto de informarle los propósitos principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales;



IV. Bases de Datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona física identificada o identificable, condicionado a criterios determinados con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización;

V. Bloqueo: La identificación y conservación de los datos personales, una vez cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual correspondiente. Durante dicho período los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y concluido éste se deberá proceder a la supresión en la base de datos, archivo, registro, expediente o sistema de información que corresponda;

VI. Comité de Transparencia: Comité de Transparencia de cada sujeto obligado en los términos de la Ley de Transparencia, en esta Ley y demás disposiciones aplicable;

VII. Cómputo en la nube: Modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda que implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa informático, distribuido de modo flexible, mediante procedimientos digitales, en recursos compartidos dinámicamente;

VIII. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular que autoriza el tratamiento de sus datos personales;

**IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;**

**X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud, información genética, datos biométricos, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;**

XI. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales;

XII. Días: Días hábiles;

XIII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo;

**Artículo 5. Ley — Límites y excepciones.**

**1. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y velará porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.**

2. No podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que:

I. Los mismos sean estrictamente necesarios para el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones y obligaciones expresamente previstas en las normas que regulan la actuación del responsable;

II. Se dé cumplimiento a un mandato legal;

III. Se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del titular; o

IV. Sean necesarios por razones de seguridad pública, orden público, salud pública o salvaguarda de derechos de terceros.

3. En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Los principios, deberes y derechos previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables tendrán como límite en cuanto a su observancia y ejercicio la protección de disposiciones de orden público, la seguridad pública, la salud pública o la protección de los derechos de terceros.

...

**Artículo 30. Deberes — Seguridad de los datos personales.**



1.- Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, **el responsable deberá establecer y mantener las medidas de seguridad** de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, **que permitan protegerlos** contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, **acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad**; sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones vigentes en materia de seguridad emitidas por las autoridades competentes al sector que corresponda, cuando éstas contemplen una protección mayor para el titular o complementen lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 38. Deberes — Vulneraciones de seguridad.**

1. Se considerarán como vulneraciones de seguridad, en cualquier fase del tratamiento de datos personales, al menos, las siguientes:

I. La pérdida o destrucción no autorizada;

II. El robo, extravío o copia no autorizada;

**III. El uso, acceso o tratamiento no autorizado; o**

IV. El daño, la alteración o modificación no autorizada.

**Artículo 45. Derechos ARCO — Procedencia.**

1. En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro.

**2. Los datos personales sólo podrán ser proporcionados a su titular, a su representante, a la autoridad judicial que funde y motive su solicitud, o a terceros en los términos de esta Ley.**

3. El responsable implementará las medidas razonables pertinentes para que todas las personas, en igualdad de circunstancias, puedan ejercer su derecho a la protección de datos personales.

## LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**Artículo 1.-** La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

**Artículo 2.-** La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

**Artículo 40.-** Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

**I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;**

**II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;**

**III. (...)**

**XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra**



información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;

XXII. (...)

...

**Artículo 110.-** Los integrantes del Sistema están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables. La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen. Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternativas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga.

...

**Artículo 122.-** El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme lo acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarías de Seguridad Pública, contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las Instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el cual contendrá, por lo menos:

I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en la seguridad pública;

II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público, y

III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron. Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al Registro.

**Artículo 123.-** Las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios inscribirán y mantendrán actualizados permanentemente en el Registro los datos relativos a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de esta Ley. Para efectos de esta Ley, se consideran miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, a quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad competente. La infracción a esta disposición se sancionará en términos de la presente Ley.

## LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO

**Artículo 1º.** La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases para regular la función de seguridad pública en el Estado y sus municipios, los lineamientos para el desarrollo y coordinación de esta función a cargo de las autoridades competentes, así como las modalidades de los servicios de seguridad privada en el estado de Jalisco.

**Artículo 2º.** La seguridad pública es la función gubernamental que prestan en forma institucional, exclusiva y en el ámbito de su competencia, el Estado y los municipios, la cual se regirá bajo los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, respetando del gobernado sus derechos humanos consagrados en nuestra carta magna y la Constitución particular del Estado.

...

**Artículo 62.-** La información será manejada bajo los principios de confidencialidad y reserva. No se proporcionará al público la información que ponga en riesgo la seguridad pública o atente contra el honor de las personas. El incumplimiento de esta obligación se equiparará al delito de revelación de secretos, sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza en las que incurran.

...



**Artículo 106.** Son causales de sanción las siguientes:

I. ...

**XVIII.** Revelar, sin justificación alguna, información reservada y confidencial relativa a la institución de seguridad Pública, y en general todo aquello que afecte la seguridad de la misma o la integridad de cualquier persona;

## Capítulo II Del registro estatal de información sobre seguridad pública

**Artículo 150.** La Secretaría organizará, administrará y actualizará de forma permanente el registro, mismo que contendrá todos los datos de identificación de los elementos operativos de los cuerpos de seguridad pública del Estado y los municipios, la Procuraduría respecto de sus elementos y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de sus peritos, que entre otros y como mínimo, serán los siguientes:

### I. Las generales y media filiación;

II. Huellas digitales;

III. Registro de voz;

IV. Fotografías de frente y de perfil;

### V. Descripción del equipo a su cargo;

VI. Los de estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público;

VII. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron;

VIII. Los vehículos que tuvieren asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo;

IX. Cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, en contra del servidor público;

X. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación;

XI. Cualquier constancia, reconocimiento o título académico obtenido en su carrera profesional, desde su formación inicial o básica;

XII. Los resultados de cada una de las evaluaciones que se le han practicado;

XIII. Tipo sanguíneo, alergias y, en su caso, tratamientos especiales; y

XIV. Los demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Las instituciones de seguridad pública estatales y municipales estarán obligadas a garantizar que la Secretaría, lleve a cabo la integración del registro.

El personal que tenga acceso e integre la información antes mencionada deberá ser sujeto a los controles de confianza cada año.

**Artículo 151.** Quedarán integrados al registro los elementos adscritos a los prestadores de servicios de seguridad privada.

Serán objeto del registro aquellos aspirantes que hayan sido rechazados y los admitidos que hayan desertado del curso de formación básica, y se llevará un control de los elementos suspendidos, destituidos, inhabilitados, consignados y de las renunciaciones.

...



**Artículo 157.** Para el acceso a la información sobre seguridad pública, podrán establecerse los diferentes niveles de consulta, respecto de:

- I. La Policía Preventiva;
- II. La Policía Investigadora;
- III. El Ministerio Público;
- IV. Las autoridades judiciales;
- V. Las autoridades administrativas de readaptación y reinserción social;
- VI. Los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; y
- VII. Otras autoridades relacionadas con la materia.

La información estadística sobre la incidencia delictiva y de faltas administrativas en toda la entidad es pública y debe ser difundida permanentemente, incluyendo en su caso el municipio, localidad y colonia en que se suscitaron.

**Artículo 158.** La información que prevé el presente título será confidencial y reservada, exceptuando lo establecido en el último párrafo del artículo anterior. No se proporcionará al público la información que ponga en riesgo la seguridad pública o atente contra el honor de las personas. El incumplimiento de esta obligación se equiparará al delito de revelación de secretos, sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza en las que incurran.

En el caso de la información reservada, esta clasificación se mantendrá cuando menos por diez años.

#### CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE JALISCO

**Artículo 24.** Los derechos de personalidad, tutelan y protegen el disfrute que tiene el ser humano, como integrante de un contexto social, en sus distintos atributos, esencia y cualidades, con motivo de sus interrelaciones con otras personas y frente al Estado.

...

**Artículo 25.** Los derechos de personalidad, por su origen, naturaleza y fin, no tienen más limitación que los derechos de terceros, la moral y las buenas costumbres. **Como consecuencia, deben ser respetados por las autoridades y particulares.**

**Artículo 28.** Toda persona tiene derecho a que se respete...

V.- Su nombre...

VIII.- Su vida privada y familiar.

**Artículo 34.-** La violación de los derechos de personalidad bien sea porque produzcan daño moral, daño económico, o ambos, es fuente de obligaciones en los términos de este código.

**Artículo 35.-** La responsabilidad civil a que se refiere el artículo anterior, no exime al autor o responsable, de cualquier otra sanción que le imponga la ley.

**Artículo 40 Bis 3.-** Son datos personales las referencias personales de cualquier tipo, **tales como nombre, domicilio, estado civil, empleo, escolaridad o cualquier otra** que describa la situación o estado de la persona con relación a su vida familiar, social o **laboral.**

...

**Artículo 40 Bis 9.-** Los datos personales no pueden ser utilizados para finalidades distintas a las que motivaron su obtención.

**Artículo 40 Bis 14.-** El uso de datos personales es **ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado.**



**LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS SUJETOS OBLIGADOS PREVISTOS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.**

**PRIMERO.-** Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los rasgos característicos que deberán reunir los criterios generales en materia de clasificación de información pública que emitan los sujetos obligados, que serán la base de la clasificación o desclasificación de la información en forma particular, así como de versiones públicas que en su caso se generan cuando los documentos contengan partes o secciones reservadas y/o confidenciales.

...

**SEGUNDO.-** La clasificación y desclasificación de información reservada y/o confidencial, y la emisión de versiones públicas, se realizará a través de los Comités de Clasificación, conforme a las disposiciones contenidas en los criterios generales que expidan los sujetos obligados y los presentes Lineamientos, atendiendo lo dispuesto por los Títulos Segundo y Quinto de la Ley, así como por lo dispuesto por el Reglamento.

**TERCERO.-** La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, constriñe a los sujetos obligados, a través de su Comité, a clasificar como reservada y/o confidencial, la información que se encuentre en su poder, y que reúna los requisitos de los supuestos contemplados por dicha legislación en una u otra categoría...

...

**QUINTO.-** De conformidad con el artículo 4 fracción VI, de la Ley, pueden ser objeto de clasificación, todos los expedientes, reportes, estudios, actas, dictámenes, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, datos, notas, memorandos, estadísticas, instrumentos de medición o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración, así como aquellos señalados por la Ley que regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco.

Además, del soporte material en que se encuentre, comprendido escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier elemento técnico existente o que se cree con posterioridad.

**CAPITULO II**

**Disposiciones Generales para La Clasificación y Desclasificación de la Información**

**Sección Primera**

**De la Clasificación**

...

**OCTAVO.-** Para efectos de lo previsto en los presentes Lineamientos, por clasificación se entiende el acto mediante el cual, se determina que información de la que tiene en su poder el sujeto obligado, encuadra en los supuestos de reserva y/o confidencialidad y, por lo tanto, no podrá ser proporcionada.

**NOVENO.-** Para clasificar la información como reservada y/o confidencial, los miembros del Comité de Clasificación deberán atender a lo dispuesto por los capítulos II y III de la Ley, así como los presentes Lineamientos, los criterios generales en las materias que obliga la Ley, y las demás disposiciones legales o reglamentarias aplicables.

**DÉCIMO.-** La clasificación de la información como reservada y/o confidencial, por parte de los sujetos obligados, solo se será válida cuando se realice por su comité de clasificación.

**DÉCIMO CUARTO.-** Para negar el acceso a la información reservada, los sujetos obligados deben justificar que se cumple con lo siguiente:

- I. Que la información solicitada se encuentra prevista en alguna de las hipótesis de reserva que establece la ley;
- II. Que la revelación de dicha información atente efectivamente el interés público protegido por la ley; y



III. Que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

### CAPITULO III De la Información Reservada

**VIGESIMO SEXTO.-** Para el caso de lo previsto en estos Lineamientos, se considerará información reservada la prevista por el artículo 17 de la Ley y demás disposiciones legales, de las que se desprenda la existencia de alguna reserva de información, así como toda información pública protegida, relativa a la función pública, que por disposición legal temporalmente queda prohibido su manejo, distribución, publicación y difusión generales, con excepción de las autoridades competentes que, de conformidad con la Ley tengan acceso a ella.

...

**TRIGÉSIMO PRIMERO.-** La información se clasificará como **reservada** en términos de la fracción **I inciso a) del artículo 17 de la Ley**, cuando se comprometa la seguridad del Estado o del Municipio, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, con excepción de las remuneraciones de dichos servidores públicos; de ahí que pueda considerarse entre otras causas de posible determinación a través de los criterios generales, que:

I. Se compromete la seguridad del Estado o de los Municipios, cuando la difusión o revelación de la información pueda:

a) Afectar, poner en riesgo, se impida, menoscaba o dificultan las acciones para conservar y defender la extensión territorial y límites territoriales del Estado o los municipios;

b) Cuando se pone en riesgo las disposiciones, medidas y acciones de las autoridades estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia, para proteger la vida de la población, sus bienes, servicios estratégicos y la planta productiva, frente a la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo a la población.

...

IV. Se ponen en riesgo las acciones destinadas a proteger la seguridad del Estado cuando la difusión de la información pueda:

a) Menoscabar o dificultar las estrategias para combatir la comisión de los delitos contra la seguridad interior del Estado de Jalisco, previstos en el libro segundo, título primero del Código Penal del Estado de Jalisco:

1. Conspiración;
2. Rebelión;
3. Sedición; y
4. Motín.

b) Destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, vías de comunicación, medios de transporte de uso público de jurisdicción estatal o municipal, servicios de emergencia; y

c) Obstaculizar o bloquear acciones tendientes a prevenir o combatir epidemias, enfermedades o situaciones que pongan en peligro la salud de la población según lo dispuesto por la Legislación en la materia.

...

**TRIGÉSIMO TERCERO.-** La información se clasificará como **reservada** cuando se ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona, en términos de la **fracción I inciso c) del artículo 17 de la Ley**, cuando:

I. Con su difusión se ponga en peligro la vida, la seguridad, el patrimonio de las personas y su familia o impida la capacidad de las autoridades para preservarlos y resguardarlos, así como para combatir las acciones de la delincuencia organizada;

...





**TRIGÉSIMO SEXTO.-** La información se clasificará como **reservada** en los términos de la **fracción I inciso f) del artículo 17 de la Ley**, siempre que la difusión de la información cause perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de impartición de justicia y ponga en peligro el orden y la paz pública.

Se pone en peligro la paz y el orden público cuando la difusión de la información pueda:

- a) **Menoscabar la capacidad de las autoridades de seguridad pública para preservar y resguardar la vida o la salud de las personas;**
- b) **Menoscabar o dificultar las estrategias para combatir las acciones delictivas;**
- c) Entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia;
- d) Arruinar o dificultar las estrategias de reclusión y seguridad penitenciaria;
- e) **Afectar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos; y**
- f) Perjudicar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales que pudieran desembocar en bloqueo de vías de comunicación o manifestaciones violentas.

De igual forma la información que corresponda a servidores públicos que laboren o hayan laborado en áreas estratégicas como seguridad pública, procuración e impartición de justicia o servicios de información, cuyo conocimiento general pudiera poner en peligro su integridad física de alguna persona o servidor público, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes supuestos:

I. Se considera que pone en riesgo la integridad física del servidor público que desempeñe funciones en alguna dependencia de seguridad pública, procuración, impartición de justicia; y

II. La prevista en la Ley de Seguridad Pública del Estado.

No se considera información reservada, los expedientes de responsabilidad administrativa concluidos, información estadística, debiendo omitir los datos de carácter personal que obren en los mismos y toda aquella información cuya revelación no ponga en peligro la integridad física del servidor público.

...

**CUADRAGÉSIMO OCTAVO.-** Para el caso de lo previsto en estos Lineamientos, se considerará información confidencial, Además de la establecida en el artículo 21 de la Ley, la información pública protegida, intransferible e indelegable, relativa a los particulares, que por disposición legal queda prohibido su acceso, distribución, comercialización, publicación y difusión generales de forma permanente, con excepción de las autoridades competentes que, conforme a la ley, tengan acceso a ella, y de los particulares titulares de dicha información.

**CUADRAGÉSIMO NOVENO.-** Será información confidencial la que contenga datos personales, independientemente de que hayan sido obtenidos directamente de su titular o por cualquier otro medio.

**QUINCUAGÉSIMO.-** El nombre de las personas será considerado como información confidencial, cuando su revelación pudiera lesionar derechos, intereses o en su caso, la integridad de la persona de cuyo titular se trate, o bien, cuando se encuentre ligado a información reservada y/o confidencial, debiendo el Comité de Clasificación fundar y motivar el acuerdo que le otorgue dicho carácter. En los casos en que no se presenten los supuestos antes mencionados, se deriven de listas, libros de registros de gobierno u otros similares, el nombre será información de libre acceso.

**QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.-** Para los efectos de los presentes Lineamientos, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Nadie podrá ser obligado a proporcionar información referente a sus datos sensibles o aquella que pudiera propiciar expresión de discriminación e intolerancia sobre su persona, honor, reputación y dignidad, salvo que la información sea estrictamente necesaria para proteger su vida y seguridad personal o lo prevea alguna disposición legal.

...

**QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO.-** Para efectos de lo previsto en el artículo 120 fracción VI de la Ley, se entenderá por dolo, la deliberada intención de clasificar la información como reservada aquella información que no cumple con dichas características.



**QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.-** El sujeto obligado deberá llevar un registro de los servidores públicos y/o personal que por la naturaleza de sus atribuciones tengan acceso a documentos clasificados como reservados y/o confidenciales, y deberán asegurarse de que los mismos tengan conocimiento de la responsabilidad que adquieren en el manejo de esa información.

**QUINCUAGÉSIMO NOVENO.-** Las actas y/o acuerdos que emita el Comité para la clasificación o desclasificación de la información, serán de libre acceso.

Cabe destacar que una de las limitaciones a que se encuentra sujeto el ejercicio del derecho a la información, por parte de los gobernados, es el concerniente a que con el mismo no se produzca una afectación al interés social y de manera especial a los cuerpos de seguridad pública o de cualquier persona, como es en este caso en particular los ex funcionarios de esta Entidad Federativa; ya que se pondría en un estado de vulnerabilidad en cuanto a su integridad física y su vida; **añado a que el otorgar del sexenio del Lic. EMILIO GONZÁLEZ MARQUEZ, parte de la información pretendida en el inciso e) apartado i), que se hace consistir en: "...e) Qué personas contaron con servicio de escolta gratuito en dicho sexenio, considerando la totalidad de personas con este servicio, tanto funcionarios, ex funcionarios, particulares y cualquier otra persona, precisando por cada persona: i. Nombre y cargo o función; mientras que lo relativo a la administración a cargo del Mtro. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DÍAZ, la información concerniente a: "e) Qué personas contaron con servicio de escolta gratuito en dicho sexenio, considerando la totalidad de personas con este servicio, tanto funcionarios, ex funcionarios, particulares y cualquier otra persona, precisando por cada persona: i. Nombre y cargo o función. ii. De qué fecha a qué fecha tuvo escoltas. iii. Motivo por el que se le asignó escoltas. iv. Cantidad de escoltas asignados. v. Cuántos vehículos tuvo asignados..." (SIC); se insiste que encuadra en los supuestos de restricción y que de llegarse a permitir su acceso por esta vía, con independencia de infringir lo establecido en la ley aplicable a la materia, se pudiese causar algún perjuicio grave al poner en riesgo la integridad física de personal considerado como operativo de este sujeto obligado, y de ex-funcionarios del Estado de Jalisco u otras personas que se les brindo dicho servicio, alcanzándose a quebrantar además las acciones implementadas para la prevención de los delitos en esta Entidad, ya que se estaría proporcionando información que puede vincularse con sus nombres por tratarse de figuras que fueron públicas o en su caso personas con preponderancia social y los cuales no porque desempeñan una actividad al servicio de la ciudadanía o recibir un servicio por parte del Estado, se tiene derecho a que se proteja su vida, así como salvaguardar su integridad física y de manera indirecta hasta la de sus familiares y/o personas cercanas a éstos, o cualquier persona que pudiera estar presente al momento de algún atentado; y hasta el propio personal operativo que desempeña y/o desempeñó esa riesgosa función, toda vez que las personas que ocuparon un cargo público no pierden, por ese simple hecho de estar a cargo de un servicio público, ámbitos personales y de vida que constitucional y legalmente se cuentan resguardados de cualquier intromisión por parte de terceros, como lo menciona el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:**

**Artículo 110.-** Los integrantes del Sistema están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables. La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen. **Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos,** en materia de detenciones, información criminal, **personal de seguridad pública**, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, **vehículos**, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, **cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga.**

De lo anterior, este Comité de Transparencia advierte y determina que le deviene el carácter de información **Reservada y Confidencial**, por tratarse de información estrechamente vinculada a información vinculada **con el sexenio del Lic. EMILIO GONZÁLEZ MARQUEZ, parte de la información pretendida en el inciso e) apartado i), que se hace consistir en: "...e) Qué personas contaron con servicio de escolta gratuito en dicho sexenio, considerando la totalidad de personas con este servicio, tanto funcionarios, ex funcionarios, particulares y cualquier otra persona, precisando por cada persona: i. Nombre y cargo o función; mientras que lo relativo a la administración a cargo del Mtro. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DÍAZ, la información concerniente a: "e) Qué personas contaron con servicio de escolta gratuito en dicho sexenio, considerando la totalidad de personas con este servicio, tanto funcionarios, ex funcionarios, particulares y cualquier otra persona, precisando por cada persona: i. Nombre y cargo o función. ii. De qué fecha a qué fecha tuvo escoltas. iii. Motivo por el que se le asignó escoltas. iv. Cantidad de escoltas asignados. v. Cuántos vehículos tuvo asignados..." (SIC)** Por tanto, jurídicamente no es procedente, toda vez que es considerado una limitante del acceso a la información pública, el de hacer del dominio público información que afecte la intimidad de una persona, a través de un riesgo latente de una afectación o detrimento a su integridad física o hasta la pérdida de vidas humanas; añado a que de igual forma no se aparta de la realidad que con ello se pudieran perturbar las estrategias en materia de seguridad del Estado de Jalisco y por ende alterar la tranquilidad y paz públicas, bienes comunes más preciados por la sociedad.



Del mismo modo, tiene sustento en el contenido de la tesis 1a. VII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, página 655, correspondiente al mes de febrero del año 2012 dos mil doce, materia Constitucional, que a continuación se invoca:

### **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).**

Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información.

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

(Lo resaltado es propio).

En este panorama, es preciso dejar en claro que el derecho humano de acceso a la información pública **no es absoluto**, y como toda prerrogativa tiene sus limitantes. Tan cierto es que el mismo numeral 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A, precisa que en principio toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y que el hecho de que las leyes secundarias restrinjan temporalmente el acceso a la información pública, **no constituye una violación al derecho fundamental** consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior de acuerdo con lo que a continuación se invoca:

### **TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.**

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: "**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.**", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derechos de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan restricciones a la información, no viola la garantía de acceso a la información contenida en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque **es jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia, el legislador federal o local establezca las restricciones correspondientes y clasifique a determinados datos como confidenciales o reservados**, con la condición de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de que se trata y la razón que motive la restricción



legislativa correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, de manera que las ventajas obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que ésta implique para los titulares de la garantía individual mencionada o para la sociedad en general.

Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.

(Lo resaltado es propio).

Al efecto, sirva robustecer lo anterior con el contenido de la Tesis número I.4o.A.40 A (10a.), Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 3, página 1899, que a continuación se invoca:

#### **ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.**

Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.

#### **CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

(Lo resaltado es propio).

Cabe precisar que los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de Información emitidos por acuerdo del Consejo del entonces Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), el día 28 veintiocho de mayo del año 2014 dos mil catorce, contempla la citada información como de carácter reservada, en su artículo Trigésimo Tercero, al considerar que "...ponga en peligro la vida, la seguridad, el patrimonio de las personas y su familia o impida la capacidad de las autoridades para preservarlos y resguardarlos, así como para combatir las acciones de la delincuencia organizada..", lo que aplica a este caso en concreto, y que versa en **información vinculada con el sexenio del Lic. EMILIO GONZÁLEZ MARQUEZ, parte de la información pretendida en el inciso e) apartado i), que se hace consistir en: "...e) Qué personas contaron con servicio de escolta gratuito en dicho sexenio, considerando la totalidad de personas con este servicio, tanto funcionarios, ex funcionarios, particulares y cualquier otra persona, precisando por cada persona: i. Nombre y cargo o función; mientras que lo relativo a la administración a cargo del Mtro. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DÍAZ, la información concerniente a: "e) Qué personas contaron con servicio de escolta gratuito en dicho sexenio, considerando la totalidad de personas con este servicio, tanto funcionarios, ex funcionarios, particulares y cualquier otra persona, precisando por cada persona: i. Nombre y cargo o función. ii. De qué fecha a qué fecha tuvo escoltas. iii. Motivo por el que se le asignó escoltas. iv. Cantidad de escoltas asignados. v. Cuántos vehículos tuvo asignados..." (SIC); por lo que hacer del conocimiento dicha información, es evidente que puede poner en riesgo su vida o integridad personal de nuestros elementos operativos y de funcionarios, ex funcionarios y personas que recibieron dicho servicio de protección en esa temporalidad, siendo necesario para llevar a cabo las acciones estratégicas de prevención entre otras, tendientes a evitar la comisión de delitos, lo que pondría en desventaja a los cuerpos policiacos de la Secretaría de Seguridad en nuestro Estado y de quienes cuentan con el servicio de protección personal.**



Así pues, del análisis lógico jurídico, y de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos en el cuerpo del presente instrumento, este Comité de Transparencia arriba a la conclusión para determinar que autorizar la consulta y/o entrega de la información requerida y señalada con antelación, se insta que la información solicitada, contiene datos valiosos que representan un dato sensible, que de obtenerse pudiera ser utilizado por individuos u organizaciones delictivas para implementar tácticas delictivas, lo que les posibilitaría para perpetrar alguna amenaza que pudiese poner en riesgo la integridad de los sujetos protegidos en esa temporalidad y la de los propios elementos asignados a dichos dispositivos de seguridad; aunado a que se pudiera llegar a producir los siguientes daños, mismos que se precisan a fin de acreditar la prueba de daño requerida en los términos resueltos por el Pleno del Órgano Garante y conforme lo establece el numeral 18 de la Ley aplicable en la materia:

#### RESPECTO AL SEXENIO DEL LICENCIADO EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ:

#### **INCISO A).- PRUEBA DE DAÑO REFERENTE A “EX TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE JALISCO”, QUE SE MENCIONA EN LA TABLA QUE SE ANEXA.**

Tomando en cuenta que una parte de la información solicitada en el inciso e), es la referente a Ex Titulares del Poder Ejecutivo de Jalisco, a manera ad cautelam, solicito se considere que la misma tiene el carácter de RESERVADA Y CONFIDENCIAL y que por ende, no debe ser proporcionada al solicitante, y como medida de control excepcional, pido además que por razones de seguridad se mantenga en el lugar en el que se encuentra actualmente, para impedir que personas no autorizadas puedan acceder a la misma, y así evitar que pueda verse comprometida la seguridad e integridad física del personal que presta sus servicios como escolta, en razón de que de revelarse cualquier dato relacionado con ese rubro, se pondría en riesgo la seguridad de personas que en la actualidad reciben ese tipo de servicios, al permitirse conocer la estrategia que normalmente se implementa en ese tipo de casos, es decir, con información de hechos pasados, puede realizarse una proyección hacia al presente, que permitiría implementar esquemas tácticos de ataque por parte de personas dedicadas a delinquir, con las graves consecuencias que eso traería para la gobernabilidad en el Estado, y el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Estatal, lo cual es una situación de orden público e interés social, es decir, es interés de la ciudadanía jalisciense que se garantice que quienes reciben servicio de protección, y que resultan ser en su mayoría funcionarios públicos que ocupan cargos estratégicos en la administración pública estatal, puedan desempeñar sus cargos de manera correcta, aunado a que los Ex Titulares del Poder Ejecutivo del Estado, en su momento tomaron decisiones en uso de sus facultades legales, que siendo legítimas incidieron de manera trascendental en diversos aspectos como lo son el económico, político, social, seguridad pública, procuración de justicia y en todos aquellos aspectos de la administración pública que se encontraron bajo responsabilidad de dichos funcionarios públicos, e incluso pudieron afectar los intereses de determinadas personas que en un momento dado pudieran convertirse en potenciales agresores; por ello es que mi solicitud de reserva la fundo en lo dispuesto en los artículos 6° la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los numerales 17 punto 1 fracción I, inciso a), c) y f); así como los lineamientos **PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, NOVENO, DECIMO CUARTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO SEXTO, CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO** de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, emitidos mediante Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco”, el día 28 veintiocho de mayo del año 2014 dos mil catorce, publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 10 diez de junio de ese mismo año, que establecen las bases y directrices por las cuales habrá de negarse información o restringirse temporalmente su acceso; de igual forma en observancia en lo que señala la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En ese orden de ideas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta autoridad funda su solicitud de RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD, valorando los siguientes supuestos: ¿Qué bien jurídico tutelado es más valioso?, el del ciudadano solicitante de la petición para tener acceso a la información pública o el derecho a la vida y la protección de su seguridad e integridad que tienen los Ex Titulares del Poder Ejecutivo de Jalisco, en quienes recayó la responsabilidad de dirigir la administración pública estatal, que es también un bien jurídico tutelado por la Ley.

Aunado a lo anterior, la improcedencia para entregar la información señalada consiste también en que una vez proporcionada **no se puede tener control del manejo que se le daría a la misma**, existiendo la probabilidad de que pudiera llegar a manos de personas que se dediquen a delinquir o que tengan algún interés de atentar en contra de los Ex Titulares del Poder Ejecutivo o de cualquiera de los elementos operativos que formaron parte de su esquema de seguridad, ya que el revelar cualquier dato inherente a ese rubro tan sensible, permitiría establecer una estrategia suficiente para posibilitar un daño en su contra, e incluso a sus allegados, es decir, posibles agresores contarían con información esencial para planear con anticipación actos ilícitos; por lo tanto esta información no debe ser pública, ya que esto aumentaría el riesgo para que la delincuencia organizada incrementa su eficiencia en caso de atentar en contra de alguno de los Ex Titulares del Poder Ejecutivo del Estado y del personal destinado a su protección, y por lo tanto en contra de las estrategias en materia de seguridad pública que son implementadas actualmente para mantener el orden y la seguridad en este Estado, aunado a lo anterior se violentaría lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de la materia, ya que señala que el hecho de publicar este tipo de información compromete la seguridad en esta Entidad, la seguridad pública



estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, así mismo pone en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona y por lo tanto causa un perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, así como a las estrategias en materia de seguridad Pública, es por lo que se deberá negar su acceso o entrega de información reservada, lo anterior se justifica por encontrarse dentro de las hipótesis de reserva de la ley de la materia ya que la revelación de dicha información atenta efectivamente el interés público protegido por la ley, además que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Cabe reiterar que al revelar la información solicitada, podría ponerse en riesgo no solo la vida de los Ex Titulares del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco o la de sus protectores, sino también la de sus familiares, allegados e incluso en un determinado caso, la de las personas que se encuentren presentes en caso de que alguno de ellos sufra algún atentado, en razón de que los posibles agresores sabrían datos que por mínimos que parezcan, pueden ser empleados de manera dolosa o mal intencionada en contra de dichas personas, en quienes recayó la enorme responsabilidad de dirigir la administración pública del Estado de Jalisco. Bajo esta premisa es importante recalcar que incluso la ciudadanía jalisciense se encuentra interesada en que las personas que encabezaron la administración estatal, cuenten con las garantías adecuadas y suficientes para su protección debido al impacto social que traería aparejado un ataque sobre su persona.

Bajo este enfoque, para esta Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es más valiosa la vida de las personas, que el derecho fundamental de un ciudadano para conocer información, datos y detalles que puedan en un momento dado poner en riesgo la vida de otras personas o su integridad física, lo anterior sin dejar de considerar también que la integridad física y la vida de los mismos es un bien jurídico tutelado que debe ponderarse, en contraposición con la intención del solicitante de información.

En ese sentido, se insiste que la información solicitada, contiene datos valiosos que representan información sensible, que de obtenerse pudiera ser utilizado por individuos u organizaciones delictivas, lo que les posibilitaría perpetrar alguna amenaza que pudiese poner en riesgo la integridad de personas que actualmente reciben protección especial, derivado de que las estrategias de seguridad que se implementaron en el pasado en ese tipo de casos, guardan cierta similitud con las actuales, y por consecuencia dar a conocer esa información, permite dar una pauta para poner en riesgo las estrategias de seguridad actuales, y por ende la información pasada tiene una repercusión en el presente.

Bajo el anterior enfoque, cabe señalar que el derecho de acceder a la información pública, se encuentra limitado y tiene determinadas excepciones, como la que nos ocupa en este caso particular, que está respaldada en el texto del criterio P.LX/2000, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página 74, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del 2000, novena época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro:

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

En razón de lo anterior se recalca que de entregarse la información se violentarían además, los derechos de los Ex Titulares del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, ya que se estaría publicando información esencialmente reservada, que incluso podría violar el derecho de protección de datos personales y se permitiría tener acceso a ciertos datos que forman parte de estrategias de seguridad, lo que conlleva un grave riesgo, ya que una vez publicada esa información referente a personal que labora como escoltas en el esquema de seguridad de los Ex Titulares del Poder Ejecutivo del Estado, no es posible tener control del manejo que se le daría a la misma, resultando ser de suma utilidad para la delincuencia organizada, ya que al contar con esos datos podrían deducir la capacidad de defensa y/o de repeler un ataque o atentado, pudiéndose establecer un plan de afectación con mayor certeza de éxito, ya que se proyectarían sus puntos vulnerables y/o sus fortalezas en el aspecto de seguridad, siendo de suma importancia en caso de pretender alguna afectación en contra de éstos, así como para las personas con las que comúnmente tienen trato. En el mismo tenor, no se tiene la certeza del manejo que se le puede dar a la información solicitada porque, como es sabido, de entre los diferentes grupos sociales que conforman esta entidad, se encuentran la delincuencia organizada, que es integrada por personas que en su habitualidad de vida, se dedican a delinquir haciendo de esto una constante para obtener, en la mayoría de casos y sin importarles las afectaciones, bienes económicos y/o materiales, quienes la



integran se caracterizan por la reiterada constancia, eficiencia y gravedad de sus acciones delictivas, ya que los delitos cometidos por estas organizaciones delictivas en la mayoría de los casos son perpetradas previo a un plan estratégico que consta de diferentes etapas y de entre estas, se encuentra la de recabar información respecto al ilícito y sus víctimas, con la que se puede deducir vulnerabilidades. Si la información que se proporciona se hiciera pública, aumentaría las probabilidades de éxito del plan de estos grupos, ya que de entre sus ventajas, cuentan con la discreción y en muchos de los casos con suficiente tiempo y delincuentes para realizar el plan, sin que la víctima, en la mayoría o en todos los casos, previa a la afectación no se haya enterado de esto, siendo ahí donde radica esencialmente el interés de la ley, al evitar la publicación de este tipo de datos, ya que al contar con escoltas se realiza con el fin preventivo y evitar ser el objetivo de la delincuencia organizada. Por lo anterior el revelar la información atentaría en contra de las garantías que consagran la Ley aplicable a la Materia, cabe citar de entre otra lo que señala el artículo 17 que de entre otra indica: Es información reservada aquella información pública, cuya difusión, comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona ... cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de impartición de la justicia.

Es por lo que en mérito de lo antes expuesto y del análisis lógico jurídico efectuado, de revelarse la información solicitada se considera que se originarían sustancialmente los siguientes daños:

**DAÑO PROBABLE.-** Se configuraría que al dar a conocer la información solicitada, relacionada con escoltas que conformaron el esquema de seguridad de los Ex Titulares del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se estarían revelando datos que en un momento dado podrían nulificar, o en su caso disminuir en gran cantidad la eficiencia de los esquemas de seguridad que se implementan actualmente, y ello podría ocasionar un riesgo para la seguridad e incluso la vida de los sujetos protegidos, así como a su entorno familiar y social, de igual manera para las personas que brindan la protección, en este caso personal operativo de la Secretaría de Seguridad; por tal motivo y dada la naturaleza de la información a la cual se pretende tener acceso, debe considerarse que los servicios de protección deben de realizarse con el mayor sigilo y discreción posible, a fin de garantizar al máximo la eficaz ejecución de las medidas de protección y seguridad que se implementan; y si personas no autorizadas tienen acceso a dicha información, se facilitaría que grupos de delincuencia organizada lleven a cabo actos ilícitos, poniéndose así, en inminente peligro la vida o integridad física de los sujetos protegidos, así como del personal operativo de esta Institución que brinda sus servicios como escoltas; pues se permitiría saber el esquema de seguridad, con lo que se pudieran hacer estudios de oportunidad para materializar conductas delictivas en su agravio; y generar incluso hasta la pérdida de vidas humanas, situación que no se descarta que pudiera repercutir en la ausencia de inversiones financieras de diversos gremios, pudiendo generar una inercia o detrimento en el desarrollo económico en la Entidad. Además, debe enfatizarse que la Secretaría de Seguridad entre sus atribuciones principales tiene la de adoptar las medidas necesarias a fin de preservar la seguridad y la paz social, objetivo específico de las medidas de gobierno, en materia de seguridad pública, por lo que se insiste que el interés particular no puede prevalecer sobre el interés común.

**DAÑO PRESENTE.-** El otorgar la información solicitada, traería como consecuencia la posibilidad de que grupos transgresores de la Ley estuvieran en posibilidad de contar con ciertos datos inherentes al esquema de protección implementado a favor de los Ex Titulares del Poder Ejecutivo del Estado, que sería una referencia para saber cómo se actúa en el presente, es decir, esa información del pasado sería trasladada al presente como un marco referencial para saber cómo se diseñan este tipo de esquemas operativos, permitiéndose con ello, que dichos grupos de delincuencia organizada puedan planear y ejecutar actos delictivos que pudieran poner en riesgo la seguridad de determinados sujetos protegidos, e incluso del personal operativo que brindan esos servicios de protección e incluso de la sociedad civil; por otro lado se estaría revelando información relativa a la capacidad operativa estrechamente relacionada con protección personal preventiva de los antes citados, pues no se puede perder de vista que las dinámicas delictivas utilizadas por grupos de delincuencia organizada, en últimas fechas no están dirigidas única y exclusivamente para el ámbito de seguridad pública, procuración y administración de justicia, pues cualquier persona puede ser objeto de una agresión, haciendo referencia de manera enunciativa más no limitativa, que pueden ser víctimas de hechos delictivos como: extorsión, secuestro, tentativa de homicidio, robo calificado los atentados y pérdidas humanas. Ahora bien, se reitera el riesgo inminente a una persona, grupo o sector, por lo tanto, no se justifica que el interés particular de una persona, pueda superar el interés colectivo que tiene la ciudadanía de que se preserve la seguridad en el Estado, que es la vida, y un interés general como lo es el orden y la paz social; siendo menester mencionar que la Secretaría de Seguridad entre sus obligaciones tiene la de garantizar y otorgar servicio de protección a determinadas personas, cuando se reúnan los requisitos correspondientes, y a seguridad de las mismas, podría verse en riesgo de suministrarse datos que permitan identificar ciertas particularidades del esquema de protección de los Ex Titulares del Poder Ejecutivo del Estado, que en un momento dado pudiera utilizarse de manera dolosa, para perpetrar en el presente actos delictivos en contra de alguna de las personas que actualmente reciben ese tipo de protección.

**DAÑO ESPECÍFICO.-** Resulta del hecho de que de divulgar la información solicitada, la cual fue especificada en el apartado que se denominó DAÑO PROBABLE, esta Dependencia infringiría la normativa que le es aplicable como sujeto obligado, en razón de que la misma encuadra dentro de los supuestos para considerarla información reservada, asimismo se estaría transgrediendo un derecho fundamental a la privacidad de las personas, al proporcionarse información reservada de la cual no se cuenta con una autorización previa para ministrarla, no descartándose que se pudiera actualizar una responsabilidad administrativa y hasta penal, en razón de que existen diversos dispositivos legales que obligan a manejarla bajo los principios de reserva y confidencialidad, pues se insiste que no obstante que se aplican recursos



públicos para la materialización de dicho servicio, no significa que este sujeto obligado tenga atribuciones para hacer público un dato que pudiese poner en inminente riesgo la vida, la seguridad, la salud y hasta el patrimonio de una persona; pues se estaría entregando información sustancial que en un momento dado pudiera ser utilizada por algún sujeto transgresor de la ley que conocería datos que le permitirían deducir cual es el criterio institucional en ese tipo de casos, para la asignación de elementos operativos, y esos datos en consecuencia, podrían ser objeto de un estudio de oportunidad para determinar por exclusión, que personas cuentan con la citada protección, haciéndolos con ello, susceptibles de ser objeto de cualquier atentado contra su integridad física y su vida, pudiéndose ocasionar que en determinado momento se encuentren desprotegidos y se vulnere en consecuencia su seguridad, pues se estaría dando información valiosa a utilizarse en la planeación de estrategias encaminadas a causar un daño a la persona, ocasionando una alteración al orden y la paz social en esta Entidad Federativa.

Como colofón a los argumentos anteriores, solicito se ponderen los eventos que han venido suscitándose que han vulnerado parcialmente la paz en el Estado, y que es reflejo del clima de inseguridad que a nivel nacional se está presentando actualmente, que obliga a las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno, a redoblar sus esfuerzos para lograr obtener seguridad pública en los Municipios, en la Entidad y en todo el País, lo cual se vería mermado si se revelaran los datos que se precisan como reservados.

Sin perjuicio de lo anterior, la información solicitada se encuentra a disposición del órgano de transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad, para el caso que al analizarla arribe a una conclusión diversa.

**INCISO B).- PRUEBA DE DAÑO REFERENTE A “PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO”, QUE SE MENCIONA EN LA TABLA QUE SE ANEXA.**

**Tomando en cuenta que una parte de la información solicitada en el inciso e), es la referente a Poder Legislativo del Estado de Jalisco, a manera ad cautelam, solicito se considere que la misma tiene el carácter de RESERVADA y CONFIDENCIAL** y que por ende, no debe ser proporcionada al solicitante, y como medida de control excepcional, pido además que por razones de seguridad se mantenga en el lugar en el que se encuentra actualmente, para impedir que personas no autorizadas puedan acceder a la misma, y así evitar que pueda verse comprometida la seguridad e integridad física del personal que presta sus servicios como escolta, en razón de que de revelarse cualquier dato relacionado con ese rubro, se pondría en riesgo la seguridad de personas que en la actualidad reciben ese tipo de servicios, al permitirse conocer la estrategia que normalmente se implementa en ese tipo de casos, es decir, con información de hechos pasados, puede realizarse una proyección hacia al presente, que permitiría implementar esquemas tácticos de ataque por parte de personas dedicadas a delinquir, con las graves consecuencias que eso traería para la gobernabilidad en el Estado, y el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Estatal, lo cual es una situación de orden público e interés social, es decir, es interés de la ciudadanía jalisciense que se garantice que quienes reciben servicio de protección, y que resultan ser en su mayoría funcionarios públicos que ocupan cargos estratégicos en la administración pública estatal, puedan desempeñar sus cargos de manera correcta, aunado a que los integrantes del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que recibieron protección, en su momento tomaron decisiones en uso de sus facultades legales, que siendo legítimas incidieron de manera trascendental en diversos aspectos como lo son el económico, político, social, seguridad pública, procuración de justicia y en todos aquellos aspectos en que los actos legislativos inciden; por ello es que mi solicitud de reserva la fundo en lo dispuesto en los artículos 6° la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los numerales 17 punto 1 fracción I, inciso a), c) y f); así como los lineamientos **PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, NOVENO, DECIMO CUARTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO SEXTO, CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO** de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, emitidos mediante Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, el día 28 veintiocho de mayo del año 2014 dos mil catorce, publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 10 diez de junio de ese mismo año, que establecen las bases y directrices por las cuales habrá de negarse información o restringirse temporalmente su acceso.

En ese orden de ideas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta autoridad funda su solicitud de RESERVA, valorando los siguientes supuestos: ¿Qué bien jurídico tutelado es más valioso?, el del ciudadano solicitante de la petición para tener acceso a la información pública o el derecho a la vida y la protección de su seguridad e integridad que tienen los sujetos que reciben protección por parte del Estado, que es también un bien jurídico tutelado por la Ley.

Aunado a lo anterior, la improcedencia para entregar la información señalada consiste también en que una vez proporcionada **no se puede tener control del manejo que se le daría a la misma**, existiendo la probabilidad de que pudiera llegar a manos de personas que se dediquen a delinquir o que tengan algún interés de atentar en contra de alguna de las personas que reciben protección por parte del Estado o de cualquiera de los elementos operativos que forman parte de un esquema de seguridad de ese tipo, ya que el revelar cualquier dato inherente a ese rubro tan sensible, permitiría establecer una estrategia suficiente para posibilitar un daño en su contra, e incluso a sus allegados, es decir, se pondría en desventaja al personal operativo que les brinda protección, porque los posibles agresores contarían con información esencial para planear con anticipación sus actos ilícitos; por lo tanto esta información no debe ser pública, ya que esto aumentaría el riesgo para que la delincuencia organizada incremente su eficiencia en caso de atentar en contra de alguna





de las personas que reciben protección y del personal destinado a su protección, y por lo tanto en contra de las estrategias en materia de seguridad pública que son implementadas para mantener el orden y la seguridad en este Estado, aunado a lo anterior se violentaría lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de la materia, ya que señala que el hecho de publicar este tipo de información compromete la seguridad en esta Entidad, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, así mismo pone en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; y por lo tanto causa un perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, así como a las estrategias en materia de seguridad Pública, es por lo que se deberá negar su acceso o entrega de información reservada, lo anterior se justifica por encontrarse dentro de las hipótesis de reserva de la ley de la materia ya que la revelación de dicha información atenta efectivamente el interés público protegido por la ley, además que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Cabe reiterar que al revelar la información solicitada, podría ponerse en riesgo no solo la seguridad de las personas que reciben protección o la de sus protectores, sino también la de sus familiares, allegados e incluso en un determinado caso, la de las personas que se encuentren presentes en caso de que alguno de ellos sufra algún atentado, en razón de que los posibles agresores sabrían datos que por mínimos que parezcan, pueden ser empleados de manera dolosa o mal intencionada en contra de quienes reciben protección.

Bajo este enfoque, para esta Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es más valiosa la vida de las personas, que el derecho fundamental de un ciudadano para conocer información, datos y detalles que puedan en un momento dado poner en riesgo la vida de otras personas o su integridad física, lo anterior sin dejar de considerar también que la integridad física y la vida de los mismos es un bien jurídico tutelado que debe ponderarse, en contraposición con la intención del solicitante de información.

En ese sentido, se insiste que la información solicitada, contiene datos valiosos que representan información sensible, que de obtenerse pudiera ser utilizada por individuos u organizaciones delictivas, lo que les posibilitaría perpetrar alguna amenaza que pudiese poner en riesgo la integridad de personas que actualmente reciben protección especial, derivado de que las estrategias de seguridad que se implementaron en el pasado en ese tipo de casos, guardan cierta similitud con las actuales, y por consecuencia dar a conocer esa información, permite dar una pauta para poner en riesgo las estrategias de seguridad actuales, y por ende la información pasada tiene una repercusión en el presente.

Bajo el anterior enfoque, cabe señalar que el derecho de acceder a la información pública, se encuentra limitado y tiene determinadas excepciones, como la que nos ocupa en este caso particular, que está respaldada en el texto del criterio P.LX/2000, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página 74, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del 2000, novena época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro:

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

En razón de lo anterior se recalca que de entregarse la información se violentarían además, los derechos de las personas que integrando el Poder Legislativo del Estado de Jalisco recibían protección especial, ya que se estaría publicando información esencialmente reservada, que incluso podría violar el derecho de protección de datos personales y se permitiría tener acceso a ciertos datos que forman parte de estrategias de seguridad, lo que conlleva un grave riesgo, ya que una vez publicada esa información referente a personal que labora como escoltas en ese tipo de esquemas de protección, no es posible tener control del manejo que se le daría a la misma, resultando ser de suma utilidad para la delincuencia organizada, ya que al contar con esos datos podrían deducir la capacidad de defensa y/o de repeler un ataque o atentado, pudiéndose establecer un plan de afectación con mayor certeza de éxito, ya que se proyectarían sus puntos vulnerables y/o sus fortalezas en el aspecto de seguridad, siendo de suma importancia en caso de pretender alguna afectación en contra de éstos, así como para las personas con las que comúnmente tienen trato. En el mismo tenor, no se tiene la certeza del manejo que se le puede dar a la información solicitada porque, como es sabido, de entre los diferentes grupos sociales que conforman esta entidad, se encuentran la delincuencia organizada, que es integrada por personas que en su habitualidad de vida, se dedican a delinquir haciendo de esto una constante para obtener, en la mayoría de casos y sin importarles las afectaciones, bienes económicos y/o materiales, quienes la integran se caracterizan por la reiterada constancia, eficiencia y gravedad de sus acciones delictivas, ya



que los delitos cometidos por estas organizaciones delictivas en la mayoría de los casos son perpetradas previo a un plan estratégico que consta de diferentes etapas y de entre estas, se encuentra la de recabar información respecto al ilícito y sus víctimas, con la que se puede deducir vulnerabilidades. Si la información que se proporciona se hiciera pública, aumentaría las probabilidades de éxito del plan de estos grupos, ya que de entre sus ventajas, cuentan con la discreción y en muchos de los casos con suficiente tiempo y delinquentes para realizar el plan, sin que la víctima, en la mayoría o en todos los casos, previa a la afectación no se haya enterado de esto, siendo ahí donde radica esencialmente el interés de la ley, al evitar la publicación de este tipo de datos, ya que al contar con escoltas se realiza con el fin preventivo y evitar ser el objetivo de la delincuencia organizada. Por lo anterior el revelar la información atentaría en contra de las garantías que consagran la Ley aplicable a la Materia, cabe citar de entre otra lo que señala el artículo 17 que de entre otra indica: Es información reservada aquella información pública, cuya difusión, comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona ... cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de impartición de la justicia.

Es por lo que en mérito de lo antes expuesto y del análisis lógico jurídico efectuado, de revelarse la información solicitada se considera que se originarían sustancialmente los siguientes daños:

**DAÑO PROBABLE.-** Se configuraría que al dar a conocer la información solicitada, relacionada con escoltas que conformaron el esquema de seguridad del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se estarían revelando datos que en un momento dado podrían nulificar, o en su caso disminuir en gran cantidad la eficiencia de la seguridad que se brinda a otros sujetos de protección actualmente, y ello podría ocasionar un riesgo para su seguridad, de igual manera para las personas que brindan la protección, en este caso personal operativo de la Secretaría de Seguridad; por tal motivo y dada la naturaleza de la información a la cual se pretende tener acceso, debe considerarse que los servicios de protección deben de realizarse con el mayor sigilo y discreción posible, a fin de garantizar al máximo la eficaz ejecución de las medidas de protección y seguridad que se implementan; y si personas no autorizadas tienen acceso a dicha información, se facilitaría que grupos de delincuencia organizada lleven a cabo actos ilícitos, poniéndose así, en inminente peligro la vida o integridad física de los sujetos protegidos, así como del personal operativo de esta Institución que brinda sus servicios como escoltas; pues se permitiría saber el esquema de seguridad, con lo que se pudieran hacer estudios de oportunidad para materializar conductas delictivas en su agravio; y generar incluso hasta la pérdida de vidas humanas, situación que no se descarta que pudiera repercutir en la ausencia de inversiones financieras de diversos gremios, pudiendo generar una inercia o detrimento en el desarrollo económico en la Entidad. Además, debe enfatizarse que la Secretaría de Seguridad entre sus atribuciones principales tiene la de adoptar las medidas necesarias a fin de preservar la seguridad y la paz social, objetivo específico de las medidas de gobierno, en materia de seguridad pública, por lo que se insiste que el interés particular no puede prevalecer sobre el interés común.

**DAÑO PRESENTE.-** El otorgar la información solicitada, traería como consecuencia la posibilidad de que grupos transgresores de la Ley estuvieran en posibilidad de contar con ciertos datos inherentes al esquema de protección implementado a favor de integrantes del Poder Legislativo del Estado, permitiéndose con ello, que dichos grupos de delincuencia organizada puedan planear y ejecutar actos delictivos que pudieran poner en riesgo su seguridad, e incluso del personal operativo que brinda ese tipo de servicios actualmente e incluso de la sociedad civil; por otro lado se estaría revelando información relativa a la capacidad operativa estrechamente relacionada con protección personal preventiva de los antes citados, pues no se puede perder de vista que las dinámicas delictivas utilizadas por grupos de delincuencia organizada, en últimas fechas no están dirigidas única y exclusivamente para el ámbito de seguridad pública, procuración y administración de justicia, pues cualquier persona puede ser objeto de una agresión, haciendo referencia de manera enunciativa mas no limitativa, que pueden ser víctimas de hechos delictivos como: extorsión, secuestro, tentativa de homicidio, robo calificado los atentados y pérdidas humanas. Ahora bien, se reitera el riesgo inminente a una persona, grupo o sector, por lo tanto, no se justifica que el interés particular de una persona, pueda superar el interés colectivo que tiene la ciudadanía de que se preserve la seguridad en el Estado, que es la vida, y un interés general como lo es el orden y la paz social; siendo menester mencionar que la Secretaría de Seguridad entre sus obligaciones tiene la de garantizar y otorgar servicio de protección a determinadas personas, cuando se reúnan los requisitos correspondientes, y la seguridad de las mismas, podría verse en riesgo de suministrarse datos que permitan identificar ciertas particularidades del esquema de protección que se implementaba para integrantes del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, lo cual si bien es relativo al pasado puede trasladarse al presente, y disminuir la eficacia de los esquemas de seguridad actuales.

**DAÑO ESPECÍFICO.-** Resulta del hecho de que de divulgar la información solicitada, la cual fue especificada en el apartado que se denominó DAÑO PROBABLE, esta Dependencia infringiría la normativa que le es aplicable como sujeto obligado, en razón de que la misma encuadra dentro de los supuestos para considerarla información reservada, asimismo se estaría transgrediendo un derecho fundamental a la privacidad de las personas, al proporcionarse información reservada de la cual no se cuenta con una autorización previa para ministrarla, no descartándose que se pudiera actualizar una responsabilidad administrativa y hasta penal, en razón de que existen diversos dispositivos legales que obligan a manejarla bajo los principios de reserva y confidencialidad, pues se insiste que no obstante que se aplican recursos públicos para la materialización de dicho servicio, no significa que este sujeto obligado tenga atribuciones para hacer público un dato que pudiese poner en inminente riesgo la vida, la seguridad, la salud y hasta el patrimonio de una persona; pues se estaría entregando información sustancial que en un momento dado pudiera ser utilizada por algún sujeto



transgresor de la ley que conocería datos que le permitirían deducir cual es el criterio institucional en ese tipo de casos, para la asignación de elementos operativos, y esos datos en consecuencia, podrían ser objeto de un estudio de oportunidad para determinar por exclusión, que personas cuentan con la citada protección, haciéndolos con ello, susceptibles de ser objeto de cualquier atentado contra su integridad física y su vida, pudiéndose ocasionar que en determinado momento se encuentren desprotegidos y se vulnera en consecuencia su seguridad, pues se estaría dando información valiosa a utilizarse en la planeación de estrategias encaminadas a causar un daño a la persona, ocasionando una alteración al orden y la paz social en esta Entidad Federativa.

Como colofón a los argumentos anteriores, solicito se ponderen los eventos que han venido suscitándose que han vulnerado parcialmente la paz en el Estado, y que es reflejo del clima de inseguridad que a nivel nacional se está presentando actualmente, que obliga a las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno, a redoblar sus esfuerzos para lograr obtener seguridad pública en los Municipios, en la Entidad y en todo el País, lo cual se vería mermado si se revelaran los datos que se precisan como reservados.

Sin perjuicio de lo anterior, la información solicitada se encuentra a disposición del órgano de transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad, para el caso que al analizarla arribe a una conclusión diversa.

**INCISO C).- PRUEBA DE DAÑO REFERENTE A “PODER LEGISLATIVO FEDERAL”, QUE SE MENCIONA EN LA TABLA QUE SE ANEXA.**

**Tomando en cuenta que una parte de la información solicitada en el inciso e), es la referente a Poder Legislativo Federal, a manera ad cautelam, solicito se considere que la misma tiene el carácter de RESERVADA y CONFIDENCIAL** y que por ende, no debe ser proporcionada al solicitante, y como medida de control excepcional, pido además que por razones de seguridad se mantenga en el lugar en el que se encuentra actualmente, para impedir que personas no autorizadas puedan acceder a la misma, y así evitar que pueda verse comprometida la seguridad e integridad física del personal que presta sus servicios como escolta, en razón de que de revelarse cualquier dato relacionado con ese rubro, se pondría en riesgo la seguridad de personas que en la actualidad reciben ese tipo de servicios, al permitirse conocer la estrategia que normalmente se implementa en ese tipo de casos, es decir, con información de hechos pasados, puede realizarse una proyección hacia al presente, que permitiría implementar esquemas tácticos de ataque por parte de personas dedicadas a delinquir, por ello es que mi solicitud de reserva la fundo en lo dispuesto en los artículos 6° la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los numerales 17 punto 1 fracción I, inciso a), c) y f); así como los lineamientos **PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, NOVENO, DECIMO CUARTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO SEXTO, CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO** de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, emitidos mediante Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco”, el día 28 veintiocho de mayo del año 2014 dos mil catorce, publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 10 diez de junio de ese mismo año, que establecen las bases y directrices por las cuales habrá de negarse información o restringirse temporalmente su acceso.

En ese orden de ideas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta autoridad funda su solicitud de RESERVA, valorando los siguientes supuestos: ¿Qué bien jurídico tutelado es más valioso?, el del ciudadano solicitante de la petición para tener acceso a la información pública o el derecho a la vida y la protección de su seguridad e integridad de personas que reciben protección, que es también un bien jurídico tutelado por la Ley.

Aunado a lo anterior, la improcedencia para entregar la información señalada consiste también en que una vez proporcionada **no se puede tener control del manejo que se le daría a la misma**, existiendo la probabilidad de que pudiera llegar a manos de personas que se dediquen a delinquir o que tengan algún interés de atentar en contra de alguna de las personas que reciben protección actualmente o de cualquiera de los elementos operativos que forman parte de su esquema de seguridad, ya que el revelar cualquier dato inherente a ese rubro tan sensible, permitiría establecer una estrategia suficiente para posibilitar un daño en su contra, e incluso a sus allegados, es decir, se pondría en desventaja al personal operativo que les brinda protección, porque los posibles agresores contarían con información esencial para planear con anticipación sus actos ilícitos; por lo tanto esta información no debe ser pública, ya que esto aumentaría el riesgo para que la delincuencia organizada incremente su eficiencia en caso de atentar en contra de las personas que reciben protección, derivado de la información que pudieran obtener respecto a los esquemas de seguridad que se implementaron a favor de integrantes del Poder Legislativo Federal y del personal destinado a su protección, y por lo tanto en contra de las estrategias en materia de seguridad pública que son implementadas para mantener el orden y la seguridad en este Estado, aunado a lo anterior se violentaría lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de la materia, ya que señala que el hecho de publicar este tipo de información compromete la seguridad en esta Entidad, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, así mismo pone en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; y por lo tanto causa un perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, así como a las estrategias en materia de seguridad Pública, es por lo que se deberá negar su acceso o entrega de información reservada, lo anterior se justifica por encontrarse dentro de las hipótesis de reserva de la ley de la materia ya que la revelación de dicha información atenta efectivamente el interés público



protegido por la ley, además que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Cabe reiterar que al revelar la información solicitada, podría ponerse en riesgo no solo la seguridad de las personas que reciben protección actualmente o la de sus protectores, sino también la de sus familiares, allegados e incluso en un determinado caso, la de las personas que se encuentren presentes en caso de que alguno de ellos sufra algún atentado, en razón de que los posibles agresores sabrían datos que por mínimos que parezcan, pueden ser empleados de manera dolosa o mal intencionada.

Bajo este enfoque, para esta Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es más valiosa la vida de las personas, que el derecho fundamental de un ciudadano para conocer información, datos y detalles que puedan en un momento dado poner en riesgo la vida de otras personas o su integridad física, lo anterior sin dejar de considerar también que la integridad física y la vida de los mismos es un bien jurídico tutelado que debe ponderarse, en contraposición con la intención del solicitante de información.

En ese sentido, se insiste que la información solicitada, contiene datos valiosos que representan información sensible, que de obtenerse pudiera ser utilizado por individuos u organizaciones delictivas, lo que les posibilitaría para perpetrar alguna amenaza que pudiese poner en riesgo la integridad de personas que reciben seguridad actualmente y la de los propios elementos asignados a dichos dispositivos de seguridad, con base en información obtenida de los esquemas que fueron implementados en el pasado a favor de integrantes del Poder Legislativo Federal.

Bajo el anterior enfoque, cabe señalar que el derecho de acceder a la información pública, se encuentra limitado y tiene determinadas excepciones, como la que nos ocupa en este caso particular, que está respaldada en el texto del criterio P.LX/2000, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página 74, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del 2000, novena época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro:

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

En razón de lo anterior se recalca que de entregarse la información se violentarían además, los derechos de integrantes del Poder Legislativo Federal, que recibieron protección especial en un momento determinado, ya que se estaría publicando información esencialmente reservada, que incluso podría violar el derecho de protección de datos personales y se permitiría tener acceso a ciertos datos que forman parte de estrategias de seguridad, lo que conlleva un grave riesgo, ya que una vez publicada esa información referente a personal que labora como escoltas en esquemas de seguridad similares, no es posible tener control del manejo que se le daría a la misma, resultando ser de suma utilidad para la delincuencia organizada, ya que al contar con esos datos podrían deducir la capacidad de defensa y/o de repeler un ataque o atentado, pudiéndose establecer un plan de afectación con mayor certeza de éxito, ya que se proyectarían sus puntos vulnerables y/o sus fortalezas en el aspecto de seguridad, siendo de suma importancia en caso de pretender alguna afectación en contra de éstos, así como para las personas con las que comúnmente tienen trato. En el mismo tenor, no se tiene la certeza del manejo que se le puede dar a la información solicitada porque, como es sabido, de entre los diferentes grupos sociales que conforman esta entidad, se encuentran la delincuencia organizada, que es integrada por personas que en su habitualidad de vida, se dedican a delinquir haciendo de esto una constante para obtener, en la mayoría de casos y sin importarles las afectaciones, bienes económicos y/o materiales, quienes la integran se caracterizan por la reiterada constancia, eficiencia y gravedad de sus acciones delictivas, ya que los delitos cometidos por estas organizaciones delictivas en la mayoría de los casos son perpetradas previo a un plan estratégico que consta de diferentes etapas y de entre estas, se encuentra la de recabar información respecto al ilícito y sus víctimas, con la que se puede deducir vulnerabilidades. Si la información que se proporciona se hiciera pública, aumentaría las probabilidades de éxito del plan de estos grupos, ya que de entre sus ventajas, cuentan con la discreción y en muchos de los casos con suficiente tiempo y delincuentes para realizar el plan, sin que la víctima, en la mayoría o en todos los casos, previa a la afectación no se haya enterado de esto, siendo ahí donde radica esencialmente el interés de la ley, al evitar la publicación de este tipo de datos, ya que al contar con escoltas se realiza con el fin preventivo y evitar ser el objetivo de la delincuencia organizada. Por lo anterior el revelar la información atentaría en contra de las garantías que consagran la Ley aplicable a la Materia, cabe citar de entre otra lo que señala el artículo 17 que de entre otra indica: Es información reservada aquella información pública, cuya difusión, comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o



municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona ... cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de impartición de la justicia.

Es por lo que en mérito de lo antes expuesto y del análisis lógico jurídico efectuado, de revelarse la información solicitada se considera que se originarían sustancialmente los siguientes daños:

**DAÑO PROBABLE.-** Se configuraría que al dar a conocer la información solicitada, relacionada con escoltas que conformaron el esquema de seguridad que se implementó a favor de integrantes del Poder Legislativo Federal, porque se estarían revelando datos que en un momento dado podrían nullificar, o en su caso disminuir en gran cantidad la eficiencia de la seguridad que se brinda actualmente, y ello podría ocasionar un riesgo para la seguridad, de igual manera para las personas que brindan la protección, en este caso personal operativo de la Secretaría de Seguridad; por tal motivo y dada la naturaleza de la información a la cual se pretende tener acceso, debe considerarse que los servicios de protección deben de realizarse con el mayor sigilo y discreción posible, a fin de garantizar al máximo la eficaz ejecución de las medidas de protección y seguridad que se implementan; y si personas no autorizadas tienen acceso a dicha información, se facilitaría que grupos de delincuencia organizada lleven a cabo actos ilícitos, poniéndose así, en inminente peligro la vida o integridad física de los sujetos protegidos, así como del personal operativo de esta Institución que brinda sus servicios como escoltas; pues se permitiría saber el esquema de seguridad, con lo que se pudieran hacer estudios de oportunidad para materializar conductas delictivas en su agravio; y generar incluso hasta la pérdida de vidas humanas, situación que no se descarta que pudiera repercutir en la ausencia de inversiones financieras de diversos gremios, pudiendo generar una inercia o detrimento en el desarrollo económico en la Entidad. Además, debe enfatizarse que la Secretaría de Seguridad entre sus atribuciones principales tiene la de adoptar las medidas necesarias a fin de preservar la seguridad y la paz social, objetivo específico de las medidas de gobierno, en materia de seguridad pública, por lo que se insiste que el interés particular no puede prevalecer sobre el interés común.

**DAÑO PRESENTE.-** El otorgar la información solicitada, en el presente, traería como consecuencia la posibilidad de que grupos transgresores de la Ley estuvieran en posibilidad de contar con ciertos datos inherentes al esquema de protección que fue implementado a favor de integrantes del Poder Legislativo Federal, permitiéndose con ello, que dichos grupos de delincuencia organizada puedan planear y ejecutar actos delictivos que pudieran poner en riesgo su seguridad, e incluso del personal operativo que brindó ese servicio de protección e incluso de la sociedad civil; por otro lado se estaría revelando información relativa a la capacidad operativa estrechamente relacionada con protección personal preventiva de los antes citados, pues no se puede perder de vista que las dinámicas delictivas utilizadas por grupos de delincuencia organizada, en últimas fechas no están dirigidas única y exclusivamente para el ámbito de seguridad pública, procuración y administración de justicia, pues cualquier persona puede ser objeto de una agresión, haciendo referencia de manera enunciativa mas no limitativa, que pueden ser víctimas de hechos delictivos como: extorsión, secuestro, tentativa de homicidio, robo calificado los atentados y pérdidas humanas. Ahora bien, se reitera el riesgo inminente a una persona, grupo o sector, por lo tanto, no se justifica que el interés particular de una persona, pueda superar el interés colectivo que tiene la ciudadanía de que se preserve la seguridad en el Estado, que es la vida, y un interés general como lo es el orden y la paz social; siendo menester mencionar que la Secretaría de Seguridad entre sus obligaciones tiene la de garantizar y otorgar servicio de protección a determinadas personas, cuando se reúnan los requisitos correspondientes, y la seguridad de las mismas, podría verse en riesgo de suministrarse datos que permitan identificar ciertas particularidades del esquema de protección que se otorgó a integrantes del Poder Legislativo Federal.

**DAÑO ESPECÍFICO.-** Resulta del hecho de que de divulgar la información solicitada, esta Dependencia infringiría la normativa que le es aplicable como sujeto obligado, en razón de que la misma encuadra dentro de los supuestos para considerarla información reservada, asimismo se estaría transgrediendo un derecho fundamental a la privacidad de las personas, al proporcionarse información reservada de la cual no se cuenta con una autorización previa para ministrarla, no descartándose que se pudiera actualizar una responsabilidad administrativa y hasta penal, en razón de que existen diversos dispositivos legales que obligan a manejarla bajo los principios de reserva y confidencialidad, pues se insiste que no obstante que se aplican recursos públicos para la materialización de dicho servicio, no significa que este sujeto obligado tenga atribuciones para hacer público un dato que pudiese poner en inminente riesgo la vida, la seguridad, la salud y hasta el patrimonio de una persona; pues se estaría entregando información sustancial que en un momento dado pudiera ser utilizada por algún sujeto transgresor de la ley que conocería datos que le permitirían deducir cual es el criterio institucional en ese tipo de casos, para la asignación de elementos operativos, y esos datos en consecuencia, podrían ser objeto de un estudio de oportunidad para determinar por exclusión, que personas cuentan con la citada protección, haciéndolos con ello, susceptibles de ser objeto de cualquier atentado contra su integridad física y su vida, pudiéndose ocasionar que en determinado momento se encuentren desprotegidos y se vulneren en consecuencia su seguridad, pues se estaría dando información valiosa a utilizarse en la planeación de estrategias encaminadas a causar un daño a la persona, ocasionando una alteración al orden y la paz social en esta Entidad Federativa así como en el interior de la República.

Como colofón a los argumentos anteriores, solicito se ponderen los eventos que han venido suscitándose que han vulnerado parcialmente la paz en el Estado, y que es reflejo del clima de inseguridad que a nivel nacional se está presentando actualmente, que obliga a las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno, a redoblar sus esfuerzos para lograr obtener seguridad pública en los Municipios, en la Entidad y en todo el País, lo cual se vería mermado si se revelaran los datos que se precisan como reservados.



**INCISO D).- PRUEBA DE DAÑO REFERENTE A "PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO", QUE SE MENCIONA EN LA TABLA QUE SE ANEXA.**

Tomando en cuenta que una parte de la información solicitada en el inciso e), es la referente a integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que recibieron protección, a manera ad cautelam, solicito se considere que la misma tiene el carácter de RESERVADA y CONFIDENCIAL y que por ende, no debe ser proporcionada al solicitante, y como medida de control excepcional, pido además que por razones de seguridad se mantenga en el lugar en el que se encuentra actualmente, para impedir que personas no autorizadas puedan acceder a la misma, y así evitar que pueda verse comprometida la seguridad e integridad física del personal que presta sus servicios como escolta, en razón de que de revelarse cualquier dato relacionado con ese rubro, se pondría en riesgo la seguridad de personas que en la actualidad reciben ese tipo de servicios, al permitirse conocer la estrategia que normalmente se implementa en ese tipo de casos, es decir, con información de hechos pasados, puede realizarse una proyección hacia al presente, que permitiría implementar esquemas tácticos de ataque por parte de personas dedicadas a delinquir; por ello es que mi solicitud de reserva la fundo en lo dispuesto en los artículos 6° la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los numerales 17 punto 1 fracción I, inciso a), c) y f); así como los lineamientos **PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, NOVENO, DECIMO CUARTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO SEXTO, CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO** de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, emitidos mediante Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco", el día 28 veintiocho de mayo del año 2014 dos mil catorce, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 10 diez de junio de ese mismo año, que establecen las bases y directrices por las cuales habrá de negarse información o restringirse temporalmente su acceso.

En ese orden de ideas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta autoridad funda su solicitud de RESERVA, valorando los siguientes supuestos: ¿Qué bien jurídico tutelado es más valioso?, el del ciudadano solicitante de la petición para tener acceso a la información pública o el derecho a la vida y la protección de personas que reciben protección, que es también un bien jurídico tutelado por la Ley.

Aunado a lo anterior, la improcedencia para entregar la información señalada consiste también en que una vez proporcionada **no se puede tener control del manejo que se le daría a la misma**, existiendo la probabilidad de que pudiera llegar a manos de personas que se dedican a delinquir o que tengan algún interés de atentar en contra de alguno de los integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que recibieron protección o de cualquiera de los elementos operativos que formaron parte de su esquema de seguridad, ya que el revelar cualquier dato inherente a ese rubro tan sensible, permitiría establecer una estrategia suficiente para posibilitar un daño en su contra, e incluso a sus allegados, es decir, se pondría en desventaja al personal operativo que les brinda protección, porque los posibles agresores contarían con información esencial para planear con anticipación sus actos ilícitos; por lo tanto esta información no debe ser pública, ya que esto aumentaría el riesgo para que la delincuencia organizada incremente su eficiencia en caso de atentar en contra de alguno de los integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco que recibieron protección y del personal destinado a su protección, y por lo tanto en contra de las estrategias en materia de seguridad pública que son implementadas para mantener el orden y la seguridad en este Estado, aunado a lo anterior se violentaría lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de la materia, ya que señala que el hecho de publicar este tipo de información compromete la seguridad en esta Entidad, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, así mismo pone en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; y por lo tanto causa un perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, así como a las estrategias en materia de seguridad Pública, es por lo que se deberá negar su acceso o entrega de información reservada, lo anterior se justifica por encontrarse dentro de las hipótesis de reserva de la ley de la materia ya que la revelación de dicha información atenta efectivamente el interés público protegido por la ley, además que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Bajo este enfoque, para esta Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es más valiosa la vida de las personas, que el derecho fundamental de un ciudadano para conocer información, datos y detalles que puedan en un momento dado poner en riesgo la vida de otras personas o su integridad física, lo anterior sin dejar de considerar también que la integridad física y la vida de los mismos es un bien jurídico tutelado que debe ponderarse, en contraposición con la intención del solicitante de información.

En ese sentido, se insiste que la información solicitada, contiene datos valiosos que representan información sensible, que de obtenerse pudiera ser utilizado por individuos u organizaciones delictivas, lo que les posibilitaría para perpetrar alguna amenaza que pudiese poner en riesgo la integridad de los integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que recibieron protección especial y la de los propios elementos asignados a dichos dispositivos de seguridad.

Bajo el anterior enfoque, cabe señalar que el derecho de acceder a la información pública, se encuentra limitado y tiene determinadas excepciones, como la que nos ocupa en este caso particular, que está respaldada en el texto del criterio P.LX/2000, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página 74, del Tomo XI, correspondiente al mes



de abril del 2000, novena época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro:

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

En razón de lo anterior se recalca que de entregarse la información se violentarían además, los derechos de los integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que recibieron protección especial, ya que se estaría publicando información esencialmente reservada, que incluso podría violar el derecho de protección de datos personales y se permitiría tener acceso a ciertos datos que forman parte de estrategias de seguridad, lo que conlleva un grave riesgo, ya que una vez publicada esa información referente a personal que laboró como escoltas en el esquema de seguridad de integrantes del Poder Judicial del Estado que recibieron protección, no es posible tener control del manejo que se le daría a la misma, resultando ser de suma utilidad para la delincuencia organizada, ya que al contar con esos datos podrían deducir la capacidad de defensa y/o de repeler un ataque o atentado, pudiéndose establecer un plan de afectación con mayor certeza de éxito, ya que se proyectarían sus puntos vulnerables y/o sus fortalezas en el aspecto de seguridad, siendo de suma importancia en caso de pretender alguna afectación en contra de éstos, así como para las personas con las que comúnmente tienen trato. En el mismo tenor, no se tiene la certeza del manejo que se le puede dar a la información solicitada porque, como es sabido, de entre los diferentes grupos sociales que conforman esta entidad, se encuentran la delincuencia organizada, que es integrada por personas que en su habitualidad de vida, se dedican a delinquir haciendo de esto una constante para obtener, en la mayoría de casos y sin importarles las afectaciones, bienes económicos y/o materiales, quienes la integran se caracterizan por la reiterada constancia, eficiencia y gravedad de sus acciones delictivas, ya que los delitos cometidos por estas organizaciones delictivas en la mayoría de los casos son perpetradas previo a un plan estratégico que consta de diferentes etapas y de entre estas, se encuentra la de recabar información respecto al ilícito y sus víctimas, con la que se puede deducir vulnerabilidades. Si la información que se proporciona se hiciera pública, aumentaría las probabilidades de éxito del plan de estos grupos, ya que de entre sus ventajas, cuentan con la discreción y en muchos de los casos con suficiente tiempo y delinquentes para realizar el plan, sin que la víctima, en la mayoría o en todos los casos, previa a la afectación no se haya enterado de esto, siendo ahí donde radica esencialmente el interés de la ley, al evitar la publicación de este tipo de datos, ya que al contar con escoltas se realiza con el fin preventivo y evitar ser el objetivo de la delincuencia organizada. Por lo anterior el revelar la información atentaría en contra de las garantías que consagran la Ley aplicable a la Materia, cabe citar de entre otra lo que señala el artículo 17 que de entre otra indica: Es información reservada aquella información pública, cuya difusión, comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona ... cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de impartición de la justicia.

Es por lo que en mérito de lo antes expuesto y del análisis lógico jurídico efectuado, de revelarse la información solicitada se considera que se originarían sustancialmente los siguientes daños:

**DAÑO PROBABLE.-** Se configuraría al dar a conocer la información solicitada, relacionada con escoltas que conformaron el esquema de seguridad que se implementó a favor de integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco, porque se estarían revelando datos que en un momento dado podrían nulificar, o en su caso disminuir en gran cantidad la eficiencia de la seguridad que se brinda actualmente a otras personas, porque la información del pasado pudiera permitir conocer como se diseñan los esquemas de protección actuales, y ello podría ocasionar un riesgo para su seguridad, de igual manera para las personas que brindan la protección, en este caso personal operativo de la Secretaría de Seguridad; por tal motivo y dada la naturaleza de la información a la cual se pretende tener acceso, debe considerarse que los servicios de protección deben de realizarse con el mayor sigilo y discreción posible, a fin de garantizar al máximo la eficaz ejecución de las medidas de protección y seguridad que se implementan; y si personas no autorizadas tienen acceso a dicha información, se facilitaría que grupos de delincuencia organizada lleven a cabo actos ilícitos, poniéndose así, inminente peligro la vida o integridad física de los sujetos protegidos, así como del personal operativo de esta Institución que brinda sus servicios como escoltas; pues se permitiría saber el esquema de seguridad, con lo que se pudieran hacer estudios de oportunidad para materializar conductas delictivas en su agravio; y generar incluso hasta la pérdida de vidas humanas, situación que no se descarta que pudiera repercutir en la ausencia de inversiones financieras de diversos gremios, pudiendo generar una inercia o detrimento en el desarrollo económico en la Entidad. Además, debe enfatizarse que la Secretaría de Seguridad entre sus atribuciones principales tiene la de adoptar las medidas necesarias a fin de preservar la



seguridad y la paz social, objetivo específico de las medidas de gobierno, en materia de seguridad pública, por lo que se insiste que el interés particular no puede prevalecer sobre el interés común.

**DAÑO PRESENTE.-** El otorgar la información solicitada, traería como consecuencia la posibilidad de que grupos transgresores de la Ley estuvieran en posibilidad de contar con ciertos datos inherentes al esquema de protección implementado a favor de integrantes del Poder Judicial del Estado, permitiéndose con ello, que dichos grupos de delincuencia organizada puedan planear y ejecutar actos delictivos que pudieran poner en riesgo su seguridad, e incluso del personal operativo que brindó ese servicio de protección e incluso de la sociedad civil; por otro lado se estaría revelando información relativa a la capacidad operativa estrechamente relacionada con protección personal preventiva de los antes citados, pues no se puede perder de vista que las dinámicas delictivas utilizadas por grupos de delincuencia organizada, en últimas fechas no están dirigidas única y exclusivamente para el ámbito de seguridad pública, procuración y administración de justicia, pues cualquier persona puede ser objeto de una agresión, haciendo referencia de manera enunciativa mas no limitativa, que pueden ser víctimas de hechos delictivos como: extorsión, secuestro, tentativa de homicidio, robo calificado los atentados y pérdidas humanas. Ahora bien, se reitera el riesgo inminente a una persona, grupo o sector, por lo tanto, no se justifica que el interés particular de una persona, pueda superar el interés colectivo que tiene la ciudadanía de que se preserve la seguridad en el Estado, que es la vida, y un interés general como lo es el orden y la paz social; siendo menester mencionar que la Secretaría de Seguridad entre sus obligaciones tiene la de garantizar y otorgar servicio de protección a determinadas personas, cuando se reúnan los requisitos correspondientes, y la seguridad de las mismas, podría verse en riesgo de suministrarse datos que permitan identificar ciertas particularidades de ese tipo de esquemas de protección, y hacer vulnerables los que se prestan actualmente.

**DAÑO ESPECÍFICO.-** Resulta del hecho de que de divulgar la información solicitada, esta Dependencia infringiría la normativa que le es aplicable como sujeto obligado, en razón de que la misma encuadra dentro de los supuestos para considerarla información reservada, asimismo se estaría transgrediendo un derecho fundamental a la privacidad de las personas, al proporcionarse información reservada de la cual no se cuenta con una autorización previa para ministrarla, no descartándose que se pudiera actualizar una responsabilidad administrativa y hasta penal, en razón de que existen diversos dispositivos legales que obligan a manejarla bajo los principios de reserva y confidencialidad, pues se insiste que no obstante que se aplican recursos públicos para la materialización de dicho servicio, no significa que este sujeto obligado tenga atribuciones para hacer público un dato que pudiese poner en inminente riesgo la vida, la seguridad, la salud y hasta el patrimonio de una persona; pues se estaría entregando información sustancial que en un momento dado pudiera ser utilizada por algún sujeto transgresor de la ley que conocería datos que le permitirían deducir cual es el criterio institucional en ese tipo de casos, para la asignación de elementos operativos, y esos datos en consecuencia, podrían ser objeto de un estudio de oportunidad para determinar por exclusión, que personas cuentan con la citada protección, haciéndolos con ello, susceptibles de ser objeto de cualquier atentado contra su integridad física y su vida, pudiéndose ocasionar que en determinado momento se encuentren desprotegidos y se vulneren en consecuencia su seguridad, pues se estaría dando información valiosa a utilizarse en la planeación de estrategias encaminadas a causar un daño a la persona, ocasionando una alteración al orden y la paz social en esta Entidad Federativa.

Como colofón a los argumentos anteriores, solicito se ponderen los eventos que han venido suscitándose que han vulnerado parcialmente la paz en el Estado, y que es reflejo del clima de inseguridad que a nivel nacional se está presentando actualmente, que obliga a las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno, a redoblar sus esfuerzos para lograr obtener seguridad pública en los Municipios, en la Entidad y en todo el País, lo cual se vería mermado si se revelaran los datos que se precisan como reservados.

Sin perjuicio de lo anterior, la información solicitada se encuentra a disposición del órgano de transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad, para el caso que al analizarla arribe a una conclusión diversa.

**INCISO E).- PRUEBA DE DAÑO REFERENTE A "INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES", QUE SE MENCIONA EN LA TABLA QUE SE ANEXA.**

**Tomando en cuenta que una parte de la información solicitada en el inciso e), es la referente a Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses,** a manera ad cautelam, **solicito se considere que la misma tiene el carácter de RESERVADA y CONFIDENCIAL** y que por ende, no debe ser proporcionada al solicitante, y como medida de control excepcional, pido además que por razones de seguridad se mantenga en el lugar en el que se encuentra actualmente, para impedir que personas no autorizadas puedan acceder a la misma, y así evitar que pueda verse comprometida la seguridad e integridad física del personal que presta sus servicios como escolta, en razón de que de revelarse cualquier dato relacionado con ese rubro, se pondría en riesgo la seguridad de personas que en la actualidad reciben ese tipo de servicios, al permitirse conocer la estrategia que normalmente se implementa en ese tipo de casos, es decir, con información de hechos pasados, puede realizarse una proyección hacia al presente, que permitiría implementar esquemas tácticos de ataque por parte de personas dedicadas a delinquir; por ello es que mi solicitud de reserva la fundo en lo dispuesto en los artículos 6° la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los numerales 17 punto 1 fracción I, inciso a), c) y f); así como los lineamientos **PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, NOVENO, DÉCIMO CUARTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO SEXTO, CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO** de los Lineamientos





Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, emitidos mediante Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco", el día 28 veintiocho de mayo del año 2014 dos mil catorce, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 10 diez de junio de ese mismo año, que establecen las bases y directrices por las cuales habrá de negarse información o restringirse temporalmente su acceso.

En ese orden de ideas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta autoridad funda su solicitud de RESERVA, valorando los siguientes supuestos: ¿Qué bien jurídico tutelado es más valioso?, el del ciudadano solicitante de la petición para tener acceso a la información pública o el derecho a la vida y la protección de la persona que recibe protección.

Aunado a lo anterior, la improcedencia para entregar la información señalada consiste también en que una vez proporcionada **no se puede tener control del manejo que se le daría a la misma**, existiendo la probabilidad de que pudiera llegar a manos de personas que se dediquen a delinquir o que tengan algún interés de atentar en contra de quien fue identificado como Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses o de cualquiera de los elementos operativos que formaron parte de su esquema de seguridad, ya que el revelar cualquier dato inherente a ese rubro tan sensible, permitiría establecer una estrategia suficiente para posibilitar un daño en su contra, e incluso a sus allegados, es decir, se pondría en desventaja al personal operativo que le brinda protección, porque los posibles agresores contarían con información esencial para planear con anticipación sus actos ilícitos; por lo tanto esta información no debe ser pública, ya que esto aumentaría el riesgo para que la delincuencia organizada incremente su eficiencia en caso de atentar en contra de quien fue identificado como Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y del personal destinado a su protección, aunado a lo anterior se violentaría lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de la materia, ya que señala que el hecho de publicar este tipo de información compromete la seguridad en esta Entidad, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, así mismo pone en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; y por lo tanto causa un perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, así como a las estrategias en materia de seguridad Pública, es por lo que se deberá negar su acceso o entrega de información reservada, lo anterior se justifica por encontrarse dentro de las hipótesis de reserva de la ley de la materia ya que la revelación de dicha información atenta efectivamente el interés público protegido por la ley, además que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Cabe reiterar que al revelar la información solicitada, podría ponerse en riesgo no solo la vida de quien fue identificado como Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses o la de sus protectores, sino también la de sus familiares, allegados e incluso en un determinado caso, la de las personas que se encuentren presentes en caso de que alguno de ellos sufra algún atentado, en razón de que los posibles agresores sabrían datos que por mínimos que parezcan, pueden ser empleados de manera dolosa o mal intencionada en su contra.

Bajo este enfoque, para esta Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es más valiosa la vida de las personas, que el derecho fundamental de un ciudadano para conocer información, datos y detalles que puedan en un momento dado poner en riesgo la vida de otras personas o su integridad física, lo anterior sin dejar de considerar también que la integridad física y la vida de los mismos es un bien jurídico tutelado que debe ponderarse, en contraposición con la intención del solicitante de información.

En ese sentido, se insiste que la información solicitada, contiene datos valiosos que representan información sensible, que de obtenerse pudiera ser utilizado por individuos u organizaciones delictivas, lo que les posibilitaría para perpetrar alguna amenaza que pudiese poner en riesgo la integridad de quien fue identificado como Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Bajo el anterior enfoque, cabe señalar que el derecho de acceder a la información pública, se encuentra limitado y tiene determinadas excepciones, como la que nos ocupa en este caso particular, que está respaldada en el texto del criterio P.LX/2000, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página 74, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del 2000, novena época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y



la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

En razón de lo anterior se recalca que de entregarse la información se violentarían además, los derechos de quien fue identificado como Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ya que se estaría publicando información esencialmente reservada, que incluso podría violar el derecho de protección de datos personales y se permitiría tener acceso a ciertos datos que forman parte de estrategias de seguridad, lo que conlleva un grave riesgo, ya que una vez publicada esa información referente a personal que labora como escoltas en el esquema de seguridad de quien fue identificado como Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no es posible tener control del manejo que se le daría a la misma, resultando ser de suma utilidad para la delincuencia organizada, ya que al contar con esos datos podrían deducir la capacidad de defensa y/o de repeler un ataque o atentado, pudiéndose establecer un plan de afectación con mayor certeza de éxito, ya que se proyectarían sus puntos vulnerables y/o sus fortalezas en el aspecto de seguridad, siendo de suma importancia en caso de pretender alguna afectación en contra de éstos, así como para las personas con las que comúnmente tienen trato. En el mismo tenor, no se tiene la certeza del manejo que se le puede dar a la información solicitada porque, como es sabido, de entre los diferentes grupos sociales que conforman esta entidad, se encuentran la delincuencia organizada, que es integrada por personas que en su habitualidad de vida, se dedican a delinquir haciendo de esto una constante para obtener, en la mayoría de casos y sin importarles las afectaciones, bienes económicos y/o materiales, quienes la integran se caracterizan por la reiterada constancia, eficiencia y gravedad de sus acciones delictivas, ya que los delitos cometidos por estas organizaciones delictivas en la mayoría de los casos son perpetradas previo a un plan estratégico que consta de diferentes etapas y de entre estas, se encuentra la de recabar información respecto al ilícito y sus víctimas, con la que se puede deducir vulnerabilidades. Si la información que se proporciona se hiciera pública, aumentaría las probabilidades de éxito del plan de estos grupos, ya que de entre sus ventajas, cuentan con la discreción y en muchos de los casos con suficiente tiempo y delinquentes para realizar el plan, sin que la víctima, en la mayoría o en todos los casos, previa a la afectación no se haya enterado de esto, siendo ahí donde radica esencialmente el interés de la ley, al evitar la publicación de este tipo de datos, ya que al contar con escoltas se realiza con el fin preventivo y evitar ser el objetivo de la delincuencia organizada. Por lo anterior el revelar la información atentaría en contra de las garantías que consagran la Ley aplicable a la Materia, cabe citar de entre otra lo que señala el artículo 17 que de entre otra indica: Es información reservada aquella información pública, cuya difusión, comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona ... cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de impartición de la justicia.

Es por lo que en mérito de lo antes expuesto y del análisis lógico jurídico efectuado, de revelarse la información solicitada se considera que se originarían sustancialmente los siguientes daños:

**DAÑO PROBABLE.-** Se configuraría que al dar a conocer la información solicitada, relacionada con escoltas que conformaron el esquema de seguridad de quien fue identificado como Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se estarían revelando datos que en un momento dado podrían nulificar, o en su caso disminuir en gran cantidad la eficiencia de la seguridad que se le brinda, y ello podría ocasionar un riesgo para su seguridad e incluso su vida, así como a su entorno familiar y social, de igual manera para las personas que brindan la protección, en este caso personal operativo de la Secretaría de Seguridad; por tal motivo y dada la naturaleza de la información a la cual se pretende tener acceso, debe considerarse que los servicios de protección deben de realizarse con el mayor sigilo y discreción posible, a fin de garantizar al máximo la eficaz ejecución de las medidas de protección y seguridad que se implementan; y si personas no autorizadas tienen acceso a dicha información, se facilitaría que grupos de delincuencia organizada lleven a cabo actos ilícitos, poniéndose así, en inminente peligro la vida o integridad física de los sujetos protegidos, así como del personal operativo de esta Institución que brinda sus servicios como escoltas; pues se permitiría saber el esquema de seguridad, con lo que se pudieran hacer estudios de oportunidad para materializar conductas delictivas en su agravio; y generar incluso hasta la pérdida de vidas humanas, situación que no se descarta que pudiera repercutir en la ausencia de inversiones financieras de diversos gremios, pudiendo generar una inercia o detrimento en el desarrollo económico en el Estado. Además, debe enfatizarse que la Secretaría de Seguridad entre sus atribuciones principales tiene la de adoptar las medidas necesarias a fin de preservar la seguridad y la paz social, objetivo específico de las medidas de gobierno, en materia de seguridad pública, por lo que se insiste que el interés particular no puede prevalecer sobre el interés común.

**DAÑO PRESENTE.-** El otorgar la información solicitada, en el presente, traería como consecuencia la posibilidad de que grupos transgresores de la Ley estuvieran en posibilidad de contar con ciertos datos inherentes al esquema de protección implementado a favor de quien fue identificado como Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, permitiéndose con ello, que dichos grupos de delincuencia organizada puedan planear y ejecutar actos delictivos que pudieran poner en riesgo su seguridad, e incluso del personal operativo que brindó ese servicio de protección e incluso de la sociedad civil; por otro lado se estaría revelando información relativa a la capacidad operativa estrechamente relacionada con protección personal preventiva de los antes citados, pues no se puede perder de vista que las dinámicas delictivas utilizadas por grupos de delincuencia organizada, en últimas fechas no están dirigidas única y exclusivamente para el ámbito de seguridad pública, procuración y administración de justicia, pues cualquier persona puede ser objeto de una agresión, haciendo referencia de manera enunciativa mas no limitativa, que pueden ser víctimas de hechos delictivos como: extorsión, secuestro, tentativa de homicidio, robo calificado los atentados y pérdidas humanas. Ahora bien, se reitera el riesgo inminente a una persona, grupo o sector, por lo tanto, no se justifica que el interés particular de una persona, pueda superar el interés colectivo que tiene la ciudadanía de que se preserve la seguridad en el Estado, que es



la vida, y un interés general como lo es el orden y la paz social; siendo menester mencionar que la Secretaría de Seguridad entre sus obligaciones tiene la de garantizar y otorgar servicio de protección a determinadas personas, cuando se reúnan los requisitos correspondientes, y la seguridad de las mismas, podría verse en riesgo de suministrarse datos que permitan identificar ciertas particularidades del esquema de protección de quien fue identificado como Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

**DAÑO ESPECÍFICO.-** Resulta del hecho de que de divulgar la información solicitada, esta Dependencia infringiría la normativa que le es aplicable como sujeto obligado, en razón de que la misma encuadra dentro de los supuestos para considerarla información reservada, asimismo se estaría transgrediendo un derecho fundamental a la privacidad de las personas, al proporcionarse información reservada de la cual no se cuenta con una autorización previa para ministrarla, no descartándose que se pudiera actualizar una responsabilidad administrativa y hasta penal, en razón de que existen diversos dispositivos legales que obligan a manejarla bajo los principios de reserva y confidencialidad, pues se insiste que no obstante que se aplican recursos públicos para la materialización de dicho servicio, no significa que este sujeto obligado tenga atribuciones para hacer público un dato que pudiese poner en inminente riesgo la vida, la seguridad, la salud y hasta el patrimonio de una persona; pues se estaría entregando información sustancial que en un momento dado pudiera ser utilizada por algún sujeto transgresor de la ley que conocería datos que le permitirían deducir cual es el criterio institucional en ese tipo de casos, para la asignación de elementos operativos, y esos datos en consecuencia, podrían ser objeto de un estudio de oportunidad para determinar por exclusión, que personas cuentan con la citada protección, haciéndolos con ello, susceptibles de ser objeto de cualquier atentado contra su integridad física y su vida, pudiéndose ocasionar que en determinado momento se encuentren desprotegidos y se vulneren en consecuencia su seguridad, pues se estaría dando información valiosa a utilizarse en la planeación de estrategias encaminadas a causar un daño a la persona, ocasionando una alteración al orden y la paz social en esta Entidad Federativa.

Como colofón a los argumentos anteriores, solicito se ponderen los eventos que han venido suscitándose que han vulnerado parcialmente la paz en el Estado, y que es reflejo del clima de inseguridad que a nivel nacional se está presentando actualmente, que obliga a las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno, a redoblar sus esfuerzos para lograr obtener seguridad pública en los Municipios, en la Entidad y en todo el País, lo cual se vería mermado si se revelaran los datos que se precisan como reservados.

**INCISO F).- PRUEBA DE DAÑO REFERENTE A “PRESIDENTE MUNICIPAL”, QUE SE MENCIONA EN LA TABLA QUE SE ANEXA.**

Tomando en cuenta que una parte de la información solicitada en el inciso e), es la referente a Presidente Municipal, a manera ad cautelam, solicito se considere que la misma tiene el carácter de RESERVADA y CONFIDENCIAL y que por ende, no debe ser proporcionada al solicitante, y como medida de control excepcional, pido además que por razones de seguridad se mantenga en el lugar en el que se encuentra actualmente, para impedir que personas no autorizadas puedan acceder a la misma, y así evitar que pueda verse comprometida la seguridad e integridad física del personal que presta sus servicios como escolta, en razón de que de revelarse cualquier dato relacionado con ese rubro, se pondría en riesgo la seguridad de personas que en la actualidad reciben ese tipo de servicios, al permitirse conocer la estrategia que normalmente se implementa en ese tipo de casos, es decir, con información de hechos pasados, puede realizarse una proyección hacia al presente, que permitiría implementar esquemas tácticos de ataque por parte de personas dedicadas a delinquir; 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los numerales 17 punto 1 fracción I, inciso a), c) y f); así como los lineamientos **PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, NOVENO, DECIMO CUARTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO SEXTO, CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO** de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, emitidos mediante Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco”, el día 28 veintiocho de mayo del año 2014 dos mil catorce, publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 10 diez de junio de ese mismo año, que establecen las bases y directrices por las cuales habrá de negarse información o restringirse temporalmente su acceso.

En ese orden de ideas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta autoridad funda su solicitud de RESERVA, valorando los siguientes supuestos: ¿Qué bien jurídico tutelado es más valioso?, el del ciudadano solicitante de la petición para tener acceso a la información pública o el derecho a la vida y la protección de su seguridad e integridad de las personas que reciben protección, que es también en un bien jurídico tutelado por la Ley.

Aunado a lo anterior, la improcedencia para entregar la información señalada consiste también en que una vez proporcionada **no se puede tener control del manejo que se le daría a la misma**, existiendo la probabilidad de que pudiera llegar a manos de personas que se dediquen a delinquir o que tengan algún interés de atentar en contra de la persona que fue identificada como Presidente Municipal o de cualquiera de los elementos operativos que forman parte de su esquema de seguridad, ya que el revelar cualquier dato inherente a ese rubro tan sensible, permitiría establecer una estrategia suficiente para posibilitar un daño en su contra, e incluso a sus allegados, es decir, se pondría en desventaja al personal operativo que le brinda protección, porque los posibles agresores contarían con información esencial para planear con anticipación sus actos ilícitos; por lo tanto esta información no debe ser pública, ya que esto aumentaría el riesgo para



que la delincuencia organizada incrementa su eficiencia en caso de atentar en contra de la persona que fue identificada como Presidente Municipal y del personal destinado a su protección, y por lo tanto en contra de las estrategias en materia de seguridad pública que son implementadas para mantener el orden y la seguridad en este Estado, aunado a lo anterior se violentaría lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de la materia, ya que señala que el hecho de publicar este tipo de información compromete la seguridad en esta Entidad, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, así mismo pone en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; y por lo tanto causa un perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, así como a las estrategias en materia de seguridad Pública, es por lo que se deberá negar su acceso o entrega de información reservada, lo anterior se justifica por encontrarse dentro de las hipótesis de reserva de la ley de la materia ya que la revelación de dicha información atenta efectivamente el interés público protegido por la ley, además que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Cabe reiterar que al revelar la información solicitada, podría ponerse en riesgo no solo la vida de quien fue identificado como Presidente Municipal o la de sus protectores, sino también la de sus familiares, allegados e incluso en un determinado caso, la de las personas que se encuentren presentes en caso de que alguno de ellos sufra algún atentado, en razón de que los posibles agresores sabrían datos que por mínimos que parezcan, pueden ser empleados de manera dolosa o mal intencionada en su contra.

Bajo este enfoque, para esta Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es más valiosa la vida de las personas, que el derecho fundamental de un ciudadano para conocer información, datos y detalles que puedan en un momento dado poner en riesgo la vida de otras personas o su integridad física, lo anterior sin dejar de considerar también que la integridad física y la vida de los mismos es un bien jurídico tutelado que debe ponderarse, en contraposición con la intención del solicitante de información.

En ese sentido, se insiste que la información solicitada, contiene datos valiosos que representan información sensible, que de obtenerse pudiera ser utilizada por individuos u organizaciones delictivas, lo que les posibilitaría para perpetrar alguna amenaza que pudiese poner en riesgo la integridad de quien se identificó como Presidente Municipal y la de los propios elementos asignados a dichos dispositivos de seguridad.

Bajo el anterior enfoque, cabe señalar que el derecho de acceder a la información pública, se encuentra limitado y tiene determinadas excepciones, como la que nos ocupa en este caso particular, que está respaldada en el texto del criterio P.LX/2000, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página 74, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del 2000, novena época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro:

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

En razón de lo anterior se recalca que de entregarse la información se violentarían además, los derechos de quien fue identificado como Presidente Municipal, ya que se estaría publicando información esencialmente reservada, que incluso podría violar el derecho de protección de datos personales y se permitiría tener acceso a ciertos datos que forman parte de estrategias de seguridad, lo que conlleva un grave riesgo, ya que una vez publicada esa información referente a personal que labora como escoltas en el esquema de seguridad de quien fue identificado como Presidente Municipal, no es posible tener control del manejo que se le daría a la misma, resultando ser de suma utilidad para la delincuencia organizada, ya que al contar con esos datos podrían deducir la capacidad de defensa y/o de repeler un ataque o atentado, pudiéndose establecer un plan de afectación con mayor certeza de éxito, ya que se proyectarían sus puntos vulnerables y/o sus fortalezas en el aspecto de seguridad, siendo de suma importancia en caso de pretender alguna afectación en contra de éstos, así como para las personas con las que comúnmente tienen trato. En el mismo tenor, no se tiene la certeza del manejo que se le puede dar a la información solicitada porque, como es sabido, de entre los diferentes grupos sociales que conforman esta entidad, se encuentran la delincuencia organizada, que es integrada por personas que en su habitualidad de vida, se dedican a delinquir haciendo de esto una constante para obtener, en la mayoría de casos y sin importarles las afectaciones, bienes económicos y/o materiales, quienes la integran se caracterizan por la reiterada constancia, eficiencia y gravedad de sus acciones delictivas, ya que los delitos cometidos por estas organizaciones delictivas en la mayoría de los casos son perpetrados previo a un plan



estratégico que consta de diferentes etapas y de entre estas, se encuentra la de recabar información respecto al ilícito y sus víctimas, con la que se puede deducir vulnerabilidades. Si la información que se proporciona se hiciera pública, aumentaría las probabilidades de éxito del plan de estos grupos, ya que de entre sus ventajas, cuentan con la discreción y en muchos de los casos con suficiente tiempo y delincuentes para realizar el plan, sin que la víctima, en la mayoría o en todos los casos, previa a la afectación no se haya enterado de esto, siendo ahí donde radica esencialmente el interés de la ley, al evitar la publicación de este tipo de datos, ya que al contar con escoltas se realiza con el fin preventivo y evitar ser el objetivo de la delincuencia organizada. Por lo anterior el revelar la información atentaría en contra de las garantías que consagran la Ley aplicable a la Materia, cabe citar de entre otra lo que señala el artículo 17 que de entre otra indica: Es información reservada aquella información pública, cuya difusión, comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona ... cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de impartición de la justicia.

Es por lo que en mérito de lo antes expuesto y del análisis lógico jurídico efectuado, de revelarse la información solicitada se considera que se originarían sustancialmente los siguientes daños:

**DAÑO PROBABLE.-** Se configuraría que al dar a conocer la información solicitada, relacionada con escoltas que conformaron el esquema de seguridad de quien se identificó como Presidente Municipal, se estarían revelando datos que en un momento dado podrían nulificar, o en su caso disminuir en gran cantidad la eficiencia de la seguridad que se le brinda, y ello podría ocasionar un riesgo para su seguridad e incluso su vida, así como a su entorno familiar y social, de igual manera para las personas que brindan la protección, en este caso personal operativo de la Secretaría de Seguridad; por tal motivo y dada la naturaleza de la información a la cual se pretende tener acceso, debe considerarse que los servicios de protección deben de realizarse con el mayor sigilo y discreción posible, a fin de garantizar al máximo la eficaz ejecución de las medidas de protección y seguridad que se implementan; y si personas no autorizadas tienen acceso a dicha información, se facilitaría que grupos de delincuencia organizada lleven a cabo actos ilícitos, poniéndose así, en inminente peligro la vida o integridad física de los sujetos protegidos, así como del personal operativo de esta Institución que brinda sus servicios como escoltas; pues se permitiría saber el esquema de seguridad, con lo que se pudieran hacer estudios de oportunidad para materializar conductas delictivas en su agravio; y generar incluso hasta la pérdida de vidas humanas, situación que no se descarta que pudiera repercutir en la ausencia de inversiones financieras de diversos gremios, pudiendo generar una inercia o detrimento en el desarrollo económico. Además, debe enfatizarse que la Secretaría de Seguridad entre sus atribuciones principales tiene la de adoptar las medidas necesarias a fin de preservar la seguridad y la paz social, objetivo específico de las medidas de gobierno, en materia de seguridad pública, por lo que se insiste que el interés particular no puede prevalecer sobre el interés común.

**DAÑO PRESENTE.-** El otorgar la información solicitada, traería como consecuencia la posibilidad de que grupos transgresores de la Ley estuvieran en posibilidad de contar con ciertos datos inherentes al esquema de protección implementado a favor de quien fue identificado como Presidente Municipal, permitiéndose con ello, que dichos grupos de delincuencia organizada puedan planear y ejecutar actos delictivos que pudieran poner en riesgo su seguridad, e incluso del personal operativo que brinda ese servicio de protección e incluso de la sociedad civil; por otro lado se estaría revelando información relativa a la capacidad operativa estrechamente relacionada con protección personal preventiva de los antes citados, pues no se puede perder de vista que las dinámicas delictivas utilizadas por grupos de delincuencia organizada, en últimas fechas no están dirigidas única y exclusivamente para el ámbito de seguridad pública, procuración y administración de justicia, pues cualquier persona puede ser objeto de una agresión, haciendo referencia de manera enunciativa mas no limitativa, que pueden ser víctimas de hechos delictivos como: extorsión, secuestro, tentativa de homicidio, robo calificado los atentados y pérdidas humanas. Ahora bien, se reitera el riesgo inminente a una persona, grupo o sector, por lo tanto, no se justifica que el interés particular de una persona, pueda superar el interés colectivo que tiene la ciudadanía de que se preserve la seguridad en el Estado, que es la vida, y un interés general como lo es el orden y la paz social; siendo menester mencionar que la Secretaría de Seguridad entre sus obligaciones tiene la de garantizar y otorgar servicio de protección a determinadas personas, cuando se reúnan los requisitos correspondientes, y la seguridad de las mismas, podría verse en riesgo de suministrarse datos que permitan identificar ciertas particularidades de esquemas de seguridad similares al implementado a favor de quien fue identificado como Presidente Municipal.

**DAÑO ESPECÍFICO.-** Resulta del hecho de que de divulgar la información solicitada, esta Dependencia infringiría la normativa que le es aplicable como sujeto obligado, en razón de que la misma encuadra dentro de los supuestos para considerarla información reservada, asimismo se estaría transgrediendo un derecho fundamental a la privacidad de las personas, al proporcionarse información reservada de la cual no se cuenta con una autorización previa para ministrarla, no descartándose que se pudiera actualizar una responsabilidad administrativa y hasta penal, en razón de que existen diversos dispositivos legales que obligan a manejarla bajo los principios de reserva y confidencialidad, pues se insiste que no obstante que se aplican recursos públicos para la materialización de dicho servicio, no significa que este sujeto obligado tenga atribuciones para hacer público un dato que pudiese poner en inminente riesgo la vida, la seguridad, la salud y hasta el patrimonio de una persona; pues se estaría entregando información sustancial que en un momento dado pudiera ser utilizada por algún sujeto transgresor de la ley que conociera datos que le permitirían deducir cual es el criterio institucional en ese tipo de casos, para la asignación de elementos operativos, y esos datos en consecuencia, podrían ser objeto de un estudio de oportunidad para determinar por exclusión, que personas cuentan con la citada protección, haciéndolos



con ello, susceptibles de ser objeto de cualquier atentado contra su integridad física y su vida, pudiéndose ocasionar que en determinado momento se encuentren desprotegidos y se vulneren en consecuencia su seguridad, pues se estaría dando información valiosa a utilizarse en la planeación de estrategias encaminadas a causar un daño a la persona, ocasionando una alteración al orden y la paz social en esta Entidad Federativa.

Como colofón a los argumentos anteriores, solicito se ponderen los eventos que han venido suscitándose que han vulnerado parcialmente la paz en el Estado, y que es reflejo del clima de inseguridad que a nivel nacional se está presentando actualmente, que obliga a las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno, a redoblar sus esfuerzos para lograr obtener seguridad pública en los Municipios, en la Entidad y en todo el País, lo cual se vería mermado si se revelaran los datos que se precisan como reservados.

Sin perjuicio de lo anterior, la información solicitada se encuentra a disposición del órgano de transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad, para el caso que al analizarla arribe a una conclusión diversa.

**INCISO G).- PRUEBA DE DAÑO REFERENTE A “LIDER RELIGIOSO”, QUE SE MENCIONA EN LA TABLA QUE SE ANEXA.**

**Tomando en cuenta que una parte de la información solicitada en el inciso e), es la referente a Líder Religioso, a manera ad cautelam, solicito se considere que la misma tiene el carácter de RESERVADA y CONFIDENCIAL** y que por ende, no debe ser proporcionada al solicitante, y como medida de control excepcional, pido además que por razones de seguridad se mantenga en el lugar en el que se encuentra actualmente, para impedir que personas no autorizadas puedan acceder a la misma, y así evitar que pueda verse comprometida la seguridad e integridad física del personal que presta sus servicios como escolta, en razón de que de revelarse cualquier dato relacionado con ese rubro, se pondría en riesgo la seguridad de personas que en la actualidad reciben ese tipo de servicios, al permitirse conocer la estrategia que normalmente se implementa en ese tipo de casos, es decir, con información de hechos pasados, puede realizarse una proyección hacia al presente, que permitiría implementar esquemas tácticos de ataque por parte de personas dedicadas a delinquir, por ello es que mi solicitud de reserva la fundo en lo dispuesto en los artículos 6° la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los numerales 17 punto 1 fracción I, inciso a), c) y f); así como los lineamientos **PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, NOVENO, DECIMO CUARTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO SEXTO, CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO** de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, emitidos mediante Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco”, el día 28 veintiocho de mayo del año 2014 dos mil catorce, publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 10 diez de junio de ese mismo año, que establecen las bases y directrices por las cuales habrá de negarse información o restringirse temporalmente su acceso.

En ese orden de ideas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta autoridad funda su solicitud de RESERVA, valorando los siguientes supuestos: ¿Qué bien jurídico tutelado es más valioso?, el del ciudadano solicitante de la petición para tener acceso a la información pública o el derecho a la vida y la protección de la persona que recibe protección.

Aunado a lo anterior, la improcedencia para entregar la información señalada consiste también en que una vez proporcionada **no se puede tener control del manejo que se le daría a la misma**, existiendo la probabilidad de que pudiera llegar a manos de personas que se dediquen a delinquir o que tengan algún interés de atentar en contra de quien fue identificado como Líder Religioso o de cualquiera de los elementos operativos que formaron parte de su esquema de seguridad, ya que el revelar cualquier dato inherente a ese rubro tan sensible, permitiría establecer una estrategia suficiente para posibilitar un daño en su contra, e incluso a sus allegados, es decir, se pondría en desventaja al personal operativo que le brinda protección, porque los posibles agresores contarían con información esencial para planear con anticipación sus actos ilícitos; por lo tanto esta información no debe ser pública, ya que esto aumentaría el riesgo para que la delincuencia organizada incremente su eficiencia en caso de atentar en contra de quien fue identificado como Líder Religioso y del personal destinado a su protección, aunado a lo anterior se violentaría lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de la materia, ya que señala que el hecho de publicar este tipo de información compromete la seguridad en esta Entidad, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, así mismo pone en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; y por lo tanto causa un perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, así como a las estrategias en materia de seguridad Pública, es por lo que se deberá negar su acceso o entrega de información reservada, lo anterior se justifica por encontrarse dentro de las hipótesis de reserva de la ley de la materia ya que la revelación de dicha información atenta efectivamente el interés público protegido por la ley, además que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Cabe reiterar que al revelar la información solicitada, podría ponerse en riesgo no solo la vida de quien fue identificado como Líder Religioso o la de sus protectores, sino también la de sus familiares, allegados e incluso en un determinado caso, la de las personas que se encuentren presentes en caso de que alguno de ellos sufra algún atentado, en razón de



que los posibles agresores sabrían datos que por mínimos que parezcan, pueden ser empleados de manera dolosa o mal intencionada en su contra.

Bajo este enfoque, para esta Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es más valiosa la vida de las personas, que el derecho fundamental de un ciudadano para conocer información, datos y detalles que puedan en un momento dado poner en riesgo la vida de otras personas o su integridad física, lo anterior sin dejar de considerar también que la integridad física y la vida de los mismos es un bien jurídico tutelado que debe ponderarse, en contraposición con la intención del solicitante de información.

En ese sentido, se insiste que la información solicitada, contiene datos valiosos que representan información sensible, que de obtenerse pudiera ser utilizado por individuos u organizaciones delictivas, lo que les posibilitaría para perpetrar alguna amenaza que pudiese poner en riesgo la integridad de quien fue identificado como Líder Religioso.

Bajo el anterior enfoque, cabe señalar que el derecho de acceder a la información pública, se encuentra limitado y tiene determinadas excepciones, como la que nos ocupa en este caso particular, que está respaldada en el texto del criterio P.LX/2000, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página 74, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del 2000, novena época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro:

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

En razón de lo anterior se recalca que de entregarse la información se violentarían además, los derechos de quien fue identificado como Líder Religioso, ya que se estaría publicando información esencialmente reservada, que incluso podría violar el derecho de protección de datos personales y se permitiría tener acceso a ciertos datos que forman parte de estrategias de seguridad, lo que conlleva un grave riesgo, ya que una vez publicada esa información referente a personal que labora como escoltas en el esquema de seguridad de quien fue identificado como Líder Religioso, no es posible tener control del manejo que se le daría a la misma, resultando ser de suma utilidad para la delincuencia organizada, ya que al contar con esos datos podrían deducir la capacidad de defensa y/o de repeler un ataque o atentado, pudiéndose establecer un plan de afectación con mayor certeza de éxito, ya que se proyectarían sus puntos vulnerables y/o sus fortalezas en el aspecto de seguridad, siendo de suma importancia en caso de pretender alguna afectación en contra de éstos, así como para las personas con las que comúnmente tienen trato. En el mismo tenor, no se tiene la certeza del manejo que se le puede dar a la información solicitada porque, como es sabido, de entre los diferentes grupos sociales que conforman esta entidad, se encuentran la delincuencia organizada, que es integrada por personas que en su habitualidad de vida, se dedican a delinquir haciendo de esto una constante para obtener, en la mayoría de casos y sin importarles las afectaciones, bienes económicos y/o materiales, quienes la integran se caracterizan por la reiterada constancia, eficiencia y gravedad de sus acciones delictivas, ya que los delitos cometidos por estas organizaciones delictivas en la mayoría de los casos son perpetradas previo a un plan estratégico que consta de diferentes etapas y de entre estas, se encuentra la de recabar información respecto al ilícito y sus víctimas, con la que se puede deducir vulnerabilidades. Si la información que se proporciona se hiciera pública, aumentaría las probabilidades de éxito del plan de estos grupos, ya que de entre sus ventajas, cuentan con la discreción y en muchos de los casos con suficiente tiempo y delinquentes para realizar el plan, sin que la víctima, en la mayoría o en todos los casos, previa a la afectación no se haya enterado de esto, siendo ahí donde radica esencialmente el interés de la ley, al evitar la publicación de este tipo de datos, ya que al contar con escoltas se realiza con el fin preventivo y evitar ser el objetivo de la delincuencia organizada. Por lo anterior el revelar la información atentaría en contra de las garantías que consagran la Ley aplicable a la Materia, cabe citar de entre otra lo que señala el artículo 17 que de entre otra indica: Es información reservada aquella información pública, cuya difusión, comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, que ponga en riesgo la vida, **seguridad o salud de cualquier persona.**

Es por lo que en mérito de lo antes expuesto y del análisis lógico jurídico efectuado, de revelarse la información solicitada se considera que se originarían sustancialmente los siguientes daños:

**DAÑO PROBABLE.-** Se configuraría que al dar a conocer la información solicitada, relacionada con escoltas que conformaron el esquema de seguridad de quien fue identificado como Líder Religioso, se estarían revelando datos que en un momento dado podrían nulificar, o en su caso disminuir en gran cantidad la eficiencia de la seguridad que se le brinda,



y ello podría ocasionar un riesgo para su seguridad e incluso su vida, así como a su entorno familiar y social, de igual manera para las personas que brindan la protección, en este caso personal operativo de la Secretaría de Seguridad; por tal motivo y dada la naturaleza de la información a la cual se pretende tener acceso, debe considerarse que los servicios de protección deben de realizarse con el mayor sigilo y discreción posible, a fin de garantizar al máximo la eficaz ejecución de las medidas de protección y seguridad que se implementan; y si personas no autorizadas tienen acceso a dicha información, se facilitaría que grupos de delincuencia organizada lleven a cabo actos ilícitos, poniéndose así, en inminente peligro la vida o integridad física de los sujetos protegidos, así como del personal operativo de esta Institución que brinda sus servicios como escoltas; pues se permitiría saber el esquema de seguridad, con lo que se pudieran hacer estudios de oportunidad para materializar conductas delictivas en su agravio; y generar incluso hasta la pérdida de vidas humanas, situación que no se descarta que pudiera repercutir en la ausencia de inversiones financieras de diversos gremios, pudiendo generar una inercia o detrimento en el desarrollo económico en el Estado. Además, debe enfatizarse que la Secretaría de Seguridad entre sus atribuciones principales tiene la de adoptar las medidas necesarias a fin de preservar la seguridad y la paz social, objetivo específico de las medidas de gobierno, en materia de seguridad pública, por lo que se insiste que el interés particular no puede prevalecer sobre el interés común.

**DAÑO PRESENTE.-** El otorgar la información solicitada, en el presente, traería como consecuencia la posibilidad de que grupos transgresores de la Ley estuvieran en posibilidad de contar con ciertos datos inherentes al esquema de protección implementado a favor de quien fue identificado como Líder Religioso, permitiéndose con ello, que dichos grupos de delincuencia organizada puedan planear y ejecutar actos delictivos que pudieran poner en riesgo su seguridad, e incluso del personal operativo que brindó ese servicio de protección e incluso de la sociedad civil; por otro lado se estaría revelando información relativa a la capacidad operativa estrechamente relacionada con protección personal preventiva de los antes citados, pues no se puede perder de vista que las dinámicas delictivas utilizadas por grupos de delincuencia organizada, en últimas fechas no están dirigidas única y exclusivamente para el ámbito de seguridad pública, procuración y administración de justicia, pues cualquier persona puede ser objeto de una agresión, haciendo referencia de manera enunciativa mas no limitativa, que pueden ser víctimas de hechos delictivos como: extorsión, secuestro, tentativa de homicidio, robo calificado los atentados y pérdidas humanas. Ahora bien, se reitera el riesgo inminente a una persona, grupo o sector, por lo tanto, no se justifica que el interés particular de una persona, pueda superar el interés colectivo que tiene la ciudadanía de que se preserve la seguridad en el Estado, que es la vida, y un interés general como lo es el orden y la paz social; siendo menester mencionar que la Secretaría de Seguridad entre sus obligaciones tiene la de garantizar y otorgar servicio de protección a determinadas personas, cuando se reúnan los requisitos correspondientes, y la seguridad de las mismas, podría verse en riesgo de suministrarse datos que permitan identificar ciertas particularidades del esquema de protección de quien fue identificado como Líder Religioso.

**DAÑO ESPECÍFICO.-** Resulta del hecho de que de divulgar la información solicitada, esta Dependencia infringiría la normativa que le es aplicable como sujeto obligado, en razón de que la misma encuadra dentro de los supuestos para considerarla información reservada, asimismo se estaría transgrediendo un derecho fundamental a la privacidad de las personas, al proporcionarse información reservada de la cual no se cuenta con una autorización previa para ministrarla, no descartándose que se pudiera actualizar una responsabilidad administrativa y hasta penal, en razón de que existen diversos dispositivos legales que obligan a manejarla bajo los principios de reserva y confidencialidad, pues se insiste que no obstante que se aplican recursos públicos para la materialización de dicho servicio, no significa que este sujeto obligado tenga atribuciones para hacer público un dato que pudiese poner en inminente riesgo la vida, la seguridad, la salud y hasta el patrimonio de una persona; pues se estaría entregando información sustancial que en un momento dado pudiera ser utilizada por algún sujeto transgresor de la ley que conocería datos que le permitirían deducir cual es el criterio institucional en ese tipo de casos, para la asignación de elementos operativos, y esos datos en consecuencia, podrían ser objeto de un estudio de oportunidad para determinar por exclusión, que personas cuentan con la citada protección, haciéndolos con ello, susceptibles de ser objeto de cualquier atentado contra su integridad física y su vida, pudiéndose ocasionar que en determinado momento se encuentren desprotegidos y se vulnere en consecuencia su seguridad, pues se estaría dando información valiosa a utilizarse en la planeación de estrategias encaminadas a causar un daño a la persona, ocasionando una alteración al orden y la paz social en esta Entidad Federativa.

Como colofón a los argumentos anteriores, solicito se ponderen los eventos que han venido suscitándose que han vulnerado parcialmente la paz en el Estado, y que es reflejo del clima de inseguridad que a nivel nacional se está presentando actualmente, que obliga a las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno, a redoblar sus esfuerzos para lograr obtener seguridad pública en los Municipios, en la Entidad y en todo el País, lo cual se vería mermado si se revelaran los datos que se precisan como reservados.

**INCISO H).- PRUEBA DE DAÑO REFERENTE A "DIPLOMATICOS", QUE SE MENCIONA EN LA TABLA QUE SE ANEXA.**

**Tomando en cuenta que una parte de la información solicitada en el inciso e), es la referente a Diplomáticos, a manera ad cautelam, solicito se considere que la misma tiene el carácter de RESERVADA y CONFIDENCIAL y que por ende, no debe ser proporcionada al solicitante, y como medida de control excepcional, pido además que por razones de seguridad se mantenga en el lugar en el que se encuentra actualmente, para impedir que personas no autorizadas puedan acceder a la misma, y así evitar que pueda verse comprometida la seguridad e integridad física del personal que**





presta sus servicios como escolta, en razón de que de revelarse cualquier dato relacionado con ese rubro, se pondría en riesgo la seguridad de personas que en la actualidad reciben ese tipo de servicios, al permitirse conocer la estrategia que normalmente se implementa en ese tipo de casos, es decir, con información de hechos pasados, puede realizarse una proyección hacia al presente, que permitiría implementar esquemas tácticos de ataque por parte de personas dedicadas a delinquir; por ello es que mi solicitud de reserva la fundo en lo dispuesto en los artículos 6° la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los numerales 17 punto 1 fracción I, inciso a), c) y f); así como los lineamientos **PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, NOVENO, DECIMO CUARTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO SEXTO, CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO** de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, emitidos mediante Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, el día 28 veintiocho de mayo del año 2014 dos mil catorce, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 10 diez de junio de ese mismo año, que establecen las bases y directrices por las cuales habrá de negarse información o restringirse temporalmente su acceso.

En ese orden de ideas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta autoridad funda su solicitud de RESERVA, valorando los siguientes supuestos: ¿Qué bien jurídico tutelado es más valioso?, el del ciudadano solicitante de la petición para tener acceso a la información pública o el derecho a la vida y la protección de su seguridad e integridad de quienes reciben protección.

Aunado a lo anterior, la improcedencia para entregar la información señalada consiste también en que una vez proporcionada **no se puede tener control del manejo que se le daría a la misma**, existiendo la probabilidad de que pudiera llegar a manos de personas que se dedican a delinquir o que tengan algún interés de atentar en contra de quienes fueron identificados como Diplomáticos o de cualquiera de los elementos operativos que forman parte de su esquema de seguridad, ya que el revelar cualquier dato inherente a ese rubro tan sensible, permitiría establecer una estrategia suficiente para posibilitar un daño en su contra, e incluso a sus allegados, es decir, se pondría en desventaja al personal operativo que les brinda protección, porque los posibles agresores contarían con información esencial para planear con anticipación sus actos ilícitos; por lo tanto esta información no debe ser pública, ya que esto aumentaría el riesgo para que la delincuencia organizada incremente su eficiencia en caso de atentar en contra de quienes fueron identificados como Diplomáticos y del personal destinado a su protección, y por lo tanto en contra de las estrategias en materia de seguridad pública que son implementadas para mantener el orden y la seguridad en este Estado, aunado a lo anterior se violentaría lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de la materia, ya que señala que el hecho de publicar este tipo de información compromete la seguridad en esta Entidad, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, así mismo pone en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; y por lo tanto causa un perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, así como a las estrategias en materia de seguridad Pública, es por lo que se deberá negar su acceso o entrega de información reservada, lo anterior se justifica por encontrarse dentro de las hipótesis de reserva de la ley de la materia ya que la revelación de dicha información atenta efectivamente el interés público protegido por la ley, además que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Cabe reiterar que al revelar la información solicitada, podría ponerse en riesgo no solo la vida de quienes fueron identificados como Diplomáticos o la de sus protectores, sino también la de sus familiares, allegados e incluso en un determinado caso, la de las personas que se encuentren presentes en caso de que alguno de ellos sufra algún atentado, en razón de que los posibles agresores sabrían datos que por mínimos que parezcan, pueden ser empleados de manera dolosa o mal intencionada en contra de esas personas.

Bajo este enfoque, para esta Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es más valiosa la vida de las personas, que el derecho fundamental de un ciudadano para conocer información, datos y detalles que puedan en un momento dado poner en riesgo la vida de otras personas o su integridad física, lo anterior sin dejar de considerar también que la integridad física y la vida de los mismos es un bien jurídico tutelado que debe ponderarse, en contraposición con la intención del solicitante de información.

En ese sentido, se insiste que la información solicitada, contiene datos valiosos que representan información sensible, que de obtenerse pudiera ser utilizado por individuos u organizaciones delictivas, lo que les posibilitaría para perpetrar alguna amenaza que pudiese poner en riesgo la integridad de quienes fueron identificados como Diplomáticos y la de los propios elementos asignados a dichos dispositivos de seguridad.

Bajo el anterior enfoque, cabe señalar que el derecho de acceder a la información pública, se encuentra limitado y tiene determinadas excepciones, como la que nos ocupa en este caso particular, que está respaldada en el texto del criterio P.LX/2000, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página 74, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del 2000, novena época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última



parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

En razón de lo anterior se recalca que de entregarse la información se violentarían además, los derechos de quienes fueron identificados como Diplomáticos, ya que se estaría publicando información esencialmente reservada, que incluso podría violar el derecho de protección de datos personales y se permitiría tener acceso a ciertos datos que forman parte de estrategias de seguridad, lo que conlleva un grave riesgo, ya que una vez publicada esa información referente a personal que labora como escoltas en el esquema de seguridad de quienes fueron identificados como Diplomáticos, no es posible tener control del manejo que se le daría a la misma, resultando ser de suma utilidad para la delincuencia organizada, ya que al contar con esos datos podrían deducir la capacidad de defensa y/o de repeler un ataque o atentado, pudiéndose establecer un plan de afectación con mayor certeza de éxito, ya que se proyectarían sus puntos vulnerables y/o sus fortalezas en el aspecto de seguridad, siendo de suma importancia en caso de pretender alguna afectación en contra de éstos, así como para las personas con las que comúnmente tienen trato. En el mismo tenor, no se tiene la certeza del manejo que se le puede dar a la información solicitada porque, como es sabido, de entre los diferentes grupos sociales que conforman esta entidad, se encuentran la delincuencia organizada, que es integrada por personas que en su habitualidad de vida, se dedican a delinquir haciendo de esto una constante para obtener, en la mayoría de casos y sin importarles las afectaciones, bienes económicos y/o materiales, quienes la integran se caracterizan por la reiterada constancia, eficiencia y gravedad de sus acciones delictivas, ya que los delitos cometidos por estas organizaciones delictivas en la mayoría de los casos son perpetradas previo a un plan estratégico que consta de diferentes etapas y de entre estas, se encuentra la de recabar información respecto al ilícito y sus víctimas, con la que se puede deducir vulnerabilidades. Si la información que se proporciona se hiciera pública, aumentaría las probabilidades de éxito del plan de estos grupos, ya que de entre sus ventajas cuentan con la discreción y en muchos de los casos con suficiente tiempo y delinquentes para realizar el plan, sin que la víctima, en la mayoría o en todos los casos, previa a la afectación no se haya enterado de esto, siendo ahí donde radica esencialmente el interés de la ley, al evitar la publicación de este tipo de datos, ya que al contar con escoltas se realiza con el fin preventivo y evitar ser el objetivo de la delincuencia organizada. Por lo anterior el revelar la información atentaría en contra de las garantías que consagran la Ley aplicable a la Materia, cabe citar de entre otra lo que señala el artículo 17 que de entre otra indica: Es información reservada aquella información pública, cuya difusión, comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona ... cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de impartición de la justicia.

Es por lo que en mérito de lo antes expuesto y del análisis lógico jurídico efectuado, de revelarse la información solicitada se considera que se originarían sustancialmente los siguientes daños:

**DAÑO PROBABLE.-** Se configuraría que al dar a conocer la información solicitada, relacionada con escoltas que conformaron el esquema de seguridad de quienes fueron identificados como Diplomáticos, se estarían revelando datos que en un momento dado podrían nulificar, o en su caso disminuir en gran cantidad la eficiencia de la seguridad que se brinda actualmente en esquemas de protección similares, y ello podría ocasionar un riesgo para su seguridad e incluso su vida, así como a su entorno familiar y social, de igual manera para las personas que brindan la protección, en este caso personal operativo de la Secretaría de Seguridad; por tal motivo y dada la naturaleza de la información a la cual se pretende tener acceso, debe considerarse que los servicios de protección deben de realizarse con el mayor sigilo y discreción posible, a fin de garantizar al máximo la eficaz ejecución de las medidas de protección y seguridad que se implementan; y si personas no autorizadas tienen acceso a dicha información, se facilitaría que grupos de delincuencia organizada lleven a cabo actos ilícitos, poniéndose así, en inminente peligro la vida o integridad física de los sujetos protegidos, así como del personal operativo de esta Institución que brinda sus servicios como escoltas; pues se permitiría saber el esquema de seguridad, con lo que se pudieran hacer estudios de oportunidad para materializar conductas delictivas en su agravio; y generar incluso hasta la pérdida de vidas humanas, situación que no se descarta que pudiera repercutir en la ausencia de inversiones financieras de diversos gremios, pudiendo generar una inercia o detrimento en el desarrollo económico en la Entidad. Además, debe enfatizarse que la Secretaría de Seguridad entre sus atribuciones principales tiene la de adoptar las medidas necesarias a fin de preservar la seguridad y la paz social, objetivo específico de las medidas de gobierno, en materia de seguridad pública, por lo que se insiste que el interés particular no puede prevalecer sobre el interés común.

**DAÑO PRESENTE.-** El otorgar la información solicitada, traería como consecuencia la posibilidad de que grupos transgresores de la Ley estuvieran en posibilidad de contar con ciertos datos inherentes al esquema de protección implementado a favor de quienes fueron identificados como Diplomáticos, permitiéndose con ello, que dichos grupos de



delincuencia organizada puedan planear y ejecutar actos delictivos que pudieran poner en riesgo su seguridad, e incluso del personal operativo que brindó esos servicios de protección e incluso de la sociedad civil; por otro lado se estaría revelando información relativa a la capacidad operativa estrechamente relacionada con protección personal preventiva de los antes citados, pues no se puede perder de vista que las dinámicas delictivas utilizadas por grupos de delincuencia organizada, en últimas fechas no están dirigidas única y exclusivamente para el ámbito de seguridad pública, procuración y administración de justicia, pues cualquier persona puede ser objeto de una agresión, haciendo referencia de manera enunciativa mas no limitativa, que pueden ser víctimas de hechos delictivos como: extorsión, secuestro, tentativa de homicidio, robo calificado los atentados y pérdidas humanas. Ahora bien, se reitera el riesgo inminente a una persona, grupo o sector, por lo tanto, no se justifica que el interés particular de una persona, pueda superar el interés colectivo que tiene la ciudadanía de que se preserve la seguridad en el Estado, que es la vida, y un interés general como lo es el orden y la paz social; siendo menester mencionar que la Secretaría de Seguridad entre sus obligaciones tiene la de garantizar y otorgar servicio de protección a determinadas personas, cuando se reúnan los requisitos correspondientes, y la seguridad de las mismas, podría verse en riesgo de suministrarse datos que permitan identificar ciertas particularidades del esquema de protección de quienes fueron identificados como Diplomáticos.

**DAÑO ESPECÍFICO.-** Resulta del hecho de que de divulgar la información solicitada, esta Dependencia infringiría la normativa que le es aplicable como sujeto obligado, en razón de que la misma encuadra dentro de los supuestos para considerarla información reservada, asimismo se estaría transgrediendo un derecho fundamental a la privacidad de las personas, al proporcionarse información reservada de la cual no se cuenta con una autorización previa para ministrarla, no descartándose que se pudiera actualizar una responsabilidad administrativa y hasta penal, en razón de que existen diversos dispositivos legales que obligan a manejarla bajo los principios de reserva y confidencialidad, pues se insiste que no obstante que se aplican recursos públicos para la materialización de dicho servicio, no significa que este sujeto obligado tenga atribuciones para hacer público un dato que pudiese poner en inminente riesgo la vida, la seguridad, la salud y hasta el patrimonio de una persona; pues se estaría entregando información sustancial que en un momento dado pudiera ser utilizada por algún sujeto transgresor de la ley que conocería datos que le permitirían deducir cual es el criterio institucional en ese tipo de casos, para la asignación de elementos operativos, y esos datos en consecuencia, podrían ser objeto de un estudio de oportunidad para determinar por exclusión, que personas cuentan con la citada protección, haciéndolos con ello, susceptibles de ser objeto de cualquier atentado contra su integridad física y su vida, pudiéndose ocasionar que en determinado momento se encuentren desprotegidos y se vulnere en consecuencia su seguridad, pues se estaría dando información valiosa a utilizarse en la planeación de estrategias encaminadas a causar un daño a la persona, ocasionando una alteración al orden y la paz social en esta Entidad Federativa.

Como colofón a los argumentos anteriores, solicito se ponderen los eventos que han venido suscitándose que han vulnerado parcialmente la paz en el Estado, y que es reflejo del clima de inseguridad que a nivel nacional se está presentando actualmente, que obliga a las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno, a redoblar sus esfuerzos para lograr obtener seguridad pública en los Municipios, en la Entidad y en todo el País, lo cual se vería mermado si se revelaran los datos que se precisan como reservados.

Sin perjuicio de lo anterior, la información solicitada se encuentra a disposición del órgano de transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad, para el caso que al analizarla arribe a una conclusión diversa.

**INCISO I).- PRUEBA DE DAÑO REFERENTE A "SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL", QUE SE MENCIONA EN LA TABLA QUE SE ANEXA.**

**Tomando en cuenta que una parte de la información solicitada en el inciso e), es la referente a integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, a manera ad cautelam, solicito se considere que la misma tiene el carácter de RESERVADA y CONFIDENCIAL y que por ende, no debe ser proporcionada al solicitante, y como medida de control excepcional, pido además que por razones de seguridad se mantenga en el lugar en el que se encuentra actualmente, para impedir que personas no autorizadas puedan acceder a la misma, y así evitar que pueda verse comprometida la seguridad e integridad física del personal que presta sus servicios como escolta, en razón de que de revelarse cualquier dato relacionado con ese rubro, se pondría en riesgo la seguridad de personas que en la actualidad reciben ese tipo de servicios, al permitirse conocer la estrategia que normalmente se implementa en ese tipo de casos, es decir, con información de hechos pasados, puede realizarse una proyección hacia el presente, que permitiría implementar esquemas tácticos de ataque por parte de personas dedicadas a delinquir; por ello es que mi solicitud de reserva la fundo en lo dispuesto en los artículos 6° la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los numerales 17 punto 1 fracción I, inciso a), c) y f); así como los lineamientos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, NOVENO, DECIMO CUARTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO SEXTO, CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, emitidos mediante Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco", el día 28 veintiocho de mayo del año 2014 dos mil catorce, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 10 diez de junio de ese mismo año, que establecen las bases y directrices por las cuales habrá de negarse información o restringirse temporalmente su acceso.**



En ese orden de ideas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta autoridad funda su solicitud de RESERVA, valorando los siguientes supuestos: ¿Qué bien jurídico tutelado es más valioso?, el del ciudadano solicitante de la petición para tener acceso a la información pública o el derecho a la vida y la protección de su seguridad e integridad que tienen algunos integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social a quienes se brindó protección especial, que es también un bien jurídico tutelado por la Ley.

Aunado a lo anterior, la improcedencia para entregar la información señalada consiste también en que una vez proporcionada **no se puede tener control del manejo que se le daría a la misma**, existiendo la probabilidad de que pudiera llegar a manos de personas que se dediquen a delinquir o que tengan algún interés de atentar en contra de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social, que recibieron protección o de cualquiera de los elementos operativos que formaron parte de su esquema de seguridad, ya que el revelar cualquier dato inherente a ese rubro tan sensible, permitiría establecer una estrategia suficiente para posibilitar un daño en su contra, e incluso a sus allegados, es decir, se pondría en desventaja al personal operativo que les brinda protección, porque los posibles agresores contarían con información esencial para planear con anticipación sus actos ilícitos; por lo tanto esta información no debe ser pública, ya que esto aumentaría el riesgo para que la delincuencia organizada incremente su eficiencia en caso de atentar en contra de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social, que recibieron protección especial, y del personal destinado a su protección, y por lo tanto en contra de las estrategias en materia de seguridad pública que son implementadas para mantener el orden y la seguridad en este Estado, aunado a lo anterior se violentaría lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de la materia, ya que señala que el hecho de publicar este tipo de información compromete la seguridad en esta Entidad, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, así mismo pone en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; y por lo tanto causa un perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, así como a las estrategias en materia de seguridad Pública, es por lo que se deberá negar su acceso o entrega de información reservada, lo anterior se justifica por encontrarse dentro de las hipótesis de reserva de la ley de la materia ya que la revelación de dicha información atenta efectivamente el interés público protegido por la ley, además que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Bajo este enfoque, para esta Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es más valiosa la vida de las personas, que el derecho fundamental de un ciudadano para conocer información, datos y detalles que puedan en un momento dado poner en riesgo la vida de otras personas o su integridad física, lo anterior sin dejar de considerar también que la integridad física y la vida de los mismos es un bien jurídico tutelado que debe ponderarse, en contraposición con la intención del solicitante de información.

En ese sentido, se insiste que la información solicitada, contiene datos valiosos que representan información sensible, que de obtenerse pudiera ser utilizado por individuos u organizaciones delictivas, lo que les posibilitaría para perpetrar alguna amenaza que pudiese poner en riesgo la integridad del personal de la Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social que recibió protección y la de los propios elementos asignados a dichos dispositivos de seguridad.

Bajo el anterior enfoque, cabe señalar que el derecho de acceder a la información pública, se encuentra limitado y tiene determinadas excepciones, como la que nos ocupa en este caso particular, que está respaldada en el texto del criterio P.LX/2000, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página 74, del Tomo XI, correspondiente al mes

de abril del 2000, novena época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

En razón de lo anterior se recalca que de entregarse la información se violentarían además, los derechos de aquellos integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social, que recibieron protección, ya que se estaría publicando información esencialmente reservada, que incluso podría violar el derecho de protección de datos personales y se permitiría tener acceso a ciertos datos que forman parte de estrategias de seguridad, lo que conlleva un grave riesgo, ya que



una vez publicada esa información referente a personal que laboró como escoltas en el esquema de seguridad que se implementó a favor de algunos integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social, no es posible tener control del manejo que se le daría a la misma, resultando ser de suma utilidad para la delincuencia organizada, ya que al contar con esos datos podrían deducir la capacidad de defensa y/o de repeler un ataque o atentado, pudiéndose establecer un plan de afectación con mayor certeza de éxito, ya que se proyectarían sus puntos vulnerables y/o sus fortalezas en el aspecto de seguridad, siendo de suma importancia en caso de pretender alguna afectación en contra de éstos, así como para las personas con las que comúnmente tienen trato. En el mismo tenor, no se tiene la certeza del manejo que se le puede dar a la información solicitada porque, como es sabido, de entre los diferentes grupos sociales que conforman esta entidad, se encuentran la delincuencia organizada, que es integrada por personas que en su habitualidad de vida, se dedican a delinquir haciendo de esto una constante para obtener, en la mayoría de casos y sin importarles las afectaciones, bienes económicos y/o materiales, quienes la integran se caracterizan por la reiterada constancia, eficiencia y gravedad de sus acciones delictivas, ya que los delitos cometidos por estas organizaciones delictivas en la mayoría de los casos son perpetradas previo a un plan estratégico que consta de diferentes etapas y de entre estas, se encuentra la de recabar información respecto al ilícito y sus víctimas, con la que se puede deducir vulnerabilidades. Si la información que se proporciona se hiciera pública, aumentaría las probabilidades de éxito del plan de estos grupos, ya que de entre sus ventajas, cuentan con la discreción y en muchos de los casos con suficiente tiempo y delincuentes para realizar el plan, sin que la víctima, en la mayoría o en todos los casos, previa a la afectación no se haya enterado de esto, siendo ahí donde radica esencialmente el interés de la ley, al evitar la publicación de este tipo de datos, ya que al contar con escoltas se realiza con el fin preventivo y evitar ser el objetivo de la delincuencia organizada. Por lo anterior el revelar la información atentaría en contra de las garantías que consagran la Ley aplicable a la Materia, cabe citar de entre otra lo que señala el artículo 17 que de entre otra indica: Es información reservada aquella información pública, cuya difusión, comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona ... cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de impartición de la justicia.

Es por lo que en mérito de lo antes expuesto y del análisis lógico jurídico efectuado, de revelarse la información solicitada se considera que se originarían sustancialmente los siguientes daños:

**DAÑO PROBABLE.-** Se configuraría que al dar a conocer la información solicitada, relacionada con escoltas que conformaron el esquema de seguridad que se implementó a favor de integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social, se estarían revelando datos que en un momento dado podrían nulificar, o en su caso disminuir en gran cantidad la eficiencia de la seguridad que se brinda, y ello podría ocasionar un riesgo para su seguridad, de igual manera para las personas que brindan la protección, en este caso personal operativo de la Secretaría de Seguridad; por tal motivo y dada la naturaleza de la información a la cual se pretende tener acceso, debe considerarse que los servicios de protección deben de realizarse con el mayor sigilo y discreción posible, a fin de garantizar al máximo la eficaz ejecución de las medidas de protección y seguridad que se implementan; y si personas no autorizadas tienen acceso a dicha información, se facilitaría que grupos de delincuencia organizada lleven a cabo actos ilícitos, poniéndose así, en inminente peligro la vida o integridad física de los sujetos protegidos, así como del personal operativo de esta Institución que brinda sus servicios como escoltas; pues se permitiría saber el esquema de seguridad, con lo que se pudieran hacer estudios de oportunidad para materializar conductas delictivas en su agravio; y generar incluso hasta la pérdida de vidas humanas, situación que no se descarta que pudiera repercutir en la ausencia de inversiones financieras de diversos gremios, pudiendo generar una inercia o detrimento en el desarrollo económico en la Entidad. Además, debe enfatizarse que la Secretaría de Seguridad entre sus atribuciones principales tiene la de adoptar las medidas necesarias a fin de preservar la seguridad y la paz social, objetivo específico de las medidas de gobierno, en materia de seguridad pública, por lo que se insiste que el interés particular no puede prevalecer sobre el interés común.

**DAÑO PRESENTE.-** El otorgar la información solicitada, traería como consecuencia la posibilidad de que grupos transgresores de la Ley estuvieran en posibilidad de contar con ciertos datos inherentes al esquema de protección implementado a favor de determinados integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social, permitiéndose con ello, que dichos grupos de delincuencia organizada puedan planear y ejecutar actos delictivos que pudieran poner en riesgo su seguridad, e incluso del personal operativo que brindó ese servicio de protección e incluso de la sociedad civil; por otro lado se estaría revelando información relativa a la capacidad operativa estrechamente relacionada con protección personal preventiva de los antes citados, pues no se puede perder de vista que las dinámicas delictivas utilizadas por grupos de delincuencia organizada, en últimas fechas no están dirigidas única y exclusivamente para el ámbito de seguridad pública, procuración y administración de justicia, pues cualquier persona puede ser objeto de una agresión, haciendo referencia de manera enunciativa mas no limitativa, que pueden ser víctimas de hechos delictivos como: extorsión, secuestro, tentativa de homicidio, robo calificado los atentados y pérdidas humanas. Ahora bien, se reitera el riesgo inminente a una persona, grupo o sector, por lo tanto, no se justifica que el interés particular de una persona, pueda superar el interés colectivo que tiene la ciudadanía de que se preserve la seguridad en el Estado, que es la vida, y un interés general como lo es el orden y la paz social; siendo menester mencionar que la Secretaría de Seguridad entre sus obligaciones tiene la de garantizar y otorgar servicio de protección a determinadas personas, cuando se reúnan los requisitos correspondientes, y la seguridad de las mismas, podría verse en riesgo de suministrarse datos que permitan identificar ciertas particularidades de los esquemas de protección que la Secretaría de Seguridad.



**DAÑO ESPECÍFICO.-** Resulta del hecho de que de divulgar la información solicitada, esta Dependencia infringiría la normativa que le es aplicable como sujeto obligado, en razón de que la misma encuadra dentro de los supuestos para considerarla información reservada, asimismo se estaría transgrediendo un derecho fundamental a la privacidad de las personas, al proporcionarse información reservada de la cual no se cuenta con una autorización previa para ministrarla, no descartándose que se pudiera actualizar una responsabilidad administrativa y hasta penal, en razón de que existen diversos dispositivos legales que obligan a manejarla bajo los principios de reserva y confidencialidad, pues se insiste que no obstante que se aplican recursos públicos para la materialización de dicho servicio, no significa que este sujeto obligado tenga atribuciones para hacer público un dato que pudiese poner en inminente riesgo la vida, la seguridad, la salud y hasta el patrimonio de una persona; pues se estaría entregando información sustancial que en un momento dado pudiera ser utilizada por algún sujeto transgresor de la ley que conocería datos que le permitirían deducir cual es el criterio institucional en ese tipo de casos, para la asignación de elementos operativos, y esos datos en consecuencia, podrían ser objeto de un estudio de oportunidad para determinar por exclusión, que personas cuentan con la citada protección, haciéndolos con ello, susceptibles de ser objeto de cualquier atentado contra su integridad física y su vida, pudiéndose ocasionar que en determinado momento se encuentren desprotegidos y se vulneren en consecuencia su seguridad, pues se estaría dando información valiosa a utilizarse en la planeación de estrategias encaminadas a causar un daño a la persona, ocasionando una alteración al orden y la paz social en esta Entidad Federativa.

Como colofón a los argumentos anteriores, solicito se ponderen los eventos que han venido suscitándose que han vulnerado parcialmente la paz en el Estado, y que es reflejo del clima de inseguridad que a nivel nacional se está presentando actualmente, que obliga a las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno, a redoblar sus esfuerzos para lograr obtener seguridad pública en los Municipios, en la Entidad y en todo el País, lo cual se vería mermado si se revelaran los datos que se precisan como reservados.

Sin perjuicio de lo anterior, la información solicitada se encuentra a disposición del órgano de transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad, para el caso que al analizarla arribe a una conclusión diversa.

#### **RESPECTO AL SEXENIO DEL LICENCIADO JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ:**

A continuación se insertan los fundamentos y razonamientos jurídicos que sustentan la petición de **reserva y confidencialidad que se hizo en cuanto a la solicitud de información por lo que ve al sexenio del Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Ex Gobernador del Estado de Jalisco**, con excepción de lo concerniente a los incisos b, c y d; por lo tanto la información antes especificada, consistente en: **"e) Qué personas contaron con servicio de escolta gratuito en dicho sexenio, considerando la totalidad de personas con este servicio, tanto funcionario, ex funcionarios, particulares y cualquier otra persona, precisando por cada persona: i. Nombre y cargo o función. ii. De qué fecha a qué fecha tuvo escoltas. iii. Motivo por el que se le asignó escoltas. iv. Cantidad de escoltas asignados. v. Cuántos vehículos tuvo asignados para sus escoltas..." (sic); se clasifica como RESERVADA y CONFIDENCIAL**, y que, como medida de control excepcional, por razones de seguridad se mantenga en el lugar en el que se encuentra actualmente, para impedir que personas no autorizadas puedan acceder a la misma, y así evitar que pueda verse comprometida la seguridad e integridad física del personal que presta sus servicios como escolta y de los sujetos a quienes protegen, en razón de que de revelarse los datos que el solicitante menciona, se podría deducir el criterio institucional que se tiene para la asignación de escoltas, derivado de una proyección y cálculo realizado a partir de esa información pasada, como una referencia de lo que se realiza en el presente, que permitiría tener certeza sobre la cifra de elementos que usualmente se designan para ese fin, y podría determinarse la cantidad de posibles agresores que sería suficiente para vulnerar los esquemas de seguridad que son implementados para brindar seguridad, lo que pondría en peligro la seguridad física, la integridad e incluso la vida, tanto del personal desplegado como escolta, como de los sujetos protegidos, y se impactaría de manera indirecta, en la capacidad de respuesta de los elementos operativos asignados a esas labores, en perjuicio del cumplimiento de sus objetivos, generando a su vez la posibilidad de aplicar estrategias delictivas tendientes a menoscabar, dificultar o impedir los diseños operativos del personal de seguridad, al tener la posibilidad de determinar con un alto grado de certeza, la capacidad de reacción de los mismos; lo anterior acordea lo dispuesto en los artículos 6° la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los numerales 17 punto 1 fracción I, inciso a), c) y f); así como los lineamientos **PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, NOVENO, DECIMO CUARTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO SEXTO, CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO** de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, emitidos mediante Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, el día 28 veintiocho de mayo del año 2014 dos mil catorce, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 10 diez de junio de ese mismo año, que establecen las bases y directrices por las cuales habrá de negarse información o restringirse temporalmente su acceso.

En ese orden de ideas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta autoridad funda su solicitud de RESERVA, valorando los siguientes supuestos: ¿Qué bien jurídico tutelado es más valioso?, el del ciudadano solicitante de la petición para tener acceso a la información pública o el de la persona dedicada a vigilar, conservar y mantener la seguridad en el Estado, así



como la integridad física y en algunos casos hasta la vida de los sujetos protegidos, que es también en un bien jurídico tutelado por la Ley.

Concretamente el proporcionar este tipo de información, podría traer en la actualidad consecuencias de difícil reparación como lo es la pérdida de vidas humanas, inestabilidad de instituciones del estado de Jalisco y de instituciones de la sociedad civil, aunado a que se puede afectar a la integridad física de los sujetos protegidos que realizan o realizaron labores estratégicas en la Entidad o dentro del territorio Nacional, para quienes se justifica la asignación de escoltas para que resguarden su integridad, por lo tanto su integridad depende en la medida de la capacidad de las personas asignadas para el resguardo de ellos y el dar a conocer la cantidad de personas que tienen la consigna de resguardarlos, acercaría datos a miembros de la delincuencia organizada o personas con intereses ilegales, que podrían deducir el estado de fuerza con que cuentan para su resguardo, por lo cual conllevaría tomar ventajas para atentar en contra de ellos y con ello desestabilizar las acciones tendientes a garantizar la seguridad con la que cuentan algunas personas y en consecuencia la seguridad pública.

Aunado a lo anterior, la improcedencia para entregar la información señalada consiste también en que una vez proporcionada **no se puede tener control del manejo que se le daría a la misma**, existiendo la probabilidad de que pudiera llegar a manos de personas que se dediquen a delinquir o que tengan algún interés de atentar en contra de la institución, ya que al conocer la cantidad de elementos de seguridad que se encuentran asignados como escoltas, aun siendo información en el pasado, permitiría proyectar la estrategia que se adopta institucionalmente en este tipo de servicios, y en consecuencia deducir la capacidad de defensa y/o de repeler un ataque o atentado, por lo tanto esta información no debe ser pública ya que aumenta el riesgo para que la delincuencia organizada incremente su eficiencia en caso de atentar en contra del personal que la integra, y por lo tanto en contra de las estrategias en materia de seguridad pública que son implementadas para mantener el orden y la seguridad en este Estado, aunado a lo anterior se violentaría lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de la materia, ya que señala que el hecho de publicar este tipo de información compromete la seguridad en esta Entidad, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, así mismo pone en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; y por lo tanto causa un perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, así como a las estrategias en materia de seguridad Pública, es por lo que se deberá negar su acceso o entrega de información reservada, lo anterior se justifica por encontrarse dentro de las hipótesis de reserva de la ley de la materia ya que la revelación de dicha información atenta efectivamente el interés público protegido por la ley, además que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Cabe reiterar que al revelar la información solicitada, podría ponerse en riesgo no solo la vida de los sujetos protegidos o la de sus protectores, también la de sus familiares, allegados e incluso en un determinado caso, la de las personas que se encuentren presentes en caso de que alguno de ellos sufra algún atentado, no descartándose que por exclusión los infractores de la ley, pudieran concluir el número de individuos agresores que sería suficiente para superar el esquema de seguridad implementado a favor de determinados sujetos protegidos, y pudieran también inferir quien no trae dicha protección, porque en base a deducciones, podrían determinar el número aproximado de elementos operativos de la corporación que estaban asignados como escoltas, en comparación con el total de los que le integraban, y entonces, obtener una cifra en proporción del número de elementos que eran asignados a ese tipo de labores, e inferir de manera aproximada cuales son las tendencias que se siguen incluso actualmente para la asignación de escoltas, en cuanto a número de elementos se refiere.

Bajo este enfoque, para esta Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es más valiosa la vida de las personas, que el derecho fundamental de un ciudadano para conocer información, datos y detalles que puedan en un momento dado poner en riesgo la vida de otras personas o su integridad física, lo anterior sin dejar de considerar también que la integridad física y la vida de los mismos es un bien jurídico tutelado que debe ponderarse, en contraposición con la intención del solicitante de información.

En ese sentido, se insiste que la información solicitada, contiene datos valiosos que representan el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad que en un momento dado se destinó a labores de escoltas durante el periodo de tiempo precisado por el solicitante, que de obtenerse pudiera ser utilizado por individuos u organizaciones delictivas para inferir o deducir cual es la política o la tendencia que en ese rubro se tiene para designar ese tipo de servicios, y por consecuencia esos individuos contarían con tiempo suficiente para realizar análisis minuciosos, comparaciones, asociaciones o deducciones para afectar, neutralizar, superar la acción y reacción de los elementos que se despliegan a ese tipo de funciones, lo que les posibilitaría para perpetrar alguna amenaza que pudiese poner en riesgo la integridad de los sujetos protegidos y la de los propios elementos asignados a dichos dispositivos de seguridad.

Bajo el anterior enfoque, cabe señalar que el derecho de acceder a la información pública, se encuentra limitado y tiene determinadas excepciones, como la que nos ocupa en este caso particular, que está respaldada en el texto del criterio P.LX/2000, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página 74, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del 2000, novena época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última



parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

En razón de lo anterior se recalca que de entregarse la información se violentarían además, los derechos de las personas que cuentan con este servicio y los de quienes lo otorgan, ya que se estaría publicando información esencialmente confidencial y reservada, violentando el derecho de protección de datos personales y se permitiría tener acceso a estrategias de seguridad que consagran las diversas leyes y reglamentos aplicables a la materia, tratándose de la protección de este tipo de datos, conllevando un grave riesgo ya sea de la persona que cuenta con estos, así como del personal operativo que realiza esta función, ya que una vez publicada el número y la lista de estas personas, no es posible tener control del manejo que se le daría a la misma, resultando ser de suma utilidad para la delincuencia organizada, ya que al ser identificados o tener los elementos esenciales para hacer una proyección, serían blanco de este sector delictivo, porque al contar con este servicio, en la mayoría de los casos, se deduce que cuentan con considerables recursos económicos y/o realizan funciones de suma importancia para algún sector de la sociedad en la que se incluye la seguridad pública, resultando con lo anterior, que quienes pretenden hacerles un daño al conocer el número de personas que cuentan con seguridad personal, nombre y el número de elementos operativos que brindan protección personal, podrían deducir la capacidad de defensa y/o de repeler un ataque o atentado, pudiéndose establecer un plan de afectación con mayor certeza de éxito, ya que se proyectarían sus puntos vulnerables y/o sus fortalezas en el aspecto de seguridad, siendo de suma importancia en caso de pretender alguna afectación en contra de éstos, así como para las personas con las que comúnmente tienen trato. Además cabe señalar que todos los ciudadanos tienen el derecho a que sus datos personales no sean publicados ya sea total o parcialmente, de acuerdo a las excepciones que la propia ley señala, siendo estos argumentos suficientes para evitar la entrega de la información que aquí nos ocupa, existiendo la probable excepción de que alguno de estos autorice la publicación de sus datos personales y se especifique cuales, sin embargo este sujeto obligado no cuenta con documento que manifieste lo anterior. En el mismo tenor, no se tiene la certeza del manejo que se le puede dar a la información solicitada porque, como es sabido, de entre los diferentes grupos sociales que conforman esta entidad, se encuentran la delincuencia organizada, que es integrada por personas que en su habitualidad de vida, se dedican a delinquir haciendo de esto una constante para obtener, en la mayoría de casos y sin importarles las afectaciones, bienes económicos y/o materiales, quienes la integran se caracterizan por la reiterada constancia, eficiencia y gravedad de sus acciones delictivas, ya que los delitos cometidos por estas organizaciones delictivas en la mayoría de los casos son perpetradas previo a un plan estratégico que consta de diferentes etapas y de entre estas, se encuentra la de recabar información respecto al ilícito y sus víctimas, con la que se puede deducir vulnerabilidades del número de personas que tiene dicha protección, así como en el caso de cada persona que cuenta con la citada protección y la cantidad de elementos operativos; permitiéndose con ello además sacar por exclusión quien o quienes no cuentan con dicha protección personal preventiva, siendo información que al ser incluida en su estrategia de afectación, aumenta las probabilidades de éxito del plan de estos grupos, ya que de entre sus ventajas, cuentan con la discreción y en muchos de los casos con suficiente tiempo y delinquentes para realizar el plan, sin que la víctima, en la mayoría o en todos los casos, previa a la afectación no se haya enterado de esto, siendo ahí donde radica esencialmente el interés de la ley, al evitar la publicación de este tipo de datos, ya que al contar con escoltas se realiza con el fin preventivo y evitar ser el blanco de la delincuencia organizada. Por lo anterior el revelar la información atentaría en contra de las garantías que consagran la Ley aplicable a la Materia, cabe citar de entre otra lo que señala el artículo 17 que de entre otra indica: Es información reservada aquella información pública, cuya difusión, comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona ... cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de impartición de la justicia... adicionalmente, los datos personales se traducen en Derechos de la Personalidad, así como en información privada cuya protección y regulación se encuentra establecida entre otros ordenamientos legales, tal es el caso del Código Civil para el Estado de Jalisco, que establece en sus numerales 24, 25, 28, 34, 35, 40 Bis 3, 40 Bis 9 y 40 Bis 14 que a manera de resumen se indica: que los derechos de personalidad, tutelan y protegen el disfrute que tiene el ser humano, como integrante de un contexto social, en sus distintos atributos, esencia y cualidades, con motivo de sus interrelaciones con otras personas y frente al Estado, así mismo estos derechos de personalidad, por su origen, naturaleza y fin, no tienen más limitación que los derechos de terceros, la moral y las buenas costumbres, como consecuencia, deben ser respetados por las autoridades y particulares, es por lo que toda persona, que incluyen las personas que cuentan con este servicio, tienen derecho a que se respete, de entre otros su nombre, que se encuentra íntimamente ligado a su vida privada y familiar, y por lo tanto la violación de los derechos de personalidad, como lo es la publicación, bien sea porque produzcan daño físico, moral y/o económico, es fuente de obligaciones en los términos del código en cita, así mismo este ordenamiento específica que los datos personales, las referencias personales de cualquier tipo, tales como nombre, domicilio, estado civil, empleo, escolaridad o cualquier otra que describa la situación o estado de la persona con relación a su vida familiar, social o laboral, reiterando los datos personales, no pueden ser utilizados para finalidades distintas a las que motivaron su obtención y el uso de estos es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, como es el caso que





nos ocupa y que si bien el recurrente insiste a que sean proporcionados a terceros esto conlleva que sean publicados y en su caso pretende ejercer un derecho a obtener información pública, en virtud de que al proporcionar o publicar la cantidad de elementos operativos de esta Institución que fungen como escoltas, número de escoltados, y sus nombres; así como la fecha de asignación de manera individualizada y justificación de dicha designación conlleva hacer del conocimiento público, dándose a conocer y/o deducirían condiciones estratégicas que incluyen conocer el número de personas que cuenta con seguridad, estado de fuerza general para esa actividad, así como el número de elementos con el que cuenta cada uno de estos y por lo tanto su capacidad de repeler un ataque al escoltado, poniendo en riesgo de entre otra su integridad física, así como el personal operativo que realiza ese servicio e inclusive a terceras personas que se encuentren a su alrededor al momento del ataque.

Es por lo que en mérito de lo antes expuesto y del análisis lógico jurídico efectuado, de revelarse la información solicitada, respecto al sexenio del **Maestro JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DÍAZ**, consistentes en: **"...Pido lo siguiente en archivo Excel como datos abiertos, para ser entregado por Infomex o a mi correo electrónico. Se me informe lo siguiente sobre la Secretaría de Seguridad Pública, con respecto a los sexenios de los ex gobernadores... y Aristóteles Sandoval precisando por cada sexenio estatal: e) Qué personas contaron con servicio de escolta gratuito en dicho sexenio, considerando la totalidad de personas con este servicio, tanto funcionario, ex funcionarios, particulares y cualquier otra persona, precisando por cada persona: i. Nombre y cargo o función. ii. De qué fecha a qué fecha tuvo escoltas. iii. Motivo por el que se le asignó escoltas. iv. Cantidad de escoltas asignados. v. Cuántos vehículos tuvo asignados para sus escoltas..." (sic).** se considera que se originarían sustancialmente los siguientes daños:

**DAÑO PROBABLE.-** Se configuraría al dar a conocer la información solicitada, respecto al sexenio del **Maestro JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DÍAZ**, consistentes en: **"...Pido lo siguiente en archivo Excel como datos abiertos, para ser entregado por Infomex o a mi correo electrónico. Se me informe lo siguiente sobre la Secretaría de Seguridad Pública, con respecto a los sexenios de los ex gobernadores... y Aristóteles Sandoval precisando por cada sexenio estatal: e) Qué personas contaron con servicio de escolta gratuito en dicho sexenio, considerando la totalidad de personas con este servicio, tanto funcionario, ex funcionarios, particulares y cualquier otra persona, precisando por cada persona: i. Nombre y cargo o función. ii. De qué fecha a qué fecha tuvo escoltas. iii. Motivo por el que se le asignó escoltas. iv. Cantidad de escoltas asignados. v. Cuántos vehículos tuvo asignados para sus escoltas..." (sic).** Toda vez que al proporcionarla se estarían revelando datos que en un momento dado podrían nulificar, o en su caso disminuir en gran cantidad la eficiencia de la seguridad que se brinda a los sujetos protegidos a través de escoltas, y lo mismo ocurriría si se proporciona el número de elementos que estaban asignados como escolta en los periodos de tiempo señalados por el solicitante, ya que se estarían ventilando datos que permitirían inferir o deducir cual es la tendencia o el criterio institucional que se adopta para la designación de elementos en esos servicios, y compararlo con la cifra total del personal que integraba la corporación, datos que implícitamente podrían ser parte de estrategias y esquemas tácticos de posibles agresores, y que por consecuencia no deben divulgarse al público, toda vez que ello, podría ocasionar un riesgo para la seguridad e incluso la vida de las personas que reciben dicho servicio, así como a su entorno familiar y social, de igual manera para las personas que lo ejecutan, en este caso personal operativo de la Secretaría de Seguridad; por tal motivo y dada la naturaleza de la información a la cual se pretende tener acceso, debe considerarse que los servicios de protección deben de realizarse con el mayor sigilo y discreción posible, a fin de garantizar al máximo la eficaz ejecución de las medidas de protección y seguridad que se implementan; y si personas no autorizadas tienen acceso a dicha información, se facilitaría que grupos de delincuencia organizada lleven a cabo actos ilícitos, poniéndose así, en inminente peligro la vida o integridad física de los sujetos protegidos, así como del personal operativo de esta Institución que brinda sus servicios como escoltas; pues se permitiría de manera indirecta deducir el número de elementos que brindan ese servicio, con lo que se pudieran hacer estudios de oportunidad para materializar conductas delictivas en su agravio; y hasta la pérdida de vidas humanas, situación que no se descarta que pudiera repercutir en la ausencia de inversiones financieras de diversos gremios, pudiendo generar una inercia o detrimento en el desarrollo económico en la Entidad. Además, debe enfatizarse que la Secretaría de Seguridad entre sus atribuciones principales tiene la de adoptar las medidas necesarias a fin de preservar la seguridad y la paz social, objetivo específico de las medidas de gobierno, en materia de seguridad pública, por lo que se insiste que el interés particular no puede prevalecer sobre el interés común.

**DAÑO PRESENTE.-** El otorgar la información solicitada, la cual ya fue especificada de manera precisa en el apartado anterior, en el presente, traería como consecuencia la posibilidad de que grupos transgresores de la Ley estuvieran en posibilidad de deducir o inferir cual es la política institucional o tipo de estrategia operativa que se adopta en este tipo de asuntos, o bien inferir el criterio que se tiene para asignar el número de elementos dedicados a esta labor, lo que sería de gran utilidad para que grupos de la delincuencia organizada, conozcan cómo se integra el cuerpo de seguridad personal de los sujetos protegidos, que reciben dicho servicio por parte de personal operativo de esta Secretaría de Seguridad, o al menos saber el número de elementos, tipo de elementos, agentes y vehículos que están destinados a ésta labor, permitiéndose con ello, que dichos grupos de delincuencia organizada puedan planear y ejecutar dinámicas delictivas que pudieran poner en riesgo la seguridad de los ya citados, del personal operativo que brinda el servicio e incluso de la sociedad civil; por otro lado se estaría revelando información relativa a la capacidad operativa estrechamente relacionada con protección personal preventiva de los antes citados, pues no se puede perder de vista que las dinámicas delictivas utilizadas por grupos de delincuencia organizada, en últimas fechas no están dirigidas única y exclusivamente para el ámbito de seguridad pública, procuración y administración de justicia, pues cualquier persona puede ser objeto de



una agresión, haciendo referencia de manera enunciativa mas no limitativa, que pueden ser víctimas de hechos delictivos como: extorsión, secuestro, tentativa de homicidio, robo calificado los atentados y pérdidas humanas. Ahora bien, se reitera el riesgo inminente a una persona, grupo o sector, por lo tanto, no se justifica que el interés particular de una persona, pueda superar el interés colectivo que tiene la ciudadanía de que se preserve la seguridad en el Estado, que es la vida, y un interés general como lo es el orden y la paz social; siendo menester mencionar que la Secretaría de Seguridad entre sus obligaciones tiene la de garantizar y otorgar servicio de protección a determinadas personas, cuando se reúnan los requisitos correspondientes, y la seguridad de las mismas, podría verse en riesgo de suministrarse datos que permitan deducir o inferir cual es la forma en que se actúa para definir el número de elementos que fungirán como escolta en determinados servicios.

**DAÑO ESPECÍFICO.-** Resulta del hecho de que de divulgar la información solicitada, la cual fue especificada en el apartado que se denominó DAÑO PROBABLE, esta Dependencia infringiría la normativa que le es aplicable como sujeto obligado, en razón de que la misma encuadra dentro de los supuestos para considerarla información reservada, asimismo se estaría transgrediendo un derecho fundamental a la privacidad de las personas, al proporcionarse información reservada de la cual no se cuenta con una autorización previa para ministrarla, no descartándose que se pudiera actualizar una responsabilidad administrativa y hasta penal, en razón de que existen diversos dispositivos legales que obligan a manejarla bajo los principios de reserva y confidencialidad, pues se insiste que no obstante que se aplican recursos públicos para la materialización de dicho servicio, no significa que este sujeto obligado tenga atribuciones para hacer público un dato que pudiese poner en inminente riesgo la vida, la seguridad, la salud y hasta el patrimonio de una persona; pues se estaría entregando información sustancial que en un momento dado pudiera ser utilizada por algún sujeto transgresor de la ley que conocería datos que le permitirían deducir cual es el criterio institucional en ese tipo de casos, para la asignación de elementos operativos, y esos datos en consecuencia, podrían ser objeto de un estudio de oportunidad para determinar por exclusión, que personas cuentan con la citada protección, haciéndolos con ello, susceptibles de ser objeto de cualquier atentado contra su integridad física y su vida, pudiéndose ocasionar que en determinado momento se encuentren desprotegidos y se vulnere en consecuencia su seguridad, pues se estaría dando información valiosa a utilizarse en la planeación de estrategias encaminadas a causar un daño a la persona, ocasionando una alteración al orden y la paz social en esta Entidad Federativa.

Como colofón a los argumentos anteriores, solicito se ponderen los eventos que han venido suscitándose que han vulnerado parcialmente la paz en el Estado, y que es reflejo del clima de inseguridad que a nivel nacional se está presentando actualmente, que obliga a las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno, a redoblar sus esfuerzos para lograr obtener seguridad pública en los Municipios, en la Entidad y en todo el País, lo cual se vería mermado si se revelaran los datos que se precisan como reservados.

Lo anterior sin descartar el incumplimiento y la inobservancia de obligaciones a las que debe sujetarse esta institución en materia de información pública, así como en la violación a los principios y bases que debe aplicar en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, así como del de protección de información reservada y confidencial, contraviniendo el objeto principal de consolidar un estado de derecho, así como la privacidad de la personas, con la de manera inminente se puede poner en riesgo su integridad física y su vida.

En esta vertiente, se considera que el daño producido atenta contra el interés público protegido por ley, toda vez que con su revelación se pone en riesgo la integridad física, su vida, y el patrimonio de las personas que reciben y/o recibieron dicho servicio de protección; no descartándose que dicho daño se materialice en personas civiles que radiquen en esta entidad federativa; además que trunca, entorpece y menoscaba la capacidad de esta Institución para hacer frente a la delincuencia y, resta eficiencia y eficacia a las estrategias en materia de seguridad pública implementadas para la protección de personas que ameriten dicho servicio por parte del estado; aunado a una desestabilización en materia de seguridad pública en esta entidad federativa.

Derivado de lo anterior, es convincente enunciar que el derecho humano de acceso a la información pública **no es absoluto**, y como toda prerrogativa tiene sus limitantes; tan cierto es que el mismo numeral 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A, precisa que en principio toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. Al efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresó en la tesis 2a. XLIII/2008 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, página 733 correspondiente al mes de abril del año 2008 dos mil ocho, que el hecho de que las leyes secundarias restrinjan temporalmente el acceso a la información pública, **no constituye una violación al derecho fundamental** consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior de acuerdo con lo que a continuación se invoca:

**TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.**



El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derechos de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan restricciones a la información, no viola la garantía de acceso a la información contenida en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia, el legislador federal o local establezca las restricciones correspondientes y clasifique a determinados datos como confidenciales o reservados, con la condición de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de que se trata y la razón que motive la restricción legislativa correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, de manera que las ventajas obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que ésta implique para los titulares de la garantía individual mencionada o para la sociedad en general.

Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.

Por todo lo antes expuesto, este Órgano Colegiado justifica, con los argumentos vertidos en párrafos anteriores que la información descrita **SE MODIFICA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN LTAIP/JCGES/647/2019**, del cual se dio origen al **Recurso de Revisión 2001/2019**; ante tal virtud y en cumplimiento a la resolución emitida por el Pleno del Órgano Garante de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, se tiene a bien emitir particularmente los siguientes:

#### RESOLUTIVOS:

**PRIMERO.-** Aplicando el principio de **Máxima Publicidad**, éste Comité de Transparencia considera que no se materializan los riesgos señalados anteriormente, por lo que se tiene a bien **MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN**, debiéndose proporcionar la información que a continuación se precisa y acorde a lo informado a la Unidad de Transparencia por el Encargado de la Comisaría Jefe de la Coordinación General de Planeación Operativa de la Comisaría General de Seguridad del Estado y la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, respuestas que se tiene como fundamento para la elaboración del presente informe, lo establecido en el artículo 87 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, especialmente en lo que se destaca que **la información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el formato solicitado. No existe obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como se encuentre, debiendo ser aplicado para el cuestionamiento en el que se requiere:** "...b) Cuántos elementos o agentes de este sujeto obligado estuvieron asignados en total a funciones de escoltas en dicho sexenio. c) Del inciso anterior, se precise qué tipo de elementos o agentes fueron asignados a funciones de escoltas y cuántos por cada tipo (es decir, si eran Policías estatales, o de qué tipos). d) Cuántos vehículos en total de este sujeto obligado en total fueron utilizados para servicio de escoltas...", correspondiente a los sexenios de las administraciones del Licenciado Emilio González Márquez y el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Por otra parte y atendiendo la información con la que cuenta esta Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, a la fecha de la presentación de la solicitud de acceso a la información **LTAIP/JCGES/647/2019**, que dio inicio al Recurso de Revisión que nos ocupa **2001/2019**, se deberá de adjuntar al peticionario tabla que contiene información que fue modificada su clasificación como información reservada y confidencial, relativa a la Administración del **EX GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, LIC. EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ**; y con los cuales se da respuesta a sus pretensiones referentes a: "...e) **Qué personas contaron con servicio de escolta gratuito en dicho sexenio, considerando la totalidad de personas con este servicio, tanto funcionarios, ex funcionarios, particulares y cualquier otra persona, precisando por cada persona: i. Nombre y cargo o función; ii. De qué fecha a qué fecha tuvo escoltas; iii. Motivo por el que se le asignó escoltas; iv. Cantidad de escoltas asignados; v. Cuántos vehículos tuvo asignados...**" (SIC); en la cual es de aclararse que en la información que se adjunta se realizó una modificación de información realizada por el área generadora de los datos peticionados, a fin de que la información a proporcionarse reunieran los principios rectores de transparencia, contemplados en el numeral 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. De igual forma se deberá indicar que el número de personas que contaron con servicio de



**SEGUNDO.-** Este Comité de Transparencia, estima procedente **CONFIRMAR LA NEGATIVA AL ACCESO**, de la información que se hace consistir en: la relativa al **sexenio del Lic. EMILIO GONZÁLEZ MARQUEZ, parte de la información pretendida en el inciso e) apartado i), que se hace consistir en: "...e) Qué personas contaron con servicio de escolta gratuito en dicho sexenio, considerando la totalidad de personas con este servicio, tanto funcionarios, ex funcionarios, particulares y cualquier otra persona, precisando por cada persona: i. Nombre y cargo o función; mientras que lo relativo a la administración a cargo del Mtro. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DÍAZ, la información concerniente a: "e) Qué personas contaron con servicio de escolta gratuito en dicho sexenio, considerando la totalidad de personas con este servicio, tanto funcionarios, ex funcionarios, particulares y cualquier otra persona, precisando por cada persona: i. Nombre y cargo o función. ii. De qué fecha a qué fecha tuvo escoltas. iii. Motivo por el que se le asignó escoltas. iv. Cantidad de escoltas asignados. v. Cuántos vehículos tuvo asignados..."**; toda vez que dicha información encuadra en los supuestos de restricción en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, y de la cual se tiene a bien **CONFIRMAR LA CLASIFICACIÓN** con el carácter de **RESERVADA Y CONFIDENCIAL**, lo anterior tomando en consideración que los datos solicitados están estrechamente vinculados a personal operativo que por las actividades que desempeñan y/o desempeñó en esta Secretaría de Seguridad, no es conveniente, ni conforme a derecho proporcionar la información pretendida, en razón a ello resulta improcedente ministrar información pretendida. Por tanto, queda estrictamente prohibida su difusión, publicación, reproducción y/o acceso a persona alguna, con excepción de las autoridades competentes que, en el ejercicio de sus obligaciones y atribuciones deban o puedan tener acceso a la misma, siempre y cuando se funde, motive y/o justifique dicha necesidad; ello con fundamento de conformidad con lo que establecen los artículos 1º, 2º, 3º, 17.1 fracción I, inciso a), c) y f), 18, 20 punto 1 y 2, 21.1 fracción I, 22, 23, 25 punto 1 fracciones X y XV, 26, punto 1 fracción V, 27, 28, 30, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; **en correlación con el Decreto 25653/LX/15, que fue publicado en fecha 10 diez de Noviembre del año 2015 dos mil quince en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y que entró en vigor a partir del día 20 de Diciembre del 2015, conforme al DECRETO NÚMERO 25437/LXII/15, mediante el cual, se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 11 y 12 de su Reglamento, 8,9, 10,19 y 20 del Reglamento Marco de Información Pública, 1 punto 1 y 2, 2 punto 1 fracción III, 3 punto 1 fracción IX y X, 5 punto 1, 30, 38 y 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, 1, 2, 40 fracciones I, II y XXI, 110, 122 y 123 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1, 2, 62, 106 fracción XVIII, 150 fracción I, 151, 157 y 158, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, 24, 25, 28, 34, 35, 40 Bis 3, 40 Bis 9 y 40 Bis 14 del Código Civil para el Estado de Jalisco, así como en lo establecido en los artículos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Cuarto Fracciones I, II y III, Vigésimo Sexto, Trigésimo Primero, Fracciones I, IV, Trigésimo Tercero, Fracción I, Trigésimo Sexto, Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno, Quincuagésimo, Quincuagésimo Primero, Quincuagésimo Séptimo, Quincuagésimo Octavo, Quincuagésimo Noveno, y demás relativos y aplicables de los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, emitidos mediante Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco" el día 28 veintiocho de Mayo del año 2014 dos mil catorce, debidamente publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 10 diez de Junio del mismo año.**

**TERCERO.-** Regístrese la presente acta de modificación en el índice de información y publicarse en medios de consulta directa, tal y como lo establece el artículo 25 punto 1 fracción XI de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**CUARTO.-** Del mismo modo, este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, para que, en nombre de los integrantes de este Órgano Colegiado, en vía de cumplimiento, notifique del contenido del presente dictamen al solicitante el alcance y los resolutivos del presente **dictamen de modificación**; emita una nueva respuesta correspondiente y con ello se justifique la el cumplimiento ordenado con motivo del Recurso de Revisión que nos ocupa **2001/2019**; esto a fin de que surta los efectos legales y administrativos procedentes, debiendo considerar para ello la información proporcionada por personal de la Comisaría General de Seguridad y el Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, debiendo dar vista al Órgano Garante de su debido cumplimiento, dentro de los tres días hábiles posteriores al cumplimiento en los términos acordados.



**QUINTO.-** En cumplimiento a la obligación fundamental establecida en el numeral 8° punto 1 fracción I inciso g) de la Ley Reglamentaria del artículo 6° apartado A y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Comité de Transparencia tiene a bien instruir a la Unidad de Transparencia, para efecto de que dé publicidad a la presente acta, por ser un instrumento relativo a una reunión celebrada por un órgano colegiado; lo cual se deberá llevar a cabo con las limitaciones necesarias para evitar la difusión del nombre del solicitante.

- CÚMPLASE -

Así resolvieron por mayoría simple dos de los integrantes del Comité de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad del Estado, de conformidad con lo establecido por los artículos 28 punto 1 y 29 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 10 de su Reglamento, 13 fracción I inciso a) y b), en correlación con los numerales 15, 16 fracciones I y II del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco; se hace constar que la presente sesión se efectúa en la presencia de dos de sus integrantes que conforman el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, mismos que a continuación se enlistan:

**1.- C. LIC. OCTAVIO LÓPEZ ORTEGA LARIOS.**

Director General de Gestión Pública de la Coordinación General Estratégica de Seguridad.  
Suplente del Presidente del Comité de Transparencia y Titular del Sujeto Obligado.

**2.- C. MTRO. JAVIER SOSA PÉREZ MALDONADO.**

Titular de la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad del Estado.  
Secretario.

La presente hoja de firmas corresponde a la sesión de trabajo del Comité de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad, de fecha 28 veintiocho de Octubre del año 2019, dos mil diecinueve.

AALR / NE  
reg. SHL